

**RICARDO
RAGENDORFER**

**la secta
del gatillo**

Historia sucia de
la Policía Bonaerense

3632

RAG

Ragendorfer, Ricardo

La secta del gatillo. - 1^o ed. — Buenos Aires: Planeta,
2002.

240 p. ; 23x15 cm. — (*Espejo de la Argentina*)

ISBN 950-49-0987-6

J. Título — 1. Policía Bonaerense-Investigación

ESPEJO DE LA ARGENTINA

Diseño de cubierta: María Blanco

Diseño de interior: Grisela Aguirre

© 2002, Ricardo Ragendorfer

Derechos exclusivos de edición en castellano

reservados para todo el mundo:

©2002, Grupo Editorial Planeta S.A.I.C.

Independencia 1668, C 1100 A.B.C. Buenos Aires

1^o edición: 6.000 ejemplares

ISBN 950-49-0987-6

Impreso en Grafiner S. A.,

Lamadrid 1576, Villa Ballester,

en el mes de octubre de 2002.

Hecho el depósito que prevé la ley 11.723

Impreso en la Argentina

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico,

*A Gladys
y a nuestra hija, la pequeña Zoe*

A la memoria de Carlos Dutil

INTRODUCCIÓN

El comienzo de esta historia está situado en la trepidante primavera de 1996, tras la caída de la dupla formada por el secretario de Seguridad, Alberto Picetti, y el jefe de La Bonaerense, comisario Pedro Kiedrzyk.

Ese acto quirúrgico emprendido por el entonces gobernador Eduardo Duhalde prometía dar por concluida una avalancha de escándalos protagonizados por los efectivos de esa fuerza. El mandatario había comprendido tempranamente que allí podría estar la lápida de sus aspiraciones presidenciales. A partir de entonces, sin embargo, se desató una sinuosa trama de acciones y reacciones, de acomodamientos y desajustes, en los que su signo más visible fue el aumento geométrico del caos en el territorio provincial.

La pulseada entre los uniformados y el resto del mundo no sólo se había convertido en un problema de Estado, sino también en su gangrena. Así fue como en el transcurso del último lustro hubo varias tramas superpuestas entre sí, alimentadas por alianzas y traiciones, promesas y venganzas, en las que su denominador común más extremo solía ser la muerte.

Un verdadero thriller, pero ambientado en el universo real.

Y con un relato fragmentado en una diversidad de planos: los intereses policiales más minimalistas, sus pujas intestinas, las acciones de sus jefes para perdurar y sus mensajes al mundo civil; todo eso entrelazado con los devaneos y zozobras de los ocasionales inquilinos del poder político, quienes, por otra parte, desde siempre supieron sacar provecho de la cosecha policial.

Fondos para bolsillos particulares y campañas electorales, complicidad en los negocios turbios y mano de obra disponible, siempre fueron razones de peso.

Un verdadero thriller, pero con una composición de lugar que estira su carácter de tragedia: la enorme, casi insoslayable, crisis que sacude a los argentinos.

Ese fue durante los últimos años uno de los puntos cardinales de un país que día a día amenaza con dejar de serlo, para convertirse simplemente en un territorio poblado.

Capítulo 1

BRANCALEONE EN LAS CRUZADAS

"A mí me echan por gordo."

Comisario MARGO ARAGÓN

EL DESEMBARCO

El comisario Luis Vicat maldecía entre dientes aquel destino que le había tocado en gracia. O, mejor dicho, en desgracia. Entre su casa de La Plata y la Regional San Miguel, diariamente pasaba unas siete horas de viaje, que se sumaban a las doce de servicio, en las que ejercía el módico cargo de jefe de turno.

Parecía un personaje escapado de una novela de Alejandro Dumas: su mirada levemente melancólica, rematada por un tupido bigote de mosquetero, le confería una expresión ambigua, entre amarga y divertida. Durante gran parte de su vida policial cultivó un discreto perfil. Ya en sus tiempos de cadete en la Escuela de Oficiales Juan Vucetich se lo consideraba una rara avis entre sus pares, tal vez por su naturaleza más pensante que sanguínea.

Ese rasgo de su personalidad lo mantuvo durante tres lustros al frente de la División de Seguridad Bancaria. En ese destino se hizo diestro en la detección y el análisis de delitos económicos, especialidad en la que muchos de sus colegas no tienen demasiado roce.

Fueron años fructíferos para Vicat.

Su larga permanencia en ese destino policial le dio tiempo y oportunidad para alternar su profesión con la vida universitaria. Se recibió de abogado y de licenciado en Ciencias de la Seguridad. La División fue, además, el ámbito propicio para relacionarse con ejecutivos del mundo de las finanzas. Entre éstos se destacaba el presidente del Banco Mayo y de la DASA, Rubén Beraja.

Para entonces, Vicat ya se había ganado una larga lista de enemigos dentro de la fuerza. Entre ellos, el poderoso Pedro Kłodczyk. Cuando el "Polaco" Kłodczyk —como lo apodaban sus conocidos— se hizo cargo de La Bonaerense, Vicat sintió que se le venía la noche. Para su sorpresa, no fue exonerado, pasado a retiro ni removido de su cargo. Siguió al frente de Seguridad Bancaria, sin que los nubarrones sobre su cabeza fueran demasiado evidentes.

Era la calma que precedía a la tormenta.

A principios de 1995, mientras asistía a un congreso de seguridad en Panamá, recibió una pésima noticia. El comisario Kłodczyk le había armado una causa penal y administrativa por "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Lo acusaban de haber frenado dos expedientes del Banco Central. El motivo era otro: se había negado a dejar entrar unos cajeros automáticos Banelco que venían del exterior sin el blindaje que exigía la legislación.

Pasado a disponibilidad, Vicat fue procesado por el juez Daniel Lermanos, un magistrado estrechamente vinculado a la cúpula policial de entonces. Sin embargo, las acusaciones no resultaron convincentes y el tema no pasó a mayores. El comisario recordaría aquel episodio afirmando: "Fui sobreesido por Lermanos. Yo lo hice sin cobrarle un solo peso".

Pero la disponibilidad se estiraría durante ocho largos meses.

Recién en 1996 fue reincorporado al servicio y destinado a San Miguel. Su superior era el comisario Rubén Araneo, que había recalado en ese lejano confín tras haber violado su autonomía universitaria, en mayo de ese año, al ingresar ruidosamente en una facultad de La Plata con la Guardia de Infantería.

La relación entre ambos no fue conflictiva. Aunque por razones diferentes, los unía el estigma del destierro. Araneo le encomendó el control de los bancos de la zona. Estando al frente de esa tarea, Vicat recibió la noticia del relevo de Kłodczyk.

En el atardecer del 9 de octubre de 1996, al regresar de una de sus habituales recorridas, encontró sobre su escritorio la transcripción de un radiograma: el flamante secretario de Seguridad de la provincia, Eduardo De Lazzari, le ordenaba "presentarse en su despacho a la mañana siguiente".

La Secretaría tenía su sede en el noveno piso de una torre emplazada frente a la Catedral platense. El comisario Vicat se presentó ese jueves vestido con un traje gris claro, y lo guiaron hacia un despacho que aún no habían terminado de

ameblar.

Allí lo recibió De Lazzari. Era un hombre de baja estatura, puntillosamente engeminado, que miraba a través de unos gruesos cristales sin marco.

La reunión fue a puertas cerradas.

— Necesite que me dé una mano en la Secretaría. La situación con la policía es muy tensa — indicó el funcionario.

— ¿Una mano para qué?

De Lazzari no parecía tenerlo muy en claro. Se le había ocurrido crear un organismo especial que dependiese directamente de la Secretaría.

Vicat aceptó.

— ¿Se anima para trabajar, por ejemplo, en la causa *AMJA*?

El comisario asintió nuevamente, pero con una advertencia:

— Le aclaro, doctor, que una cosa así no se puede armar con policías comunes.

Con pocas palabras explicó que la búsqueda tendría que orientarse hacia personal sin lazos con las líneas tradicionales de "la Maldita Policía"; y remató con una condición inexcusable:

— Siempre y cuando haya respaldo político.

— Tengo todo el respaldo del Gobernador para certar hasta el fin — aseguró De Lazzari.

El Secretario estaba convencido de sus palabras, aunque en realidad Duhalde sólo le había dado tenues garantías y le aconsejó "prudencia" en el uso del bisturí.

Así nació el Área Especial, que dependía orgánicamente de la policía y operativamente de la Secretaría de Seguridad. Era el primer caso de un organismo integrado por policías que se desprendía de La Bonaerense.

Al día siguiente, cuando Vicat ya había reunido un pequeño equipo, integrado por doce hombres de su confianza, fue citado con urgencia por su nuevo jefe.

— Vea, hay que hacer un procedimiento peligroso y delicado, desde todo punto de vista — fueron sus palabras.

No agregó otros detalles.

Interpretando que el dato del operativo podría filtrarse, Vicat concentró a su gente en un garaje. Allí estuvieron todo ese viernes, pero el sábado se trasladaron a otra cochera ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen, de Lomas de Zamora, aguardando el momento de entrar en acción.

El domingo al mediodía, De Lazzari convocó nuevamente a Vicat, esta vez en su residencia particular. En esa reunión, también reservada, le dio una orden de allanamiento firmada por la jueza Silvia González.

Vicat regresó a Lomas, donde lo aguardaba su gente. Luego de retirarles los celulares, hacia las tres de la tarde, enfilaron los autos hacia el sitio del procedimiento.

Aún no sabían cuál era su misión.

Los acompañaba, a título de veedor, el jefe de asesores de De Lazzari, un veterano abogado llamado Federico Domínguez. Él y Vicat eran los únicos que estaban al tanto del objetivo.

Al cabo de un rato, uno de los efectivos no pudo evitar el comentario:

— Jefe, estamos cerca de la 1° de Avellaneda. El comisario asintió con la cabeza, sin una palabra. A los pocos minutos, el policía insistió:

— Estamos a unas cuadras de la comisaría, ¿no tendríamos que avisar? Si no, se puede armar lío...

— ¿Y por qué?

— Porque esta es la zona del "Cherizo".

— Justamente, estamos yendo a la comisaría.

— Ah... Vamos a la comisaría...

— Sí. La vamos a tomar.

El subordinado calló, lívido. Estaban metiéndose en el imperio del temido comisario Mario Rodríguez, apodado "el

Cherizo " por sus conocidos.

En tanto, sobre la vereda de una heladería situada frente a la 1^o de Avellaneda, se encontraba su titular, el comisario Fausto Cabello, sentado de espaldas a la dependencia, ante una mesita redonda y blanca. En esa tarde primaveral lucía una camisa de cobres chillones.

Cabello departía amigablemente con un narco que acababa de entregarle un ladrillo de cocaína.

El hombre miraba en dirección a la comisaría. De pronto, enarcó las cejas al ver a una quincena de tipos vestidos de civil y armados con FAL, que salían con sincronía de unos vehículos para dirigirse presurosamente hacia la sede policial. Por debajo de la mesa apuntó una pistola sobre los genitales del tembloroso comisario, recriminándose:

— ¡Hijo de puta, me entregaste! ¡Te voy a poner!

— ¡Pero de qué me estás hablando? — balbuceó Cabello, transpirando copiosamente.

— ¡Me vendiste! Hay gente armada ahí... — siguió bramando el otro, ya a punto de gatillar.

— ¡Vos estás loco!

— Entonces, beldudo, te están tomando la comisaría.

Cabello, con su camisa empapada de sudor, volteó su cabeza y brincó de su asiento para correr hacia su lugar de trabajo.

Para entonces, los hombres del Área Especial habían tomado la dependencia sin ningún tipo de resistencia. Vicat y Domínguez estaban en el despacho de Cabello, cuando súbitamente se presentó otro comisario inspector. Se trataba de Adolfo Peña Poljevich, un hombre de confianza del Cherizo. Estaba impecablemente de uniforme, pero con la chaquetilla de media estación, pese a los 35 grados de esa calurosa tarde. De mal modo le preguntó a Vicat sobre su presencia en el lugar.

— Mire, estoy haciendo un procedimiento dispuesto por una jueza — se contestó, exhibiendo la orden, pero sin dejarla leer. Peña Poljevich intentó arrebatársela. La escena fue surrealista. Ambos comisarios tironeaban de los extremos del oficio judicial.

— ¡Déme esa orden! — se exasperó el uniformado.

— ¡De ninguna manera! — se respondió el de civil dispuesto a demostrarle que contaba con órdenes para el procedimiento, pero sin revelar lo que había venido a secuestrar.

Todavía exaltado por el entredicho, Peña Poljevich se comunicó por teléfono con el Cherizo para quejarse del atropello. Dio la impresión de que su jefe lo llamó a la calma. A menos, tras cortar su comunicación, el exaltado comisario inspector optó por retirarse.

A las nueve de la noche concluyó el procedimiento.

Vicat volvió a La Plata, para entregar los frutos del allanamiento, debidamente precintados, al nuevo jefe de La Bonaerense.

El comisario Adolfo Vitelli se encontraba cenando en el lujoso comedor privado de la Jefatura y recibió al jefe de Área Especial vestido de uniforme sólo hasta los tobillos: en los pies lucía pantuflas color azul. Con esa indumentaria se hizo cargo de la caja que contenía el material secuestrado.

Vicat recordó una anécdota de ese hombre, ocurrida mucho antes en una comisaría de San Martín, donde compartía las tareas propias de los oficiales jóvenes con Mario Naldi. El "Ñeño" Naldi jugueteaba con una 9 mm cuando se le escapó un disparo que fue a dar en los glúteos de su compañero, algo que jamás se perdonó.

La vez de Vitelli le regresó al presente.

— Buena, Vicat, se agradezco. — Su tono significaba una despedida.

— No me agradezca nada; me conformo con que me firme el recibo.

Para Vicat había sido una jornada sólo comparable a la del desembarco aliado en Normandía.

II LA DEBACLE

Unos meses antes, durante el crudo invierno de 1996, la detención de doce efectivos de La Bonaerense, encabezados por un íntimo del jefe Pedro Kiedrzyk, el comisario Juan José Ribelli, puso en evidencia el estado generalizado de corrupción de la fuerza policial más numerosa del país.

La participación de algunos de sus hombres en la voladura de la *AMIA* no fue el único hecho protagonizado en ese entonces por los "Patás Negras", como cariñosamente los llaman sus colegas de la Federal.

Una cámara oculta de *Telenoche Investiga* había registrado cómo policías de *Narcotráfico Sur* cobraban protección a una banda de *dealers* que operaba en *Quilmes*. En cuestión de días, las denuncias por delitos e irregularidades policiales de diversa índole comenzaron a multiplicarse, junto con asombrosas revelaciones acerca del nivel de vida rumboso que tenían varios de sus principales jefes. Al propio Kiedrzyk se le atribuía la propiedad de cuatro chalets y catorce dúplex en la costa atlántica, una casaca en Lanús, una fábrica de busones, cinco vehículos de última generación y un avión *Cessna* con cabina modificada para transportar ferretes.

Ante la ola de denuncias, el gobernador Eduardo Duhalde adelantó la partida del "Polaco" para septiembre de ese año y anunció también el relevo del secretario de Seguridad, Alberto Pionetti, un hombre consustanciado con los hombres de La Bonaerense.

En rara coincidencia con el Día de la Primavera, para reemplazar a Kiedrzyk y su segundo, el comisario Norberto Padilla, asumió la dupla integrada por los comisarios Adolfo Vitelli y Domingo Lugos.

Para cubrir la vacante dejada por Pionetti, el gobernador Duhalde tuvo algunas complicaciones. Al principio sus hombres lanzaron "el globo" del desembarco de Luis Patti en la Secretaría de Seguridad, en sintonía con la costumbre del Gobernador de testear así la reacción de la gente sobre sus candidatos. Pero, dadas las circunstancias, en esta oportunidad el trascendente parecía más una provocación que un ensayo.

Sus operadores pronunciaron también el nombre del comisario retirado Marcelo Ferreira. Era el mismo oficial superior que en 1993 debió renunciar por su responsabilidad en el escándalo "del espionaje ideológico" en universidades y sindicatos. Considerado un duro, solía ufanarse de "haber matado a diez delincuentes". Con anterioridad se vio obligado a abandonar la jefatura de una seccional en San Miguel por extorsionar a comerciantes. Gozando de las mieles del retiro, probó suerte en la política acompañando al ex Tacuara Eduardo Pettigiani en su postulación a la intendencia de Mar del Plata.

Pese a esos antecedentes, para Duhalde la ecuación parecía cerrar.

Por un lado, el cambio de cúpula lograría descomprimir la presión ejercida por la sociedad civil ante la debacle de su política de seguridad y, por otro, también salvaría su ya tensa relación con los "perengas" —como se les dice internamente a los caciques policiales— entronizando al tibio Vitelli. Según sus pares, Vitelli era un "escribidor de sumarios", controlado por Domingo "Pinocho" Lugos, un alto dignatario de la "Maldita Policía". Que reportaba diariamente a su amigo Pedro Kiedrzyk. La tercera pata de aquella especulación era Marcelo Ferreira, cuya presencia saciaría el viejo anhelo policial de capturar la Secretaría de Seguridad a través de un uniformado de estirpe.

Sin embargo, el ambicioso intento fracasó. Los legisladores de la *UCR* y el *Frepaso*, a quienes el Gobernador había convocado para opinar, si bien no tenían quejas sobre la nueva cúpula policial, recordaron los motivos del retiro de Ferreira y pusieron el grito en el cielo.

Duhalde, fiel a su instinto pragmático, dio sobre la marcha un giro de 180 grados, sorprendiendo a todos con la designación de Eduardo De Lazzari, quien hasta ese momento se desempeñaba como Procurador General de la Suprema Corte bonaerense.

Al principio, De Lázari no mostró ningún entusiasmo ante la propuesta. Militante peronista desde su juventud, ex renovador, no formaba parte del riñón duhaldista. Su nombre había surgido en las negociaciones que Duhalde mantenía con magistrados y legisladores. De Lázari comprendió que la Secretaría de Seguridad era un desafío enorme y peligroso para su carrera, pero no pudo negarse.

Finalmente asumió el 9 de octubre de 1996.

Su primer acto en el cargo fue enviar, en el mayor de los sigilos, el radiograma al hasta entonces poco conocido comisario Vicat, para crear el Área Especial.

III

EL DELATOR

Al día siguiente del allanamiento en la 1° de Avellaneda, el legendario Mario "Chorizo" Rodríguez presentó su solicitud de retiro.

Un antiguo episodio, casi minimalista, pinta a este comisario de cuerpo entero. Su protagonista fue un ex presidiario que había conseguido un trabajo retributable, pero peligroso: informante del Chorizo, quien por entonces era titular de la Brigada de La Matanza.

Rodríguez andaba detrás de una banda especializada en asaltar terminales de colectivos. Los delincuentes solían reunirse en un taller mecánico situado frente a la entrada del Pchideportivo de Chacarita, en San Martín.

El seplén recibió instrucciones de infiltrarse.

Llegó al lugar a bordo de un Gacel marrón, que le había facilitado el propio Chorizo. Lo primero que lo impactó fue el cartel de la entrada: en grandes letras se leía "SIDA". Aunque más abajo aclaraba que eran las iniciales de "Servicio Integral del Autometro", le costó sobreponerse a la impresión.

Lo segundo que le llamó la atención fue que la banda ya estuviera infiltrada. Reconoció entre los asaltantes al "Santiagoño", otro buchón de Rodríguez. Luego sabía que el comisario no confiaba en él, porque "vende humo y toma merca", según las palabras del "Lagarto" Vargas, uno de los lugartenientes del jefe.

El hombre del Gacel fue haciendo bien los deberes.

Aportó datos meticulosos y precisos. El broche final de su tarea fue informar la hora exacta en que la banda iba a regresar de un "hecho". Los hombres de Rodríguez, quienes lo llaman cariñosamente "el Viejo", fijaron ese instante para la emboscada. Se prepararon con total eficacia. Hasta tenían en reserva tres testigos falsos, por si algo salía mal.

En la puerta de la Brigada los policías apilaron ametralladoras, Stakas y FAL, que distribuyeron entre los efectivos de los siete vehículos asignados al operativo. El buchón miró ese ir y venir con cierto asombro y preguntó:

—¿Para qué tanto fierro? ¿Los van a meter en cana o los van a cortar?

El Lagarto Vargas alzó los hombros y contestó:

—Vos sabés como es el Viejo... Los vamos a cortar.

Unas horas después, los noticieros daban cuenta de "un cruento tiroteo en el que cinco delincuentes fueron abatidos". Dicen que el Santiagoño salió corriendo con las manos en alto. Sus últimas palabras fueron:

—¡No tires, Mario, soy yo!

El hombre del Gacel quedó tan espantado con Rodríguez, que ni siquiera quería cobrar su parte. Pero el Chorizo, hombre de palabra si los hay, le envió un emisario para saludar los números. No era otro que el Lagarto, que le entregó una pila de billetes literalmente manchados con sangre. Hasta daba la impresión de estar todavía húmeda.

—¿Qué querés? La plata estaba en el auto de los chorros y se manchó de sangre. No vas a pretender que el billete se ponga al comisario, ¿no? —explicó el Lagarto, antes de partir.

IV

LLUVIA DORADA

Tras la caída del K Sedczyk, la del comisario Mario Rodríguez fue la primera baja de la Maldita Policía. Chorizo asimiló el golpe con inocultable ofuscación:

—Yo me voy. Pero esto tiene vuelta —advertió a sus amigos, en una quinta del Gran Buenos Aires donde un selecto grupo de altos oficiales se reunió para despedirlo. Allí sellaron una especie de rito: antes de irse, cada uno de los comensales orinó un enano de jardín, al que le adosaron en la cabeza la foto del nuevo secretario de Seguridad.

Fue el comienzo de las hostilidades.

Su primer signo fue una lluvia de denuncias administrativas infundadas contra el Área Especial. Sobre sus integrantes, cuyo número ahora llegaba al medio centenar, hubo seguimientos, filmaciones, escuchas y "capachús", que consisten en apostar uno o dos vehículos frente a determinados domicilios, con fines intimidatorios.

Como contrapartida, empezaba a tomar impulso en el juzgado de la doctora Silvia González la llamada causa de "Los treinta y tres orientales", una investigación sobre diversos delitos presuntamente cometidos por igual número de antiguos jefes de La Bonaerense. Aunque el nombre del Chorizo estaba incluido en esa nómina, la causa que más lo perturbaba era la abierta por la masacre de Andreani, en la que un policía arrepentido lo acusaba de haber armado el golpe contra esa empresa postal.

La jueza había procesado al mismísimo K Sedczyk por "enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, evasión impositiva, falsedad ideológica y falsificación de documentos". En esa causa había un "arrepentido" de lujo: Rubén Girocco, ex socio del Polaco en la buscadora Tiko.

Para Vicat fueron días inolvidables.

Rápidamente puso en la mira al comisario Miguel Ángel Salguero por su responsabilidad en una profanación al cementerio judío de La Tablada. Al mismo tiempo, se dirigía a Tolosa, una localidad ubicada en las afueras de La Plata, donde sus hombres arrestaron al comisario Claudio Savini. Unas horas más tarde, dejó sin conducción a una seccional de Wilde, tras detener al comisario Carlos Giles y al subcomisario Héctor Grimaldi. Paralelamente, por orden del juez José Luis Galeano, rastrecó las cuentas secretas del comisario Ribelli.

Pese a esos éxitos parciales, el secretario De Lazzari no lograba manejar a la policía, y a Vitelli lo manejaba Lugos. La relación jerárquica entre ellos se prestaba a confusiones. Vitelli había sido segundo de Lugos en la Regional Morón y en la Subdirección de Seguridad. Sin embargo, por una razón difícil de entender, ahora era Lugos quien secundaba a su antiguo subordinado en la conducción de la fuerza.

Pero, a todas luces, Pinocho seguía siendo el hombre fuerte del dúo.

El Gobernador no sólo compartía con Lugos íntimas amistades como las de Pedro K Sedczyk y Alberto Pierri, sino que Hilda "Chiche" de Duhalde tenía muy buena relación con su esposa. Pinocho solía visitar al Polaco, yendo en un 504 color gris una vez por semana a su casa de Lanús.

En esa época las líneas de "la Maldita" lograron reposicionarse a través de su gestión. Lugos consiguió ubicar personal afín incluso en la propia Secretaría de Seguridad. Además respondían a él los jefes y los segundos jefes regionales, los titulares de los Comandos de Patrullas, entre otros destinos claves.

Al acercarse la temporada estival, el Operativo Del fue organizado, como desde hacía diez años consecutivos, por el comisario Carlos Constantini. Pero en esa ocasión, la Maldita decidió llevar la guerra a la Costa.

Vicat llegó a percibir el clima y se le comunicó al Secretario:

—Está muy bien diagramado, pero cambie toda la gente en los cargos directivos.

—Ahora es imposible —se vio obligado a admitir De Lazzari.

Así se tejía la trama que se develó el 25 de enero de 1997.

En la Secretaría de Seguridad, durante la mañana de ese sábado, los primeros informes sobre el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas llegaron a través de los partes emitidos por la Jefatura.

Ese día el Secretario no tenía previsto ir a trabajar; su segunda mujer acababa de dar a luz un varón. Pero sí se encontraba en la repartición su segundo, Alejandro Granillo Fernández, quien convocó a los asesores con una ansiedad que estaba al borde de un ataque de pánico. Éstos iban llegando con semblantes que lindaban entre el sueño y el espanto.

Todos coincidían: "Le tiraron un cadáver a Duhalde".

Inmediatamente una comisión de notables, encabezada por el doctor Federico Domínguez, partió apresuradamente a Pinamar. El contingente llegó al balneario después del mediodía. Era una jornada radiante, pero todos los hombres del Gobierno estaban trajeados de oscuro, los zapatos llenos con arena de las dunas y transpirando como testigos falsos. Los veraneantes, de mallá, los miraban sorprendidos, inquietos.

Pinamar estaba lleno de servicios y todo el mundo se espiaba entre sí. La guerra Menem-Duhalde se había instalado en lo mejor del verano, en su balneario más exclusivo. La línea policial trataba de cubrir sus huellas. Se daban órdenes y contraórdenes. Todo el mundo hacía todo mal. El jefe policial de la zona, comisario Mario Aragón, se quejaría: "A mí me echan por gordo".

Era la República de Saló.

Esa misma tarde, al regresar de Pinamar, el Gabinete de la Secretaría hizo una reunión de análisis, donde cada uno vertió sus teorías. Entre ellas se mencionó la hipótesis de una venganza de "La Maldita", pero en voz baja y hasta con miedo.

Al quedar solos Vicat y De Lazzari, el Secretario se anticipó a una recriminación:

— Si, ya sé, no me diga nada...

— ¡Vic que yo tenía razón?

— El mal ya está hecho. Pasemos a otro tema —prepuso De Lazzari.

A partir de entonces, la relación del Secretario con la cúpula policial fue girando hacia un callejón oscuro y sin salida. El ex procurador pidió la renuncia del comisario Vitelli, quien se la aseguró de palabra.

El sueño de De Lazzari era poner al frente de la fuerza un jefe civil, y se desplazó hacia la Gobernación con el propósito de transmitirle la nueva a Duhalde. Al abrir la puerta del despacho desde donde se rige el destino de la provincia, tres miradas lo recibieron con notoria hostilidad. La más grave era la de Duhalde, pero no menos intensa fue la de sus acompañantes: Adolfo Vitelli y Domingo Lugos.

El Gobernador, con gesto ofuscado, ya había pasado por alto la condición de renunciante del jefe policial. En cambio, aceptó de inmediato la dimisión de Eduardo De Lazzari.

Era el 23 de marzo, y el tornillo de la crisis policial se había incrustado con una nueva vuelta.

EL RESTAURADOR

El Gobernador dio entonces otro brusco giro en su política de seguridad, al nombrar como secretario a Carlos Brown, un alma afín a la corporación policial.

El flamante funcionario asumió la Secretaría con un estilo de topadora, relevando de sus puestos a todos los funcionarios de la gestión anterior. Al veterano Federico Domínguez lo dejaron juntando orina en un estrecho pasillo, sacándole el auto antes de poder llegar a su casa. Había tratado de hablar con Brown, pero éste se negó a atenderlo.

La siguiente presa era Vicat.

Brown le citó 48 horas después de asumir, pidiéndole por escrito unas fotos de la ruta relacionadas con el caso Cabezas, que al parecer se habían traspapelado. Esas imágenes graficaban los misteriosos desplazamientos de los "Fórneros", como se llamó a los miembros de la banda implicada en el asesinato del fotógrafo.

El Secretario inició el encuentro en duros términos y alzando la voz:

— ¡Usted, quién se cree que es! Me está metiendo en un brete, y cree que no me doy cuenta que me está haciendo una operación...

Vicat golpeó el escritorio:

— Le pido por favor que baje el tono, porque no voy a tolerar que me grite. ¡Y me voy al carajo! — dijo, dándose media vuelta, no sin antes tirar su renuncia, que ya traía preparada en un bolsillo.

Brown lo corrió por el despacho:

— ¡Cálmese! ¡No se ponga así! — se gritaba, sujetándolo por una manga del saco.

Aunque la renuncia de Vicat no fue aceptada, a partir de entonces los recursos humanos del Área Especial fueron reducidos a la mitad y la relación con el Secretario comenzó a ir de mal en peor. En paralelo hubo una historia incidental que alborotaría la gestión de Carlos Brown.

Sorprendía en aquel entonces la irrupción de un asesino serial en Mar del Plata, al que se bautizó el Loco de la Ruta. Su primera víctima, cuyo cuerpo fue mutilado, parecía simplemente un exceso. Pero no tardó en aparecer el segundo. En el transcurso de aquel otoño, la cifra fue de cuatro mujeres despedazadas. La mayoría fueron halladas al costado de la ruta. Todo parecía indicar que el asesino sentía predilección por las prostitutas y también por ese paisaje. Al menos, esa era la hipótesis del doctor Jorge Tenelli, el extravagante médico policial que estaba al frente del SEIT (Servicio Especial de Investigaciones Técnicas) de esa ciudad.

Un primer plano de su rostro apareció una noche por la pantalla de un programa local. Antes de pronunciar palabra alguna, sus ojos miraron fijamente a la cámara; entonces extendió el índice, y dijo:

— Lo desafío a usted a que dé la cara. Lo desafío a que asuma su homosexualidad y no joda más a nadie...

Le estaba hablando al asesino por televisión.

El comisario Ricardo Glavin, jefe de la Brigada de Mar del Plata, estaba a cargo de la pesquisa. Unos 80 policías trabajaban en el caso; algunos se hacían pasar por habitués de la noche y también había agentes femeninas infiltradas entre las prostitutas.

"Esclarecer estos asesinatos es nuestra prioridad número uno", afirmó, en ocasión de una visita a La Feliz, el secretario Brown.

Con el correr del tiempo, la cifra de víctimas trepó a dieciséis mujeres asesinadas y ocho desaparecidas.

Mucho después se descubriría que la figura del Loco de la Ruta había sido en realidad un montaje urdido por La Bonaerense para encubrir una banda de policías y civiles dedicados al negocio de la prostitución. Esas fueron las conclusiones de una investigación impulsada por la Procuración de la Suprema Corte bonaerense y llevada al cabo por el juez de

transición Pedro Federico Hecft, quien recientemente dictó la prisión preventiva a diez uniformados, entre quienes estaban los subcomisarios Daniel Iglesias y Norberto Pastor, el jefe de calle de la comisaría 1°, Alberto Sturburu y uno de los lugartenientes del comisario Clavin, el oficial Juan "El Negro" Ayala. También resultó imputado por "encubrimiento y falso testimonio" el fiscal federal Marcelo García Berro.

Cuando en aquel otoño de 1997 el caso de las prostitutas descuartizadas monopolizaba la atención pública, se produjo un extraño episodio que echaría más leña a la interna policial: el asesinato del comisario general Héctor José Bassino.

No se trataba de un policía común.

Había estado al frente de la División de Operaciones Aéreas durante la gestión de K Sedczyk. Llegó a ser piloto ocasional del gobernador Duhalde y fue el artífice de la cuestionada compra de cuarenta helicópteros Robinson R22. Pasó a retiro junto con el Polacco, cuando el Gobernador se vio obligado a remover esa cúpula.

El 17 de junio de 1997, Bassino estacionó su Peugeot 205 rojo en una esquina de Bernal. De pronto descubrió una moto que se había estacionado junto a la trompa de su vehículo. El motor renroneaba para salir aceleradamente y, montado en ella, un tipo blandía nerviosamente un arma. Le disparó sin darle tiempo a nada. Otro hombre, parapetado junto a la luneta de un auto, también sostenía una pistola y gritó antes de disparar. Luego huyeron.

La versión oficial fue que se trató de un asalto común.

VI LAS ESCUCHAS

En julio, Vicat pidió una serie de equipos técnicos de inteligencia, para sus investigaciones relacionadas con la causa *AMIA*. Fueron encargados a la empresa capitalina Percies, situada en la calle Superí. La compra incluía un equipo de entrecruzamiento telefónico. Las preferencias de Vicat se inclinaban por un sistema denominado *Enterprise*, habitualmente empleado por las fuerzas de seguridad israelíes. Pero Brown dispuso que se adquiriese un *Excalibur*, ya que tenía un arreglo con su proveedor local, el señor Costa.

Para capacitar al personal en el manejo del equipo vinieron dos instructores españoles y un israelí, especialistas en contramedidas electrónicas. La Secretaría había adquirido el curso y los artefactos en un mismo paquete. Dicen las malas lenguas que el precio pagado quintuplicaba su valor real.

Luego de entrenar a los policías, los extranjeros se fueron. Pero el equipo no apareció.

Vicat dejó pasar algún tiempo para exigir su entrega. En esos días tenía otras preocupaciones más urgentes: manos anónimas le aflojaron las cuatro ruedas de su auto, a modo de advertencia.

Finalmente, cansado de no tener noticias, se puso en contacto con Mario Goldbar, dueño de Percies, Goldbar se sorprendió ante el reclamo:

—¿Cómo que no llegaron los equipos? Si los entregamos hace un mes...

—Le juro que no recibimos ni un auricular.

—Vinieron hace un mes y se llevaron todo. Le digo más, hasta llenaron una camioneta con el equipo —alcanzó a detallar Goldbar.

El material incluía valijas israelíes para escuchas telefónicas de última generación, con capacidad para pinchar unos cien aparatos simultáneamente.

Perplejo por la información, Vicat recordó que el ingeniero Ferreiro, un hombre de confianza de Brown desde sus épocas de intendente, había participado del curso con los hombres del Área Especial. El Secretario pretendía instalar una terminal del *Excalibur* en su propio despacho, con lo cual tendría acceso directo a su causa tramitada por el juez Galeano. La presencia de Ferreiro en el aula tenía que ver con ese propósito.

De ahí en más, todas las semanas, Vicat se dirigió por escrito a la Secretaría, pidiendo la entrega del equipo. Hasta que un día, el segundo de Brown le preguntó:

—¿Por qué nos manda todos los lunes la misma nota, si sabe que es al pedo?

—No importa. No me den nada. Pero así me voy cubriendo administrativamente —le explicó el jefe del Área Especial, que atesoraba cada una de las comunicaciones cursadas.

En medio de esos forcejeos, inesperadamente se produjo la caída de Carlos Brown, el 22 de diciembre de 1997. Presionado por la sociedad civil, el Gobernador daba un nuevo viraje espectacular, el tercero en pocos meses.

Días antes ya circulaban rumores en tal sentido, pero su confirmación cayó como un balde de agua fría sobre Brown, quien con duros términos recriminó a Duhalde su desplazamiento.

Esa misma noche, Federico Domínguez llamó a Vicat, instruyéndole que preparase a sus hombres de confianza para tomar la Jefatura. Se trataba de proteger de un eventual ataque al flamante interventor civil de La Bonaerense, el ex diputado Luis Lugones.

Antes de cortar, Domínguez deslizó un comentario:

—Atención, Luis: se vienen cambios radicales en la policía.

Una hora después, los treinta hombres del Área Especial fueron acuartelados en su sede ubicada en el Bosque platense, a la espera de cualquier novedad.

Luis Lugones asumió bajo un manto de tensión, aunque sin que se produjera el temido acto violento.

Ese mismo 22 de diciembre, el ingeniero Ferreira intentó entregar los equipos electrónicos. El Área Especial sólo los aceptó bajo acta, inventariados en el estado en el que se encontraban, constatando además si habían sido usados. Federico Domínguez, que en el nuevo proceso actuaría como asesor de inteligencia de Lugones, firmó la recepción.

De ese modo, los equipos finalmente aparecieron en el Área Especial.

La pregunta era: entre el momento en que la empresa los entregó y el 22 de diciembre, ¿dónde estuvieron y para qué se usaron?

Sobre las valijas para escuchas se efectuó un "revenida informático", es decir un procedimiento de software que posibilita rastrear la bitácora de su uso cuando el contenido del disco rígido ya ha sido borrado. Para gran sorpresa de todos, saltaron unos cuarenta números telefónicos que habían sido intervenidos. En varios de ellos, sus conversaciones fueron minuciosamente seguidas en los anteriores quince días. Eran teléfonos de políticos, magistrados y funcionarios. El más escuchado era el de una mujer llamada Claudia Ferrero. Vicat informó del asunto a Domínguez, y juntos fueron a ver al interventor.

Luis Lugones no dejaba de acariciarse sus tupidos bigotes. Era su gesto característico en momentos de perplejidad.

—Es muy grave esto —reconoció.

—Sobre todo me extraña esta fulana; no tengo idea de quién es —le indicó Vicat, refiriéndose a Claudia Ferrero.

El interventor, frotándose los mostachos con frenesí, develó la incógnita:

—Es mi mujer.

Ante el asombro de Vicat y con una avergonzada sonrisa, Lugones aclaró el aparente interés de Brown por las conversaciones de su esposa:

—Es que el celular que yo uso lo puse a nombre de ella. Fue para que no me lo detectaran.

Capítulo 2
RAPSODIA EN AZUL

*"La secta del gatillo fácil
es también la secta
de las manos en la lata."
RODOLFO WALSH*

I

BAUTISMO DE FUEGO

Minutos antes de la medianoche del 9 de junio de 1955, varios patrulleros y un carro de asalto de la Policía Bonaerense clavaron los frenos frente a una vivienda ubicada en un barrio obrero de Florida.

Adentro de la casa había diecisiete hombres reunidos para escuchar por radio las noticias sobre el levantamiento del general Juan José Valle contra el gobierno de facto del general Pedro Eugenio Aramburu.

A puro culatazo de fusil fueron reducidos por medio centenar de efectivos. Los encabezaba el jefe máximo de esa fuerza, el coronel Desiderio Fernández Suárez, quien fue recompensado con ese cargo por la Revolución Libertadora, en mérito de haber sido uno de los impulsores de la conspiración contra el régimen peronista.

Hubo más culatazos durante el trayecto hacia una dependencia policial. Allí prosiguieron los golpes, en medio de interrogatorios apurados y brutales. Horas después, siete detenidos fueron liberados. Los restantes debieron subir a un camión que enfiló hacia un basural de José León Suárez.

El propio coronel impartió verbalmente la orden de abrir fuego.

Cinco de los fusilados murieron sobre una montaña de deshechos; los otros quedaron gravemente heridos. Fue la matanza fundacional de La Bonaerense, la fuerza policial creada, paradójicamente, por Juan Domingo Perón una década antes.

A fines de ese mismo año, un hombre jugaba al ajedrez en un café de La Plata.

—Hay un fusilado que vive —le sepló alguien al oído.

A los pocos días se encontró con Juan Carlos Livraga, el sobreviviente en cuestión, ignorando aún por qué lo atraía esa historia.

Después lo supo.

A partir del relato de Livraga, Rodolfo Walsh comenzó a escribir Operación Masacre, un punto de inflexión en su actividad literaria y periodística. En sus páginas insertó una frase que sería profética: "La secta del gatillo alegre es también la secta de las manos en la sata".

Tajante como una guillotina.

II

LA INTROMISIÓN

Por entonces, entre el fin de la década del '50 y el comienzo de los años '60, transcurrían los albores de la llamada época de oro de la delincuencia argentina. Una nueva dinastía de pistoleros saltaba de la tapa de los diarios al imaginario colectivo. Tipos encapuchados con una media de mujer, se identificaban por su apodo y apellido, que el tiempo convertiría en nombres bravos: el "Nene" Villarino, el "Pichón" Laginestra y el "Lachó" Pardo, entre otros. Todos ejecutaron espectaculares golpes y fugas carcelarias que merecerían ser filmadas.

Las fuerzas del orden no tardaron en ponerse a la altura de las circunstancias. Como salidos de un policial negro, sujetos mal entrazados, con sbaqueras abultadas bajo ropas de civil, empezaron a batir los bajos fondos. Eran las primeras brigadas especiales de la policía.

No tardaron en hacerse notar. Tampoco en rebasar sus límites.

En la Nochebuena de 1965 apareció un cadáver en un pajonal de la ribera de Quilmes. Alguien llamó a la policía. Dos vigilantes se lo llevaron en un carro de lechero tirado por un caballo viejo. Todo el barrio presenció la escena. Nadie atinó a pronunciar palabra. Habían reconocido al finado; se trataba de un hampón de poca monta llamado Nazareno Vidal y apodado "el Sapo". Tenía las muñecas atadas con alambre y un tiro en la nuca.

Unos pocos vecinos tuvieron una certeza escalofriante: detrás del hecho estaba la mano del "Turco" Abraham, un sargento de La Bonaerense que pasó a la historia como un verdadero picnere: tenía 32 muertes en su haber. Los abatidos eran maleantes que no cumplieron a término con los "impuestos".

En esos días, las cuentas saldadas con fusilamientos empezaron a proliferar. También sus ejecutores: policías que habían comenzado a tejer una intrincada red de actividades ilícitas. El vínculo de La Bonaerense con un hermético tejido de negocios, arreglos, pactos y extorsiones se había convertido en su modo de supervivencia.

La multiplicación de ese fenómeno hizo que el gobernador radical de la provincia, Anselmo Marini, ideara una estrategia para ponerle coto al asunto. Su herramienta fue el abogado Juan José López Aguirre, quien se convirtió en el primer interventor civil en la historia de La Bonaerense.

Los Patas Negras vivieron esa intromisión como un golpe de Estado y su reacción hizo temblar a la provincia. El remedio fue peor que la enfermedad. El Gobernador no tardó en comprender que se le había duplicado el problema: la intervención civil no sólo era incapaz de encauzar la disciplina de la fuerza, sino que agregaba otra cuota de zozobra.

Desde ese momento comenzaron a arreciar las rebeliones policiales.

El 21 de septiembre de ese año, el interventor policial y su hijo mayor, en esa época un niño algo regordete, llamado Ricardo López Murphy, tuvieron que abandonar la Legislatura ocultos en el piso de un vehículo, cuando un grupo de policías de uniforme baleó el frente del edificio.

Aquella intervención civil quedó finalmente inconclusa en 1966, cuando el general Juan Carlos Onganía anunció al país que los militares habían vuelto a tomar las riendas del poder. Fue la introducción en La Bonaerense de la "Doctrina de la Seguridad Nacional", cuya aplicación estrictamente policial consistiría en modalidades de trabajo como el gatillo fácil indiscriminado, la picana, la rapiña y el abuso de poder como sistema.

III

LOS HUMANOS

Este perfil se intensificó hasta un límite satánico en la década siguiente, durante el paso del general Ramón Camps por la fuerza. En el organigrama de la represión ilegal, los Patas Negras tenían asignado un papel preponderante.

El hecho más emblemático de su autería fue la llamada "Noche de los Lápices", el 16 de septiembre de 1976. En el operativo fueron secuestrados siete alumnos secundarios que reclamaban el boleto estudiantil. Sólo uno de ellos sobrevivió.

Durante los años de plomo, La Bonaerense tenía bajo su control operacional unos siete centros clandestinos de represión. Estos incluían el denominado "Coti Martínez". Funcionaba como una especie de laboratorio para Camps y su segundo, el comisario Miguel Echecciatz, quienes solían visitar sus mazmorras para presenciar las sesiones de tormento.

Así, según fuentes internas de la policía, habría prestado servicio un joven oficial llamado Ramón Oreste Verón.

Aún hoy siguen en la fuerza algunos altos jefes que participaron activamente del terrorismo de Estado. El caso que salió a la luz más recientemente corresponde al comisario Mario Mijín, quien hasta hace poco se desempeñó como subjefe de la estratégica Departamental de Lomas de Zamora, y de quien dependía el comisario Alfredo Franchiotti al momento de matar dos piqueteros en Avellaneda.

Hace un cuarto de siglo Mijín integró el elenco del Destacamento Arana, otro chupadero que dependía directamente de Camps. Algunos sobrevivientes lo recuerdan por su apodo: "el Verduguito".

Recientemente, luego de que la policía acribillara a un rehén que estaba en un vehículo con sus captores, Mijín salió a calmar a la viuda con estas palabras:

— Señera, la entiendo. Nosotros también somos seres humanos.

Durante la dictadura, La Bonaerense comenzó a masticar un inocultable encono hacia todo lo que tuviera color verde olivo. Los motivos eran más bien mezquinos: en las operaciones conjuntas, el personal del Ejército no repartía con ellos el botín de guerra; por ejemplo, los televisores robados en las casas de los desaparecidos.

Los Patas Negras siguieron manejando algunas contravenciones: capitalistas de juego, proxenetas y comerciantes irregulares trabajaban desde hacía décadas en sociedad forzada con las comisarias, pagando un canon para seguir existiendo. Pero fue precisamente en esa época cuando comenzaron a alimentar sus cajas con asuntos más lucrativos. Florecieron entonces los secuestros extorsivos ejecutados por bandas policiales, cuyos integrantes no hacían sino en pequeña escala lo que el aparato represivo del Estado hacía en grande.

El regreso a la democracia liberó a los Patas Negras de la perturbadora tutela militar, dejándose el camino libre para ejercer sus negocios y para perfeccionarlos. El poder corporativo de los uniformados siguió en alza, pese a ciertos quijotescos intentos de ponerlos en caja, como lo fue, a fines de los ochenta, la trunca purga policial impulsada por el ministro de Gobierno de Antonio Cafiero, Luis Brunatti.

Así se llegó a la era de Pedro Kuczynski.

IV

PERFIL DE MERCADO

Tal vez el mérito del fallecido comisario *K. Sedczyk* fué dotar a La Bonaerense de un sesgo eminentemente empresarial y corporativo.

El "Pelaco" impuso un sello que perduraría a través de los tiempos: el sistema de los del fines. El poder de los "perengas" no se diluye con su pase a retiro, sino que se prolonga a través de un código rayano con la sucesión dinástica mediante un complejo árbol genealógico de herederos, entenados y hombres de confianza.

Durante su reinado se sumaron pactos con hacendados una nueva oleada de delitos. Mediante arreglos, "impuestos", peajes y tarifas, o directamente a través de la complicidad directa, las estructuras policiales corruptas comenzaron a participar de un diversificado mercado de asuntos. En los más lucrativos se contabilizan el tráfico de drogas, sustracción y el corte de automotores, la piratería del asfalto y la concesión de "zonas liberadas" para cometer asaltos.

Observado desde un ángulo perverso, sujetar una variada gama de modalidades ilícitas bajo las riendas de la recaudación policial no deja de ser un modo eficaz de ejercer control sobre la inseguridad urbana y de tener cintura como para regularla. Los hombres de azul saben que ante el resto del mundo poseen ese mágico y unívoco poder.

Sobre todo, con los tiempos que corren.

El fantasma de la inseguridad atraviesa a la sociedad argentina como una ráfaga apenas disimulada. Se trata del problema público que, junto con el de la desocupación, más desvela a los habitantes de un país cuyos ámbitos superestructurales también tambalean al compás de una ola no menos creciente de corrupción.

Esa triada de conflictos —en apariencia tan inexorables como las catástrofes climáticas, y que suelen abordarse como si estuvieran disociados entre sí— comenzó a manifestar sus primeros síntomas hace ya un cuarto de siglo, en plena dictadura; pero terminaría estallando con toda su magnitud en los albores de los años '90.

Arrancaba la fiebre privatizadora y la Fiesta para Pocos aún estaba lejos de su estrepitoso amanecer. La continua baja de salarios y la caída en la capacidad de consumo de un amplio arco de clases bajas y medias, desembocaron en un desplazamiento brutal de todo el sistema económico y social.

En esa transferencia colectiva de la riqueza anidaba el huevo de la serpiente; comenzaba a existir una correspondencia necesaria entre el avance de la economía globalizada y el crecimiento de sus zonas más brumosas: la exclusión y la marginalidad.

Fue un largo viaje desde el Estado de bienestar al Estado penal. El primero intentaba paliar la miseria y el segundo directamente la criminaliza, con una batería de motivaciones tan compleja como sus actores. El aumento inequívocamente geométrico de los delitos contra la propiedad y las personas, junto con el advenimiento de nuevas generaciones delictivas cada vez más jóvenes, precarizadas y violentas, hace de la elección de sus víctimas un ejercicio indiscriminado. Lo mismo da robar un banco que a una jubilada.

Su correlato mediático no es menos estremecedor. Intermitentemente se bombardea inseguridad desde los diarios y la televisión, mientras políticos, legisladores y funcionarios enarbolan la lucha contra el delito callejero como su bandera más preciada. Esta combinación expresa un fenómeno curioso: la penalización de la miseria responde a un clamor multisectorial. Los reclamos de "mano dura" y "tolerancia cero" —cuya respuesta oficial más nítida es el aumento de las poblaciones carcelarias— provienen por igual de clases privilegiadas y pobres. En el temor a la violencia urbana, los extremos socioeconómicos se tocan, se sobrepasan mutuamente. Todos quieren protegerse.

No sólo está en juego el pánico a la vulnerabilidad experimentado por ricos y famoses, funcionarios y ex funcionarios enriquecidos o de los empresarios más poderosos del país. También cuenta la proverbial sensibilidad propietaria de la masa votante de clase media, incluidos sus sectores de menores ingresos. Pero el síndrome de indefensión también lo padecen las

capas más empobrecidas de la sociedad.

Para estas últimas, la inestabilidad extrema es un dato cotidiano; por lo general, no saben cómo subsistirán al día siguiente. Ser víctima de un delito se agrega dramáticamente a ese clima. Por esa razón, tal vez, expresan un pedido de orden ciego e inmediato. Es una paradoja que los sectores más desamparados sean también los más propensos a pedir políticas autoritarias, aunque éstas les sean esencialmente nefastas. Como ya no se pueden reclamar seguridad social Estado, terminan pidiendo seguridad a secas.

Los ejemplos electorales sobran.

El ex subcomisario Luis Patti, que saltó a la fama por una denuncia en su contra por apremios ilegales, llegó precisamente por esa impronta a la intendencia del partido bonaerense de Escoibar. El ex militar carapintada Aldo Rico fue elegido intendente del partido de San Miguel, con más del 70 por ciento de votos. Ningún político que se precie desconoce la importancia que tiene el tema, tanto en una campaña electoral como en una gestión de gobierno. En tiempos de transformación y ajuste, la policía no es un resortito para gobernar: se convierte en un arma estratégica, aunque de doble filo.

Otra variante de inseguridad, de distinto signo, es la que se palpita por obra y gracia de ese afán policial, a veces desmesurado, de imponer su presencia en las calles con el recurso del gatillo fácil.

La piedra angular de su naturaleza gira en torno a la criminalización de quienes no son criminales.

El target de sus víctimas suele ser preciso: adolescentes que, por ejemplo, comparten una cerveza en cualquier esquina, que les gusta el rock, que van a recitales y que pueden llegar a fumarse un perro. Pero no son delincuentes; son muchachos de clase media baja, tal vez desertores del secundario y con dificultades para conseguir empleo. Como no tienen grandes obligaciones, se la pasan apedreando el tiempo con sus amigos. De manera preferencial son el blanco de la policía, quizás en nombre de un ejercicio algo heterodoxo de la "prevención del delito".

Desde 1992 se produjeron en todo el país alrededor de 900 casos fatales.

Con la delincuencia organizada los efectivos policiales dirimen sus cuestiones de un modo más hermético, subterráneo y con códigos secretos. Pueden incluso llegar a matar — y se hacen con frecuencia —, pero sólo cuando hay en danza un vuelto.

En tiempos normales, en cambio, el espacio delictivo que sostiene la corporación policial cuenta con sus propios emisarios y sobbistas. Éstos son los que articulan las relaciones entre los uniformados y el hampa propiamente dicha. No pertenecen a un bando ni a otro: prestan servicios a ambos. Se trata de los llamados "sacapresos", abogados penalistas diestros en esa rama subyacente del derecho que es el arte del "arreglo extrajudicial".

La delincuencia lumpen está excluida de los beneficios de esa protección. Este segmento, pese a la escasez de sus recursos y a la poca envergadura de sus hechos, es el que diariamente alimenta portadas periodísticas y morgues. Por esas vías marca la sensación térmica de la inseguridad.

Se trata de un fenómeno propio de la última década. Muestra un marcado incremento y está poblado por los llamados "pibes chorros" a quienes, en la mayoría de los casos, les falta tiempo para llegar a la adolescencia. Habitualmente, mueren como ratas antes de alcanzarla.

Casi un icono de esa especie patibularia es aquel chico con flequillo y cara regordeta de tan sólo 14 años, que había participado junto a dos cómplices de la dramática toma de rehenes en un supermercado de Avellaneda, donde se rindió con una inculcable borrachera.

Los medios entonces se bautizaron Chuky; en realidad se trataba de Miguelito, el menor de los seis hijos de Milva Lezcano y Rubén Burgos, un panadero desempleado con graves problemas de alcoholismo. Uno de sus hermanos está internado en la colonia Open Door, víctima de esquizofrenia. Un tío materno murió en la Guerra de Malvinas. Miguelito desertó hace ya dos años de la Escuela N° 1 de Avellaneda, donde sólo llegó a tercer grado. Desde entonces alternaba pequeños robos con su afición de jalar pegamento. Su breve casa del Pasaje Medina, de Villa Tranquila, no tiene ventanas a la calle. Igual que la celda que hoy lo aloja.

Los pistoleros más experimentados suelen evitar este target delictivo. Tampoco les son de gran utilidad a los policías dedicados a negocios sucios. No hay demasiado beneficio en "arreglar" con quienes pueden llegar a traer, en el mejor de los

casos, un botín de 20 pesos, luego de haberse cargado a la víctima. En cambio, esta franja delictiva sí les es útil para engrosar estadísticas, reclamar nuevas atribuciones y agitar leyes penales más severas.

V

LA EMPRESA

Resulta significativo que la recaudación sobre actividades ilícitas no sólo ingrese al bolsillo de jefes y efectivos, sino que también solvente los gastos operativos de la fuerza. Esto ha ocurrido desde siempre.

El presupuesto oficial de La Bonaerense —600 millones de dólares en tiempos de K Sedczyk y 730 millones en la actualidad— apenas alcanza para el pago de salarios, pero no para el funcionamiento de esa formidable estructura. Los fondos para solventar el reequipamiento, su expansión sobre nuevas áreas delictivas y su capacidad operativa nunca dejaron de depender de las "viejas costumbres". A partir de la gestión del Polacco, todo eso comenzó a tener un marco más orgánico. También los dineros que compensan los magros salarios policiales.

Eso aún perdura.

Recientemente, el ministro Juan Pablo Cafiere aumentó de 600 a 1000 pesos la asignación mensual que percibe cada seccional. Según un comisario del oeste bonaerense, "eso no alcanza ni para el papel de la fotocopidora".

Una costumbre que ha perdurado desde los tiempos del Polacco es la "obligación" de recaudar unos 30.000 pesos mensuales en cada seccional. La mitad se reparte entre el comisario y la patota de calle, mientras que la otra mitad se entrega a su instancia inmediata: la Unidad Regional, hasta la reforma de Arslanián, y la jefatura Departamental, a partir de entonces.

Habida cuenta de que en todo el territorio bonaerense hay unas 400 comisarías, se trata de un "flujo de caja" más que voluminoso y atractivo. A esto debe sumarse lo que recaudan las brigadas y otras divisiones.

La extorsión a delincuentes, la comercialización de "botines de guerra", el "peaje" a comerciantes y narcotraficantes, las regalías de la prostitución y el juego clandestino, el tráfico de expedientes, la venta de cargos y destinos y las nuevas modalidades de secuestros extorsivos repertan, aproximadamente, unos 1200 millones de pesos anuales a las arcas de la institución.

Todos los poderes de la sociedad conocen esta situación y la consienten. Fondos para bolsillos particulares y campañas electorales, complicidad en los propios negocios turbios y mano de obra disponible, son razones de peso para que así ocurra. La función subordinada que cumple la institución policial dentro de los poderes del Estado torna imposible creer en su autonomía delictiva. Punteros barriales, concejales, diputados, ministros y hasta gobernadores, son sus mandantes o protectores, según los respectivos cargos y su capacidad de acción. Por esa razón, en el tablero de lo posible, el carácter bipolar al que está condenado el trabajo policial hace que los uniformados carguen sobre sus hombros la delicada responsabilidad de ser el único vaso comunicante entre dos estigmas aparentemente inevitables y estancos: la inseguridad que brota del delito callejero y la corrupción en las altas esferas del poder.

Hasta hace pocos años, el sombrío espinal de negocios controlado por los hombres de azul transcurría lejos de la incómoda mirada de la opinión pública. El tratamiento periodístico en torno a la temible policía provincial se circunscribía a las denuncias del gatillo fácil, cuando en realidad ese era el único delito que los uniformados cometían sin fines de lucro.

Hechos como la participación policial en el atentado a la AMGA o la muerte de Cabezas convirtieron a la corrupción policial en un problema de Estado. Sin embargo, los sucesivos intentos de purgar la corporación no fueron motivados por una decisión política sino por urgencias de tipo electoral. Sus efectos únicamente alcanzaron para maquillar los frentes de las dependencias policiales.

Pero no extirparon las semillas plantadas por la secta que Walsh bautizó del gatillo alegre y las manos en la suta.

VI

MAGIA COTIDIANA

La sala de guardia de una comisaría bonaerense es el vaso comunicante entre el mundo exterior y las entrañas de la repartición; a través de esa especie de Alesh se accede al extravagante universo policial. De allí generalmente se deriva a los ocasionales visitantes hacia otras escalas: la oficina de judiciales, el despacho del comisario o, en el pector de los casos, al sector de calabozos.

A cualquier comisaría suele acudir todo tipo de gente. Uno de los motivos más comunes son las denuncias por "abusos deshonestos". Inmediatamente se hace pasar a la denunciante a una oficina, en donde le dicen que va a revisar el médico legista de turno. Éste, por lo general, no es otro que un oficial que se puso un guardapolvo blanco. Y que procede a realizar lo que en la jerga jurídica se denomina "tocamientos inverecundos", con el pretexto de constatar si la víctima ha sido o no violada. Si ésta es de buena presencia, se llama a una interconsulta, y se presenta otro oficial, también disfrazado con guardapolvo blanco.

La guardia es también donde se recibe la comida de los detenidos. La cual, si tiene aspecto apetitoso, es probada por el personal policial presente, con el propósito de evitar que en ella no haya, por ejemplo, una lima para socavar barretes. Tal es así que, generalmente, la comida no llega a los calabozos. La existencia de unos 7400 detenidos en las comisarías del Gran Buenos Aires, además de las tensiones propias del caso, que se traducen en motines, fugas y "suicidios", moldea por otra parte la influencia territorial del comisario, ya que de su buena disposición y del trato de los familiares con éste, depende en gran medida la suerte con la que los detenidos sobrellevan su encierro.

El único mobiliario de esa verdadera antesala del infierno que es la sala de guardia suele ser un rústico mostrador, atendido generalmente por un ayudante de guardia, encargado de evacuar los problemas siempre acusantes de quienes se dejan caer allí. Las situaciones más absurdas suelen suceder en vísperas de feriados o durante las noches de los fines de semana, en los que habitualmente permanece demorado algún borracho o, tal como sucede en las ciudades con puerto, nunca falta aquel marinero ucraniano desplumado por una prostituta, a quien ya en sede policial lo terminan de desvalijar, so pena de quedar arrestado.

La sala de guardia es también el sitio propiciatorio del "lechuceo", que en el argot policial significa "vender la muerte". Es habitual que en las jurisdicciones de las comisarías se produzcan accidentes de tránsito con víctimas fatales. Al respecto, suelen haber arreglos entre las dependencias policiales y las funerarias de la zona; el oficial de servicio le da a éstas el primer aviso, aún antes de comunicarse con los familiares de la persona fallecida. La funeraria, entonces, es la que se encarga de brindarles la contención emocional, a través de un empleado, el denominado "cuervo", quien se constituye en seccional para hacerse firmar a los deudos, entre palabras de consuelo, un contrato por el servicio fúnebre.

Pero el "lechuceo", es en realidad el paso posterior al "bolsiqueo", donde, en la escena del accidente, al moribundo se lo despoja del anillo, reloj y bisbetera. En más de una ocasión alguna víctima ha terminado por fallecer, digamos, forzosamente.

La guardia nocturna es un capítulo aparte.

Es en ese contexto donde se efectúa "la recorrida" expresión que no alude a la recolección de los sobres, sino a la visita diaria a locales gastronómicos para recolectar pizzas, bebidas y, en verano, helados. De allí en más, en la sala contigua a la guardia transcurre una larga sobremesa con maratónicos partidos de truco hasta las seis de la mañana. Habitualmente, esas veladas también suelen estar animadas por alguna prostituta demorada que, aliviando las tensiones del personal de guardia, paga así su contravención.

En ese ámbito se produce una verdadera transmutación en los oficialitos recién egresados de la Escuela Vucetich. Éstos hacen sus primeras prácticas sin entender mucho los códigos imperantes. Entonces son puestos bajo el ala de algún sargento de calle, con quien recorren el escarpado camino de su iniciación. O el comisario lo llama y le dice:

—¿Tiene auto usted?

—No.

—¿Cómo que no tiene auto?

Entonces lo manda a una agencia donde se dan un auto a pagar en comodísimas cuotas y únicamente cuando pueda abonarlas. Lo mismo pasa con la adquisición de otros bienes, que van desde comida a electrodomésticos. De ese modo natural y preciso, los policías novatos van entrando casi sin darse cuenta en un universo casi fantástico donde se le trastocan las ideas.

Hasta pasar definitivamente a pertenecer a esa legión hermética y casi surrealista, que los separa del resto de los mortales.

Un veterano comisario le explica de este modo: "Cuando un tipo llega a sargento y está acostumbrado a ganar mil pesos mensuales de sueldo y cuatro mil en concepto de "cometas" varias, a tener el diario gratis, las facturas gratis, la nafta gratis, más un estilo de vida acorde a sus ingresos y beneficios, a ese hombre se tocás, por ejemplo, a un jefe como Chorizo Rodríguez, y te quiere matar. Porque el tipo ha terminado por corromperse, pero inadvertidamente".

Capítulo 3
LEY DE JUEGO

*"Todo tiene que ser
lo menos aparatoso posible."
Comisario PEDRO KLODZAK*

I

LA VENGANZA

Se llamaba Adrián Gagliardi, tenía 26 años y trabajaba en la sucursal Tribunales del Banco Río. Al caer la noche del 18 de diciembre de 1997, decidió no cenar en casa y se lo comunicó a su madre, antes de que se pusiera a cocinar.

La mujer ya frisaba los sesenta y su aspecto era el de quien arrastra una añeja viudez, aunque, en realidad, Eugenia Tomarello era divorciada; su marido la había abandonado dos décadas antes y, desde entonces, vivía con el único hijo de esa unión. Ambos habitaban una casa en Luis María Drago 1648, de Villa Adelina.

Esa noche, doña Eugenia le insistió para que cenara en casa. El muchacho no le contestó. Parecía nervioso y apurado; estaba listo para salir y no encontraba las llaves del auto.

—Están acá, nene —dijo la madre, señalando la mesita ratona del living.

Él dibujó un gesto de alivio, agarró el llavero y fue hacia la puerta.

—No me esperes, viejita. Vuelve tarde; voy a una cena de fin de año con la gente del Banco.

Afuera caía una lluvia torrencial.

La mujer sabía de memoria todos los sonidos que iría a escuchar a continuación: el crujido metálico del portón de la cochera, el motor del auto al encenderse, el ronroneo provocado por su desplazamiento hacia la vereda y, finalmente, otra vez el crujido del portón. Siempre que su hijo salía, ella apuntaba todos sus sentidos sobre ese desfile de ruidos.

El reloj de pared marcaba las 22 horas.

En ese instante se desencadenó el audio de algo que no estaba en el libreto: una frenada, voces enardecidas, entre ellas la de su hijo, y el sonido de llantas merdiendo el asfalto mojado. Doña Eugenia se abalanzó sobre la puerta, pero se detuvo al escuchar algo que la sobresaltó aún más: el inequívoco sonido de un disparo. Luego volvió el silencio.

La mujer se atrevió a salir unos segundos después. El azote de la lluvia le pegó en la cara y la visión de la tragedia, en los ojos. El Volkswagen Gol de su hijo estaba cruzado sobre la vereda, con la puerta del conductor semiabierta. Adrián estaba abrazado al volante, con el tórax teñido en sangre. Ya había muerto.

Eugenia Tomarello lanzó un grito tan visceral como inútil: nadie acudió en su auxilio. La calle estaba desierta.

Cinco horas después, en un edificio situado muy lejos de allí, sobre la avenida Maipú 1864, de Vicente López, el ascensor subió hasta el piso 21. De la cabina emergió una silueta encorvada. Arrastró los pies por el pasillo oscuro y se detuvo ante la puerta del departamento 6. Introdujo la llave en la cerradura, con una dificultad que denunciaba algunas copas de más, y desapareció tras los muros de su privacidad.

Mientras volvía a cerrar la puerta con una vuelta de Tráhex, Alberto Gagliardi se dijo que ya no estaba para esos trotes. No se refería únicamente a los excesos gastronómicos y etílicos que cometía en los festejos de esa época del año. Durante casi cuatro décadas había sido periodista especializado en automovilismo, hasta que le llegó la jubilación. Ahora, al borde de los 62 años, se sentía con el caballo cansado y, para colmo, una constelación de factores conspiraba contra su tranquilidad otoñal.

Más que brindar por un año mejor, Gagliardi ahora solía levantar su copa para huir despavorido de la realidad inmediata. Estaba metido en un asunto del que no sabía cómo salir bien parado. Lo que originalmente había brillado como un negocio redondo desembocó en una pesadilla de complicaciones legales, rayanas con el delito y con la posibilidad de terminar con sus huesos tras las rejas.

Para colmo, en nada lo beneficiaban sus compañeros de expediente: dos ex máximos jefes de la Policía Bonaerense, ahora caídos en desgracia. Ellos lo habían llevado hasta ese laberinto. Cinco días antes tuvo que vérselas durante largas horas con un juez. Sentía sobre su nuca el aliento de su desgracia; estaba agotado y al borde de un colapso nervioso. Sólo quería tirarse en la cama y sumergirse en las profundidades del sueño.

Ya en pijama, se metió en la boca una pastilla de 5 miligramos de Lexotanil y oprimió una tecla del contestador automático. Surgió la voz de su ex esposa.

Fue un mensaje escueto, aterrador y nada sutil. La mujer, con las cuerdas vocales alborotadas por el llanto y la angustia, sólo dejó grabadas las siguientes palabras:

— Vení lo más rápido que puedas. Adrián está muerto... Mataron a nuestro hijo...

II

EFECTO DOMINÓ

La repercusión mediática de ese asesinato fue amortiguada por la resonancia que tuvo, dos días después, el nombramiento de Luis Lugones como interventor civil de La Bonaerense. El flamante funcionario aplicó cirugía mayor, exonerando a una multitud de comisarios y descabezando el organigrama operativo de la fuerza.

La respuesta de los desplazados no tardó en hacerse oír. A pocas horas de haber asumido la intervención civil, manos anónimas comenzaron a emitir radiogramas falsos a todas las comisarias. Paralelamente, el personal de un gran número de comisarias comenzaba a trabajar a reglamento. Tomaban denuncias, pero no hacían nada más al respecto.

En vísperas de la Navidad, un grupo comande asaltó una peluquería de La Plata, ubicada justo frente a la Legislatura. Bajo sus secadores estaban las cabezas de varias diputadas. La investigación manejó la hipótesis de que los autores fuesen policías decididos a intimidar al poder político.

Esa misma noche fue profanado el cementerio israelita de La Tablada y, siete días más tarde, el de Ciudadela. En ninguno de los casos hubo esvásticas pintadas; fue como si los autores hubieran querido dejar en claro que no eran nazis sino policías en una lisa y llana demostración de fuerza.

Los proyectos disuasivos de los exonerados incluían una lista de personalidades contra las que se podría atentar. Un informe de inteligencia detectó que el nombre de Emily Schindler figuraba en ella. Desde entonces, la viuda de Oskar, el empresario alemán que salvó a miles de judíos del holocausto nazi, tuvo custodia permanente en su casa de San Vicente.

Las acciones clandestinas de los exonerados alcanzaron al propio gobernador Duhalde cuando, en la madrugada del 7 de enero de 1998, manos anónimas se alzaron con algunas armas de su custodia, que estaban apiladas en el sótano de su residencia de Pinamar.

Los drásticos cambios impulsados por Duhalde en la fuerza de seguridad provincial habían comenzado a tener secuelas.

Tamaño aluvión delictivo hizo que la investigación por la muerte de Adrián Gagliardi fuera virtualmente archivada en el cajón de los casos no resueltos.

III

RETRATO DE FAMILIA

A mediados de la década del '40, Alberto Gagliardi era un chico flaco y no muy alto. Pertenecía a un hogar de clase media; su padre, Francisco, era un pequeño comerciante y su madre, Francisca, ama de casa. Don Francisco le había inculcado la pasión por el automovilismo y su madre le transmitió el hábito de la lectura. De la mano de ella también entró en su vida alguien que seguiría relacionado con él para siempre.

El niño Norberto Padilla era huérfano; había perdido a sus padres en un accidente, antes de cumplir los cuatro años. Al principio quedó al cuidado de unos parientes lejanos. Pero éstos no parecían dispuestos a hacerse cargo de él por más tiempo; un destino de asilo campeaba sobre su futuro. Pero poseía una personalidad vivaz y no tardó en ganarse el afecto de los Gagliardi, de quienes era vecino. En especial, había logrado conquistar el corazón de doña Francisca, que se apiadó de su desgracia y lo convirtió en una especie de hijo adoptivo.

El chico dejó de parecer el personaje de una novela victoriana para ser el protagonista de un milagro argentino. Fue a vivir con sus protectores, compartiendo una habitación con Alberto, que le llevaba cinco años. También tuvo una escolaridad sin contratiempos, en la que destacó por sus notas altas y sus faltas de disciplina. En su hogar sustituto lo trataban como a un hijo más.

Fue así como los primeros tramos de la vida de Alberto Gagliardi estuvieron unidos al de ese niño. No le costó ningún esfuerzo incorporar a sus sentimientos como un hermano menor. Pese a la diferencia de edad, ambos articularon un alto grado de complicidad, tanto para las travesuras como para otras afinidades compartidas, como el fútbol y el radioteatro a la hora de la leche. En la memoria de ambos hay recuerdos de las mismas cosas: la vuelta al mundo del Jardín Japonés y las recurrentes excursiones de toda la familia a bordo del sustrado Ford 47 de don Francisco.

Norberto permaneció en la casa de los Gagliardi hasta los 17 años. A esa edad definió su vocación policial ingresando en la Escuela de Oficiales Juan Vucetich.

En tanto, Alberto, a quien todos llamaban Tacho, ensayaba sus primeros pasos en el periodismo. Primero, como locutor suplente de una emisora de radio y luego, como integrante del equipo de locutores del *Rotativo del Aire*. Seguía soltero y ya no soñaba con ser corredor de autos, aunque profesionalmente se especializó en el automovilismo deportivo.

Esa fue una de las constantes de su existencia. Su travesía por los años tuvo varias escalas: una boda, un hijo, un divorcio y una segunda soltería que logró prolongar hasta convertirla en irremediable. Pero mantuvo intacta su entrega por ese género periodístico a lo largo de su vida.

De allí proviene otro de sus apodos: el Mono o, su versión completa, el Mono del Avión: como integrante del equipo de Carburando, Gagliardi solía sobrevolar los autódromos a bordo de un diminuto Cessna, para relatar los pormenores de las competencias desde las alturas.

Otra constante de su existencia fue su inclinación a forjar relaciones y contactos policiales. En eso, su oficio tuvo mucho que ver: como periodista deportivo solía conseguir entradas para altos oficiales o para sus hijos, además de haber cursado infinidad de invitaciones a la plaza mayor de La Bonaerense para cenas organizadas por círculos de prensa o del ambiente automovilístico.

En sus acendradas relaciones con el mundo policial también tuvo influencia su hermano adoptivo.

Se puede decir que Padilla había progresado en la vida. Con el correr de los años, el niño huérfano se había convertido en un poderoso comisario general. Escaló todos los peldaños de la carrera, imponiendo siempre el fuerte peso de su personalidad. Corrían los últimos días de 1991 cuando el comisario Pedro Kosdczyk asumió la jefatura máxima de la fuerza de seguridad más importante del país; lo secundaba su amigo y estrecho colaborador, Norberto Padilla, a quien sus colegas apodaban cariñosamente "el Borrachó".

Al pasar a retiro, Padilla administró una red de estaciones de servicios de la que era el principal accionista, además de poseer varias propiedades en la localidad bonaerense de Lima. También se dijo de él que, junto al ex comisario Mario Rodríguez, animaba por entonces algunas reuniones de policías exonerados.

Esos cónclaves tenían por objeto monitorear los pasos de la intervención civil y organizar acciones de presión contra las nuevas autoridades.

El comisario Domingo Lugos, sucesor de Padilla en la subjefatura durante la gestión de Adolfo Vitelli, también habría encabezado otras reuniones. A su grupo de conjurados se le denominaba "Los Pinoches", en alusión al apodo del comisario. Se sabe que el ex secretario de Seguridad Alberto Piotti capitaneó algunos encuentros.

Varias de esas reuniones tuvieron lugar en el restaurante Tahema, situado en Fondo de la Legua, entre Bogado y Gorriti.

Tampoco escapó al ojo de los investigadores la sombra de los ex comisarios Mario Naldi y Miguel Ángel Rebello. El primero habría estado activo en la zona de Martínez, donde algunos años antes había ejercido la titularidad de la poderosa División Norte de Narcotráfico. Rebello, que había sido jefe de la estratégica División Islas que controla el Delta, estuvo activo en esa zona, relevando el terreno y visitando a viejos amigos, con la cobertura de una agencia de seguridad privada de la que es propietario.

IV EL ASUNTO

—Che, Mono, vos que tenés llegada, ¿me podrías arreglar una cita con el comisario Padilla?

—¿Para qué? —inquirió Gagliardi.

—Es por un negocio: equipos de comunicaciones para la policía. En una de esas les interesa, ¿no? —respondió su interlocutor, con un deje casual.

—Buena. Voy a ver qué se puede hacer...

El diálogo tuvo lugar en una confitería ubicada en Lafinur y Libertador, durante la primavera de 1992.

El hombre que compartía una mesa de la vereda con Gagliardi se llamaba Juan Enrique Bracht. Todo parecía indicar que se trataba de un pájaro de cuentas o, al menos, de un busca financiero, es decir, un cazador de comisiones. Pero era elegante, inteligente y, en apariencia, frontal. A Gagliardi le resultaba sumamente simpático.

Se habían conocido cinco años antes en un stand de la Rural, durante una exposición de autos antiguos. Bracht tenía algunos autos de colección y la primera charla entre ambos giró sobre ese tema. A Gagliardi le impresionó la juventud del muchacho, que entonces regentaba una mesa de dinero en la City. Tenía 27 años, pero exhalaba una experiencia de vida muy desarrollada para alguien de su edad. Tuvieron algunos encuentros esporádicos, siempre relacionados con la afición que compartían por los autos, hasta que esa tarde de septiembre de 1992, Bracht lo citó por teléfono para impulsar el asunto de los equipos de comunicación.

Dos días después, Gagliardi se encontró con su hermano postizo en el despacho que éste ocupaba en el edificio de la Jefatura.

El trato fue familiar y distendido. El comisario se interesó por la salud de doña Francisca, la única sobreviviente de sus progenitores sustitutos; hacía más de quince años que el viejo Francisco había muerto. Gagliardi y Padilla se recordaron con palabras de cariño y nostalgia. Luego, Cachó abordó el tema que lo había llevado a La Plata.

El Berracho, tras escuchar atentamente con el ceño fruncido, le respondió:

—Está bien. Con saber de qué se trata no se pierde nada. Pero este tema lo maneja Gusmeroti, el director de Comunicaciones. Tu hombre tiene que hablar con él, ¿entendés?

Esa misma noche, Gagliardi le permenorizó a Bracht los resultados de su gestión. El joven sobbista se mostró entusiasmado; todo parecía encajar con su plan. No demostró inquietud en conocer quién era Gusmeroti; sólo sonrió, dando la impresión de que ya lo sabía.

A mediados de octubre de 1992, Pedro K Sedczyk recibió en su despacho a su director de Comunicaciones, el comisario Héctor Gusmeroti. El oficial tenía un propósito definido: convencerlo sobre las ventajas de pactar una compra de equipos con el grupo Sofremi-Alcatel.

En realidad, la adquisición ya la había arreglado el mismo Gusmeroti, quien acababa de regresar de un viaje a París con su mujer. Allí había cerrado un acuerdo preliminar con los directivos de la firma, cuyas siglas significan "Sociedad Francesa de Exportación del Ministerio del Interior". Tal vez K Sedczyk no recordó que se trataba de la misma empresa a la que el ministro Julio Mera Figueroa había intentado otorgar la confección de unos nuevos y costosos DNI, operación que terminó precipitando la ruidosa caída del funcionario.

El agente de enlace entre el grupo francés y sus posibles clientes no era otro que Juan Bracht, en representación de Crusel S.A., una empresa de gestión de negocios y asesoramiento en colocaciones de dinero, con sede central en la ciudad de Montevideo.

Se trataba de un negocio de proporciones faraónicas: 40.000 equipos individuales de comunicación y un sofisticado sistema de microondas para las unidades regionales. A K Sedczyk le pareció desorbitado el monto de la oferta: 110 millones

de dólares.

Gusmeroti insistió.

Tenía fama de ducho en lo suyo y también era rápido para los negocios. Ambos atributos lo hacían confiable para la Jefatura, y K Sedczyk finalmente cedió.

Eduardo Pettigiani, un antiguo militante de Tacuara, ex juez federal y, por entonces, a cargo de la Secretaría de Seguridad bonaerense, analizó el asunto en silencio durante unos minutos, con su estilegráfica en la mano, dibujando números sobre un anctador. Era consciente de que el presupuesto policial no contaba con ese dinero. Pero le siguió dando vueltas a la cuestión, hasta que encontró una salida. La solución consistía en endeudar a la provincia mediante un empréstito externo equivalente a la suma de la inversión.

Naturalmente, era necesario sancionar una ley.

De eso se encargaría el vicegobernador Rafael Romá.

En la mañana del 30 de diciembre de 1992, Romá llegó a la Legislatura bonaerense con una puntualidad calculada. La irrupción del Vicegobernador provocó el asamblea general: en 45 sesiones, era la tercera vez que se presentaba en el recinto, pese a ser el presidente natural de la Cámara Alta.

Con rictus severo, anunció sin rodeos el tema a tratar. Fue la segunda sorpresa del día. Los legisladores no tenían ni idea acerca de los equipos que La Bonaerense quería comprar. Recién en ese momento se enteraron de que el proyecto ya contaba con media sanción de Diputados, donde también había sido votado de apuro.

Un senador pidió una copia del proyecto votado en la Cámara Baja. La respuesta de Romá fue aún más desconcertante:

—Primero hay que votar. Después cada uno tendrá su copia —decretó, sin mover un solo músculo de la cara.

Eso provocó el desbande. En medio de una guerra de insultos, acusaciones cruzadas y conatos de pugilismo, el bloque radical se retiró del recinto. De todos modos, la ley fue votada sobre tablas, pero sin el despacho de la comisión que exige el reglamento de la Cámara. Apercebidos de ese grosero error, los legisladores duhaldistas no tuvieron problemas en salvarlo mediante un recurso aún más grosero: falsificaron la versión taquigráfica del Diario de Sesiones.

El asunto derivó en una denuncia penal efectuada por el senador Héctor Bertencello, jefe del bloque radical.

Para los funcionarios duhaldistas se trató del emprendimiento más espectacular en materia de seguridad del gobierno provincial. Sin embargo, el proyecto derivó en el primer escándalo político-policial de la era Duhalde.

Seis años después, un verdadero granizo de hechos delictivos había precipitado la debacle policial. En esos días, la trama de La Bonaerense estaba llegando a su pice máximo. La disolución de las Brigadas de Investigaciones y de divisiones como Sustracción de Automotores, que funcionaban como verdaderos bolsones de la corrupción, había trastocado todos los "arreglos".

La situación era caótica.

Las bandas policiales habían quedado acéfalas y el malestar de los exonerados no sólo se manifestaba mediante la acción organizada sino también por medio de ajustes entre policías y ex-policías contra otros camaradas.

Cientos de uniformados pasados compulsivamente a la vida civil se volcaron de lleno al delito. Sabían mejor que nadie dónde conseguir armas y botines. Estaban en la cresta de la ola de las "mejicaneadas" de ex-policías contra delincuentes que antes protegían. Desprovistos de su condición policial, ya no podían cobrar impuesto alguno y entonces iban directamente en pos de una carga de droga o la recaudación de un asalto.

Los funcionarios de la intervención eran conscientes del momento que atravesaban y no descartaron que la situación sería aún más cruda. Según ellos, no había otro camino ni marcha atrás posible.

La guerra interna de la policía aún no había pasado de su fase inicial.

Muchos jefes relevados esperaban a desganar el momento en el que tendrían que sentarse frente a los jueces. Pedro K Sedczyk y Norberto Padilla no eran una excepción.

Padilla solía cavilar sobre la correlación de fuerzas de su prontuario. Siempre llegaba a la conclusión de que no se le

podía comprobar muerte alguna ni otros delitos graves. Ese panorama lo tranquilizaba, pero cuando su mente se extraviaba en esas cosas, lo atravesaba un agujero recurrente: su participación en el negociado de los equipos de comunicación. Se recriminaba la poca profijidad con que se manejó en ese ya lejano comienzo de década.

EL TESORO DE PARÍS

Después de las gestiones iniciales por el contrato entre la policía y el grupo francés, Alberto Gagliardi y Juan Bracht no se volvieron a ver hasta un año después. Corrían los primeros meses de 1994 cuando sonó el celular del periodista; del otro lado de la línea estaba Bracht.

Se encontraron esa misma tarde en la confitería de Libertador y Lafinur. Departieron largamente, aliviados del calor por el aire acondicionado del lugar. En la calle, la sensación térmica rondaba los 40 grados.

La sensación térmica del sobbista también era elevada; tenía la mirada encendida y las mejillas sonrosadas. Hablando apresuradamente y con algunas frases desordenadas, Bracht desgarró sus peripecias más recientes. Contó que había estado en España desde marzo de 1993 hasta hacía pocos días, y que allí se fue estrepitosamente mal. Había fracasado en todos sus emprendimientos peninsulares y se encontraba al borde de la ruina. De Madrid tuvo que salir prácticamente corriendo. Ya en Buenos Aires, las deudas se le siguieron acumulando al punto de que le remataron una casa; incluso había tenido que deshacerse de sus autos de colección.

Las palabras le salían a borbotones; detallaba la cronología de su desgracia financiera con una minuciosidad casi germana. Pero no parecía amargado y su actitud distaba de ser dramática. Curiosamente, cherreaba confianza en sí mismo y, al parecer, tenía sus motivos.

—El asunto de los equipos de comunicaciones con la Provincia va bien encaminado —señaló finalmente, con una sonrisa de presentador televisivo.

Dio a entender que ahí radicaban todas sus esperanzas. Explicó que el éxito del proyecto también sería una carta de presentación para vender esos equipos a las fuerzas de seguridad de otras provincias. Su mediación entre la firma francesa y la fuerza encabezada por K Sedczyk estaba por dar frutos contantes y sonantes; aseguró que desde Francia le estaban por girar su comisión por haber llevado las negociaciones a buen puerto. Ese giro también incluía parte de lo que le correspondía a cada uno de los involucrados, entre los que estaba Gagliardi, por haber ayudado a dar el puntapié inicial del negocio.

El periodista tragó saliva antes de preguntar:

—¿Y... ¿de cuánto serían esos beneficios?

—Mirá, para vos hay alrededor de 70.000 de los verdes. ¿Te parece bien?

A Gagliardi le brillaron los ojos.

—Pero antes me tenés que hacer un favor. Bah... es un favor a todos: a los de la Jefatura y a nosotros... —agregó el sobbista con un deje enigmático.

Esperó a que Gagliardi se lo preguntara. Recién entonces continuó su pedido, con alusiones a que tenía sus cuentas cerradas y que le habían cancelado las tarjetas de crédito. En una palabra, el hombre estaba inhabilitado.

—Tenés que abrir por 24 horas una cuenta en un banco que yo te voy a indicar. Los franceses te van a girar la guita a tu nombre y vos la tenés que recibir. No es joda; son como 700.000 dólares.

A Gagliardi le volvieron a brillar los ojos, pero esta vez de pánico. Entendió de inmediato quiénes iban a ser los destinatarios de parte de ese dinero: sus poderosos amigos Padilla y K Sedczyk. Eso le alivió la conciencia y aceptó.

VI

EL AMANTE DE LA GABARDINA

Durante 1994, la relación entre el comisario *K. Jodczyk* y su amigo *Rubén Girocco* atravesaba una etapa celestial. Se habían conocido en la segunda mitad de la década anterior, pero recién entonces esa amistad comenzaba a cosechar sus frutos. El policía estaba a punto de asociarse en la fábrica de bulones que *Girocco* regenteaba en *Avellaneda*.

Girocco, al borde de los 45 años, seguía viviendo con su madre en la casa familiar ubicada en *Mariano Acosta* al 900, de *Avellaneda*. En el barrio lo conocen de niño y en ese entonces ya era tan cheso como lo es ahora. Tal vez eso impidió su ingreso a la academia policial, pero el traspié vocacional no lo privó de la fascinación que siempre despertaron en él los uniformes azules.

Por eso se sentía doblemente halagado por la amistad que le dispensaba *K. Jodczyk*. El jefe lo estimaba a *Girocco* al punto de que más de una vez lo dejó participar en operativos antidrogas. *Girocco* se había convertido en una especie de parapolicial, pero en variante naïf. A *K. Jodczyk* le caía simpático y además le era útil para algunos asuntos.

En una noche de fines de junio, mientras degustaba un succulento plato de mendongo, su madre se acercó con el teléfono inasámbrico en la mano.

—Nene, es don Pedro— le dijo.

El hombre saltó con una agilidad que sorprendía en alguien de su peso y apoyó el aparato en su oreja.

—Oíste, Gerde— le dijo la voz del teléfono.—Andá a verme mañana a la Jefatura. Si no este y, hablá con *Padilla*, que está al tanto.

A la mañana siguiente, *Girocco* entró al despacho de *Padilla*, que parecía preocupado. El comisario fue directamente al grano; tomó a *Girocco* del hombro y lo llevó hacia la ventana. Lo preguntó en voz muy baja:

—¿Vos podrías encargarte de recibir una guita que va llegar a la fábrica en un blindado?

Girocco asintió con un cabeceo.

Recién entonces *Girocco* se percató de la presencia del hombre semicalvo y entrado en carnes que, hasta ese instante, había permanecido en silencio.

—Te presento a *Cacho*— dijo *Padilla*, señalando a *Gagliardi*.

El periodista deportivo estaba nervioso, asustado. *Padilla* le explicó al amigo de *K. Jodczyk* que el anciano sería el encargado de retirar el dinero una vez cobrado. *Girocco* notó que el viejo cerraba los ojos y apretaba sus puños, como para controlar el pavor. *Girocco*, en cambio, se sentía como un pulpo en su tinta, al punto que *Gagliardi* creyó que era un policía más.

Desde París, la *Sofremi-Ascotel* ya había enviado los 700.000 dólares a la oficina montevideana de *Crusel S.A.*, a través del Banco de la Sociedad Francesa. El pase siguiente fue girar esa suma a Buenos Aires y depositarla en la cuenta temporal que *Gagliardi* había abierto en el *Crédit Suisse*. El periodista deportivo ya había pactado con los empleados de la sucursal de Presidente Perón y San Martín el método operativo de la entrega del dinero.

La idea era del propio *K. Jodczyk*.

—Todo tiene que ser lo menos aparatoso posible— había sentenciado el comisario, durante un desayuno de trabajo.

El destino final del dinero debía ser la casa materna de *Bracht*, en Palermo. Pero no era conveniente que estaciona allí un camión blindado. Al jefe se le ocurrió un atajo: llevar primero el dinero a un sitio alternativo, que no era otro que la bulonera de *Girocco*. De allí volverían a llevar los fondos a la Capital, a través de un "dispositivo camuflado": el coche de *Gagliardi*, con él y otro acompañante como único resguardo del tesoro venido de París.

A la mañana siguiente, todo salió a pedir de boca. El dinero fue retirado del *Crédit Suisse* en dos sacos que fueron cargadas en la caja de un camión blindado de la empresa *Firme S.A.* A bordo iban dos custodios y *Girocco*, que para la

ocasión se había pertrechado como para ir a la guerra del Gelfo.

A las 11 en punto, la mole de metal azulado se detuvo ante el galpón de la busonera. Sin perder un segundo, Cirecco y dos empleadas vaciaron el contenido de las sacas sobre un escritorio. Al caer sobre la férnica, las pilas de dólares fajados producían un ruido seco. Con movimientos rápidos y hasta torpes, contaron el dinero y lo guardaron en dos maletines tipo Primicia.

En ese momento llegó Gagliardi. Estaba acompañado por un hombre corpulento y con cara de pocos amigos. Se trataba del comisario Juan Bergnia, que se desempeñaba como secretario privado del subjefe Padilla. Bergnia debía supervisar el traslado del dinero. Había que reconocer que lo hacía con sumo celo; su actitud era callada y acechante. No apartaba su mirada de los maletines ni la mano de su sobaquera.

Tras esconder los maletines bajo el asiento del Renault 11 de Gagliardi, ambos subieron al vehículo, que se alejó de la busonera lentamente, casi a paso de hombre. El auto mantuvo esa velocidad hasta llegar a la avenida Pavón. Bergnia miraba de reojo hacia los cuatro costados, sin abrir la boca, y mantuvo esa actitud durante todo el trayecto. A Gagliardi, el silencio de su acompañante lo ponía más nervioso que la situación en sí. Aferraba sus dedos sobre el volante como si fuera el cuello de un enemigo y el miedo lo hacía parpadear. Gagliardi esperaba una emboscada en cualquier momento. En un semáforo de Constitución, casi se rinde con las manos en alto cuando un chico de la calle se acercó para pedirle una moneda. Bergnia percibió su confusión y le dijo:

— Controlate, hermano...

Pese a los embotellamientos llegaron a Palermo Viejo. Sin dificultad encontraron la casa de Gerriti 4967. Allí los esperaba Juan Bracht. Bergnia escudriñó en derredor, mientras Gagliardi buscaba dónde estacionar.

El periodista deportivo se bajó del auto con los dos maletines; de cada mano se colgaban 350.000 dólares. Bergnia, que lo vigilaba desde el coche, lo vio desaparecer tras un portón. Al rato, el portón se volvió a abrir y Gagliardi se instaló nuevamente en el asiento del conductor. Regresaron a la provincia.

Gagliardi, Bergnia y Cirecco nunca más se volvieron a ver, aunque todos fueron debidamente recompensados. La comisión de Cirecco fue de 10.000 pesos. Lo curioso fue que se los llevaron a la fábrica tres semanas después. Era la mañana del 18 de julio de 1994.

Ese día fue memorable por uno de los actos terroristas más sangrientos de la historia argentina: el atentado contra la A.M.F.A.

VII

SINFONÍA MACABRA

Corría el mes de octubre de 1997 y la amistad entre K Sedczyk y Tirecco había terminado de la peor manera.

Al recapitular el fin de esa relación, Tirecco dijo que el ex comisario entró en pánico tras la detención de su mano derecha, el comisario Juan José Ribelli, acusado de ser partícipe necesario en la veladura de la mutual judía. Su reacción inmediata fue despojarlo de su parte en la fábrica de bulones porque no quería hacerse cargo de algunos de sus bienes.

Ribelli fue apresado en julio de 1996, pero la desesperación de Tirecco por hablar parece haberse disparado luego del asesinato de José Luis Cabezas. El obeso empresario de Avellaneda había guardado silencio durante tres años, pero al romperlo, lo hizo con estruendo.

La cercanía temporal del affaire de los 700.000 dólares con el atentado de la calle Pasteur hizo que Tirecco cavilara la idea funesta de que ese dinero hubiera tenido relación con el ataque terrorista. A mediados de octubre de 1997 declaró ante el juez federal José Luis Galeano.

En ese despacho de la calle Comodoro Py despuntó la certeza de que, en realidad, el pasamano de dinero en la fábrica de Avellaneda estaba vinculado con la cuestionada compra de equipos de comunicación franceses y no con la causa A.M.F.A.

Algunas semanas después, el 7 de noviembre, Tirecco repitió su declaración ante otro magistrado: Silvia González, de Lomas de Zamora. A partir de ese testimonio, la jueza abrió una investigación contra K Sedczyk por enriquecimiento ilícito, evasión impositiva, lavado de dinero y posible cohecho. La bulonera de la que el comisario había llegado a ser socio fue sindicada como centro operativo de todos esos delitos.

En la mañana del jueves 18 de noviembre, el Polaco llegó al edificio anexo del Congreso con una puntualidad calculada.

Tras declarar ante la Comisión Bicameral, emergió por la misma puerta que lo había tragado cinco horas antes. Lucía demacrado y más canoso que un año antes, cuando aún dirigía La Bonaerense. Pero sus dotes mediáticas estaban intactas; resistió el embate de los cronistas sin que se le arrugara su traje marrón, ni alteró esa expresión entre humilde y asombrada con la que suele disfrazar su rostro. Entre forcejeos, sitiado por decenas de micrófonos y tratando de ganar la calle, liquidó algunas preguntas con frases cortas y precisas. Hasta que le inquirieron sobre su ex socio en la bulonera.

El gesto se le desfiguró.

—De ese sujeto no voy a decir una palabra —respondió, mordiéndose el labio inferior.

Más que sentir furia, K Sedczyk ofateó una tormenta.

A don Pedro se le aceleraban los tiempos. Días después, nuevamente salió del silencio para comunicarse por teléfono con Alberto Gagliardi. En una escueta comunicación, le advirtió:

—Preparate, porque seguro que la jueza te va citar.

Tras cortar la comunicación, el periodista deportivo se comunicó con Juan Bracht para darle cuenta de las novedades.

La citación judicial no tardó en llegar. Alberto Gagliardi se presentó ante la jueza González en la mañana del 13 de diciembre. Su declaración se prolongó por más de seis horas. Cuando finalmente abandonó el despacho del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, parecía más pequeño de lo que realmente era. Luego se supo que sus dichos no habían dejado bien parado a quien fuera el todopoderoso jefe de La Bonaerense. K Sedczyk juró venganza.

Cinco días después, tres desconocidos descerrajaron un disparo contra su hijo Adrián en la puerta de su casa.

Pese a que originalmente la causa fue caratulada como "homicidio y tentativa de robo", es un secreto a voces que ese crimen tuvo la inequívoca huella de una venganza policial. La detonación que mató al chico Gagliardi fue el preludio de una sinfonía macabra.

En el primer mes de 1998 murieron 15 policías bonaerenses, mientras que en todo el año anterior habían caído 27 efectivos provinciales. Entre los asesinados durante ese sangriento enero estaban el comisario Julio Palermo, virtualmente fusilado en su dormitorio, y el cabo Carlos Hegarín, cuyo auto fue interceptado por un motociclista, al mejor estilo de los sicarios colombianos. El comisario Gustavo Rossi fue herido en la calle y el cabo Rubén Sueño, baleado mientras paseaba en auto con su mujer, murió de un tiro en la frente.

Una sórdida y sangrienta batalla había estallado entre los policías que permanecían en la fuerza y aquellos que se habían volcado al delito. La lucha era sin cuartel, sin reglas y sin límites.

Y recién comenzaba.

Capítulo 4
LA GUERRA

*"Vea, cuando en Capital alguien se pierde,
el asunto es 'averiguación de paradero'.
Y acá simplemente le ponen 'desaparición',
que es una palabra que sólo sirve
para confundir los tantos."
Subcomisario *JULIO CÉSAR ÁVILA**

I

LA ÚLTIMA ESTACIÓN

El presidente Eduardo Duhalde sabe mejor que nadie la malquerencia que los hombres de La Bonaerense son capaces de profesar hacia una conducción política con la que están indispuestos.

Durante la década del noventa, en dos ocasiones estuvieron a punto de sepultar su propia carrera; primero, con el asesinato de José Luis Cabezas y, luego, con la masacre de Ramallo. Tal vez el ex gobernador haya decidido, abandonar la administración provincial y afincarse en Balcarce 50 precisamente con el ilusorio propósito de liberarse de esos seres. Pero el largo brazo de La Bonaerense lo sigue acechando. En ocasión de la masacre del 26 de junio de 2002 en Avellaneda, "la mejor policía del mundo" estuvo a un milímetro de malegrar su trayectoria por tercera vez.

La incompetencia brutal de quienes debían vigilar en ese día los cortes en el Puente Pueyrredón derivó en el asesinato de dos piqueteros desarmados, a la vista de decenas de testigos, algunos con cámaras fotográficas y televisivas. Ese sucedió luego de que desde el Poder Ejecutivo Nacional se preparara minuciosamente el terreno de la tragedia.

La trama de aquel miércoles negro había comenzado unas semanas antes, cuando en una reunión de Gabinete el titular de la SJDÉ, Carlos Soria, sorprendió a todos con un inquietante informe recién sacado del horno.

El paper en cuestión se basaba en grabaciones clandestinas efectuadas en un congreso nacional de piqueteros, que tuvo lugar a fines de mayo en el Estadio Gatica de Villa Domínico, con la asistencia de unas tres mil personas.

El trabajo de campo propiamente dicho había sido una, iniciativa del subdirector de Inteligencia, Oscar Rodríguez, un ex intendente del partido de San Vicente, quien además está casado con la senadora Mabel Müller, la más íntima amiga de la primera dama, Chiche Duhalde.

Para esta delicada misión se valió de agentes que él mismo había reclutado poco antes: un centenar de "batatas" bonaerenses, entre los cuales había barrabravas de Chacarita y Los Andes, matones salidos de las filas del Comando de Organización y, por último, algunos murguistas de la comparsa "Los Mimosos de Burzaco". Corpulentos en su mayoría, vestidos con camperas de cuero y comunicados entre sí con flamantes celulares Startac, se paseaban de un lado a otro en grupos de tres, sin pasar inadvertidos entre los assembleístas.

Nadie imaginó que en ellos estaría el germen de una matanza.

El material reunido condujo a una verdadera hipótesis de conflicto. El "Señor 5" —como se denomina al jefe de la SJDÉ— al exponer el asunto ante todos los ministros y secretarios de Estado, encabezados por el Presidente, señaló sin mover un solo músculo del rostro la existencia de "un plan insurreccional en marcha". Fue aún más lejos al vaticinar que los conjurados tenían "previsto el asalto al poder durante el próximo 9 de julio". Paradójicamente, era la misma fecha que el primer mandatario había fijado como final de la recesión.

Ante tamañas revelaciones, el secretario de Seguridad Interior, Juan José Álvarez, se mantuvo en un discreto segundo plano. No así algunos colegas suyos.

El Inferme Soria, pese a su carga descabellada, tuvo una gran acogida entre los "halcones" del gobierno, alineados detrás del jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof. Los ministros del Interior y Justicia, Jorge Matzkin y Jorge Vanossi, junto con el secretario general de la Presidencia, Ángel Fernández, y el canciller, Carlos Ruckauf, fueron desde entonces los encargados de endurecer el discurso oficial y de propagarlo. Hasta llegaron a enviar comunicaciones a los gobernadores de todo el país alertando sobre el presunto complot y a dar el visto bueno a posibles rebotes de la represión. Súbitamente había girado 180 grados la estrategia oficial de no interferir en las protestas sociales.

Así se llegó a la mañana del 26 de junio.

Ese día se tejió una fina maniobra para deslucir el corte del Puente Pueyrredón, impulsando primero una situación de caos, con el apoyo de provocadores e infiltrados. Luego aplicarían sobre ella una represión medida, disciplinante y con un

alto contenido mediático, con el propósito de instalar la ilusión de que el orden había sido restaurado. No contaban, desde luego, con la sutileza de La Bonaerense.

Al despuntar el alba de ese miércoles, en la sede del Comando de Patrullas de Avellaneda, con asiento en Sarandí, se ultimaron las instancias previas al operativo policial, del que tomarían parte unos 110 uniformados y unas ocho brigadas de civil, cuyos integrantes debían mimetizarse en la manifestación.

El clima allí reinante no auguraba nada bueno.

En el cuaderno de guardia quedó asentado el número y tipo de armas que llevaren los suboficiales. Pero no ocurrió lo mismo con los oficiales, sobre todo los de mayor rango, quienes sabieron de la dependencia diciendo "dame aquella", sin dejar registro alguno. Se trataba de una maniobra habitual entre los efectivos de La Bonaerense, cuyo propósito, en caso de abrir fuego, era precisamente desdibujar los rastros. Pero en esa ocasión, según el testimonio posterior de algunos policías, los suboficiales también fueron pertrechados con proyectiles de plomo. Cada uno llevaba cuatro o cinco cartuchos letales en su Itaka, mezclados con las postas de goma.

Los aprestos fueron cuidadosamente supervisados por el comisario a cargo del operativo, un sujeto de cejas espesas, expresión de pájaro y estatura ruin.

Pocos minutos antes del mediodía, una columna de piqueteros pertenecientes a la Coordinadora Aníbal Verón comenzó a avanzar por la avenida Pavón, a la altura de Carrefour. La policía, sorpresivamente, formó un cordón entre ellos, con el doble objetivo de cerrarles el paso y dividir la columna en dos. Pero, ante la proximidad de unos con otros, los uniformados se replugaron para repetir la acción unos cien metros más adelante, ya bajo el acceso al Puente Pueyrredón. Sólo que esta vez no se corrieron. En ese paso de ballet estaba la semilla de una cacería. Primero fueron trompadas, palazos y pedradas, bajo un hongo de gases lacrimógenos.

Entonces sonó el primer disparo.

Un muchacho se tomó el abdomen. Logrará hasta la estación de tren. Pero se estaba desangrando. Era Maximiliano Costeki.

Entre tanto, el enjuto jefe del operativo, blandiendo una escopeta, se trezaba a golpes con otro piquetero. Luego retrocedería, pero sin sacarle los ojos de encima. Resultaba curiosa su forma de trabajar; en vez de dirigir las acciones desde un mévil, con un mapa topográfico y un puñado de handies, había descendido al escalón táctico, y se hallaba en el epicentro del conflicto, como si en vez de comisario fuese un sargento más.

El joven piquetero que lo había enfrentado enfileró también hacia la estación, siempre bajo su atenta mirada. Pocos minutos después, el cuerpo sangrante y moribundo de Darío Santillán era arrastrado por ese mismo policía desde el hall central hasta la calle; colaboraban con él otros tres uniformados.

Adentro yacía el otro muerto.

Con un destello de furia, el alto oficial se tocó el cuello, donde exhibía un pequeño corte. Durante el resto de la tarde saciaría un repentino impulso por expenarse ante las cámaras. Primero se fereó en la puerta del Hospital Fierito, hasta que un puñetazo en el ojo izquierdo forzó su retirada. Más tarde, ya con el ojo emparchado, no se privó de dar una larga conferencia de prensa en un lugar seguro, para luego aparecer en otra, nada menos que con el gobernador Felipe Solá.

Esas imágenes, irradiadas por un pequeño televisor, congelaron a la periodista Sara Britos, directora de la publicación regional La Tapa, que se edita en la localidad de San Vicente. En ese instante recordó una mañana del año 2000, cuando su casa fue violentada por unos 30 policías encapuchados que, tras golpear a su marido y destrozarse todo lo que encontraban a su paso, la arrastraron de los pelos. La versión oficial atribuyó el episodio a un error cometido por los uniformados, al confundir la dirección de un allanamiento. Pero detrás del apriete subyacía un añejo enfrentamiento entre la mujer y las autoridades del municipio, encabezadas por el inefable Oscar Rodríguez.

El jefe de aquel operativo policial era precisamente el hombre magullado que ahora aparecía en la pantalla.

Se trataba del comisario Alfredo Franchicetti, quien había cumplido su primer destino profesional en la comisaría de San Vicente, donde permaneció hasta 1987, cuando fue ascendido a inspector.

De su paso por la zona, los vecinos recuerdan que mató a balazos a un par de pibes, dejando los cadáveres desnudos junto a un cartel publicitario de la inmobiliaria Vinelli. Allí también cultivó buenas migas con el actual subdirector de la SJDÉ y con su hermano, el comisario inspector Alfredo Rodríguez, ex jefe de la custodia personal de Eduardo Duhalde. No es casual, por lo tanto, que su siguiente destino haya sido Lomas de Zamora, cuando el intendente no era otro que Duhalde.

Luego despuntaría su naturaleza operativa, transitando sucesivamente las brigadas de Berazategui, Quilmes, Lanús y Sustracción de Automotores, siguiendo en sus destinos al jefe que lo había puesto bajo su ala: Juan José Ribelli.

El espíritu de cuerpo que lo unía a éste quedó plasmado en dos escuchas telefónicas, efectuadas poco antes de su detención por el atentado a la AMGA. En la primera, Ribelli le dice a Raúl Ibarra, otro de los policías procesados en esa causa:

—Decile a Franchicetti que vaya corriendo a limpiar mi casa antes de que me la revienten.

Y, más adelante, agrega:

—Le pedí a Franchicetti que lo ubicara a Albarracín. Porque su idea es que nos presentemos detenidos todos.

Franchicetti también prestó servicio durante una temporada en el Municipio de la Costa, donde solía ufanarse de ser "un policía de Yabrán", según sus propias palabras. Su legajo muestra un solo pedido de licencia por enfermedad, diez arrestos por faltas leves y 18 distinciones por actos de servicio. En 1989, la Cámara de Diputados le otorgó una condecoración en calidad de "Acto Meritorio", por haber participado en la recuperación del cuartel militar de La Tablada.

Ya con jinetas de comisario, accedió a la jefatura del mando de Operaciones Policiales, con asiento en La Plata. Era un destino codiciado, ya que desde allí no sólo se diagraman los operativos de todo el Gran Buenos Aires, sino que es un sitio al cual suelen subir los sobres.

Pero algo interrumpió su brillante carrera.

En diciembre de 2001 fue transferido al Comando de Patrullas de Avellaneda. A todas luces, se trataba de un retroceso profesional, casi una degradación; como el de un gerente de empresa que, de pronto, pasa a la sección de maestranza.

Con ese cargo, dando su versión de los hechos, interpretando el papel de víctima y martirizado por un desprendimiento de retina, durante la tarde del 26 de junio exhibió su figura en todos los canales y diarios del país.

Aún no imaginaba que otras imágenes suyas serían su boleto a la cárcel.

II

PRIMERA PLANA

En las altas esferas del poder nadie imaginaba el desenlace de lo que acababa de suceder. Mientras por televisión se deslizaba la existencia de dos muertos que ahora estaban en la morgue del Hospital Fiorito, el ministro de Seguridad bonaerense, Luis Genoud, un ex diputado de estrechas vinculaciones con la corporación policial, negaba de plano aquella versión.

— ¡Es mentira! No hay muertos. Salí ya a desmentirlo — se llegó a decir a su par nacional, Juan José Álvarez, en una conversación telefónica mantenida poco después del mediodía.

— Es tu territorio y tu operativo. Salí a desmentirlo vos — replicó Álvarez, tomando distancias del asunto. Como ex intendente de Hurlingham, "Juanjo" es coneceder de la provincia.

En ese mismo instante, el ministro del Interior, Jorge Matzkin, hablaba por teléfono con el jefe de la Policía Federal, comisario Roberto Giacchino.

— Hay dos muertos, señor. No lo dude — fue el tajante diagnóstico del uniformado.

Exactamente a las cinco de la tarde, el ministro del Interior dio una conferencia de prensa, en la cual estuvieron vedadas las preguntas. Su gesto era adusto, casi amargo, y fue desgranando las palabras con una entonación que hacía recordar a los bandos de la dictadura militar. Reconoció los dos muertos, pero aseguró que se debían a "un enfrentamiento entre piqueteros". Y sin anestesia, afirmó que el objetivo de éstos era "vostar al Gobierno".

Por último, con tono amenazador, remató:

— En Argentina se acabó la tolerancia para los violentos.

Casi en paralelo, Alfredo Atanasef también echaba seña a la teoría de la conspiración, señalando ante otro grupo de periodistas que "todo era producto de un plan desestabilizador de alcance nacional". Ambos funcionarios seguían apoyándose en el informe de la SFDL.

Al día siguiente, el Gobierno ya estaba enterado de que los diarios publicarían las fotografías de la matanza en sus próximas ediciones. Franchiotti y su gente habían acribillado a sus víctimas sin advertir la presencia de reporteros gráficos a su alrededor. Uno de ellos, Sergio Kowalewski, que colabora en el periódico de las Madres de Plaza de Mayo, obtuvo una secuencia minuciosa de aquella sombra aguileña con gerra y escopeta, que se abría paso entre la multitud disparando a quemarropa.

A las siete de la tarde de aquel día, Luis Genoud trataba de comunicarse con el jefe de La Bonaerense, comisario Ricardo Degastaldi, que estaba en Mar del Plata disfrutando de un corto descanso. Pero antes de concretar el llamado, senó su propio teléfono.

— ¡Qué novedades tiene, ministro? — preguntó la voz de otro lado del celular.

— Nada nuevo, Presidente — respondió Genoud a Eduardo Duhalde.

— Muy bien; hasta luego. — El tono era cortante. Segundos más tarde, se anunciaron a Dosa que Duhalde estaba al teléfono.

— Felipe — se advirtió el Presidente —, mirá mañana las fotos de los diarios. Parece que fue la policía. Tené cuidado. Las imágenes eran abrumadoras.

Fueron las pruebas que llevaron tras las rejas a Franchiotti y su patota, integrada por el oficial principal Jesús Quevedo, el cabo primero Alejandro Acosta y el cabo Lorenzo Telman. También rodaría la cabeza del jefe departamental de Lomas de Zamora, comisario Osvaldo Vega, bajo cuyo mando jurisdiccional estaban las tropas que actuaron en la represión del Puente Pueyrredón. Igual suerte corrió su segundo, el comisario Mario Mijín, del cual, para colmo, en ese momento salía a la luz su pasado vinculado al terrorismo de Estado.

El despliegue fotográfico no sólo mostró el episodio de la Estación Avellaneda, sino que además hubo infinidad de tomas de otros policías disparando plomo sobre los manifestantes y borrando premeditadamente las huellas de su accionar. Los canales emitían videos de jefes policiales vestidos como piqueteros, dirigiendo la represión. Entre ellos estaba el oficial Mario de la Fuente y, a pocos metros, el sargento Carlos Leiva. Ambos permanecen prófugos.

Una visualización posterior del material televisivo permitió también identificar a un oficial de alto rango que recogía los cartuchos que Leiva disparaba. Se trataba del comisario Jorge Abel Echeverri, titular de la comisaría Lanús de Villa Obrera.

Affioraría entonces la certeza de que la masacre fue obra de un plan orquestado desde las entrañas policiales, y no la acción aislada de una patrulla loca comandada por un comisario chiflado. Prueba viviente de aquello es casi una veintena de manifestantes heridos con proyectiles letales, disparados desde por lo menos cinco posiciones equidistantes entre sí.

No menos significativo resultaría comprobar las llamadas telefónicas que hizo y recibió Franchiotti el 26 de junio en su celular, cuyo número es 4993-5702. El aparato sonó exactamente a las 17.30, a las 18.51 y a las 19.25, o sea, a pocas horas de la masacre, y llamaban desde el 4805-4422.

Ese número corresponde a una casa ubicada en la calle Bissinghurst 2461, del barrio de Palermo. Se trata nada menos que de la Base Bissinghurst de la SFD, donde se centralizan las tareas de infiltrar marchas de protesta e identificar a través de fotos o delaciones a los manifestantes. La dependencia está directamente a cargo del Señor 8, es decir, el ex intendente Oscar Rodríguez, nada menos que el antiguo mentor del policía homicida.

Todo indicaría que Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fueron marcados de antemano; más precisamente en una manifestación efectuada el 11 de junio frente a la Municipalidad de Guernica, uno de los feudos territoriales del actual subdirector de la SFD. Varios participantes de aquella marcha coincidieron en que los dos piqueteros fueron entonces fotografiados por unos sujetos que permanecían agazapados sobre la terraza del municipio.

La difusión periodística de lo que realmente había sucedido hizo que un secretario de Estado definiera el cuadro de situación con pocas palabras: "Nos salió todo para la mierda; hicimos todo mal. Compramos una operación y, por si fuera poco, operamos esa operación".

En las antipodas, "Juanjo" Álvarez, tal vez poseído por un optimismo inexplicable, señalaba: "La política de seguridad no sólo no cambió sino que salió fortalecida; por eso me quedo".

Lo cierto es que la carga radiactiva de La Bonaerense afectó al corazón del poder central.

Los proyectiles que dejaron sin vida a Darío Santillán y a Maximiliano Kosteki también arrasaron con dos integrantes del gabinete duhaldista: el titular de la SFD, Carlos Soria, y el ministro de Justicia, Jorge Vanossi. En el ámbito provincial, provocaron la caída del ministro Genoud y la del comisario Degastaldi, que había asumido el cargo apenas unos setenta días antes, en reemplazo del comisario Amadeo D'Angelo, alejado por un presunte pedido de coimas a prostíbulos.

En medio de ese clima, el gobernador Delaú dio un pase temerario al nombrar a Juan Pablo Cafiero como nuevo ministro de Seguridad. Desde entonces, los signos policiales adversos a su presencia han sido el combustible de una nueva pesadilla.

III

LA CELADA

—Para esto, señores, no hay otro que el comisario Daniel Rago.

El hombre pronunció la frase con un tono que chorreaba confianza, antes de caer en un estudiado silencio. Como al descuido, se deshizo con los dedos de una pelusa posada en la solapa. Fue su manera de calibrar el efecto de aquella recomendación.

—Es uno de nuestros mejores oficiales operativos y tiene un legajo impecable —redondeó, con suficiencia.

Su actitud parecía la de un gerente, aunque se trataba del secretario general de La Bonaerense, comisario Raúl Marcelo Cheves. Posee un título en Ciencias Sociales y es un consumado filatelista; muchos lo consideran la "cara intelectual" de la fuerza. Entre ellos, Felipe Solá.

La escena transcurría en el despacho del Gobernador. Frente a él, jugueteando con unas llaves, el debutante ministro de Seguridad permanecía callado. Solá lo miró y, a modo de consulta, enarcó las cejas. El asentimiento de "Luampi" Cafiero también fue gestual. El Gobernador finalmente se puso de pie y dijo:

—De acuerdo. Pero el anuncio oficial lo vamos a hacer por la tarde, junto al Cabezón.

Corría el lunes 15 de julio, y la sensación de inseguridad por la escalada de secuestros ya era el principal tema de la agenda política. La última semana había sido particularmente picante: cinco casos en el Gran Buenos Aires, entre los que se destacaba el del ex jugador de rugby Federico Virasoro, liberado tras nueve días de cautiverio, mediante un rescate de 50.000 dólares. Pero la gota que colmó el vaso fue el secuestro de Juan Manuel Canilla, el primero en tener un epílogo fatal. Lo asesinaron de un tiro en la nuca, luego de que su familia pagara el rescate en la puerta de su casa, ubicada en el barrio capitalino de Núñez. El cadáver apareció luego en territorio provincial.

La Bonaerense quedaba nuevamente en el banquillo, acusada esta vez de "trabajar a desgano".

Horas después, con la mayor de las reservas, florecía la hipótesis de que en ese hecho habrían participado algunos efectivos de la comisaría de Victoria.

"Los medios nos van a crucificar", vaticinaba una y otra vez el presidente Eduardo Duhalde, exagerando una mirada torva. Secundado por el ministro Juan José Álvarez, había convocado en la Casa Rosada a los jefes de todas las fuerzas de seguridad provinciales y federales. Allí también estaba el gobernador bonaerense y su nuevo ministro policial. Tras el cónclave, Duhalde anunció junto con Solá la decisión de crear con urgencia una Unidad Especial Antisecuestros en la provincia. A "Luampi" le tocó revelar quién sería el jefe del flamante grupo de élite.

Dicen que el nombramiento sorprendió gratamente hasta al propio comisario Daniel Rago, que no tardó en presentarse a extensos reportajes para dar a conocer sus ideas para el nuevo cargo.

No imaginaba lo fugaz que sería su permanencia allí.

El ministro Cafiero, que en el primer instante de su gestión había prometido "evaluar legajo por legajo de los 47 mil integrantes de la fuerza", nunca imaginó que se enteraría por los diarios que el hombre elegido para tan delicada misión era nada menos que un conspicuo colaborador del ex comisario Juan José Ribelli.

En una escucha telefónica —la cinta número 65 de la causa A.M.F.A.— Rago le dice:

—Juancito, contá conmigo para lo que necesites.

Esa oferta de ayuda fue formulada cuando Ribelli se puso al tanto de su inminente detención. Su hermano, el sub-comisario Jorge Rago, también figuraba en la lista de sospechosos por la voladura de la mutual judía.

Pero Daniel cumplió con creces su promesa: en 1999, cuando ya era jefe de la Departamental Lomas de Zamora, comenzó a circular la versión de que, junto a otros jefes policiales, sería el organizador de una colecta de aproximadamente 150.000 dólares mensuales para los uniformados encarcelados por aquel atentado. Dos años después, Rago sería desplazado

de su puesto, al descubrirse una picana eléctrica en una comisaría de esa jurisdicción.

Al conocerse la cinta, "Luampi" se maldijo por su inocencia. Fue el papelón fundacional de su gestión.

No tardó en comprender que el episodio no era fruto de un malentendido. Se trataba de un mensaje casi en clave de broma, una especie de celada light articulada por aquella criatura que se le había cruzado en su destino: la Malidita Policía.

IV

BLUES DEL TERROR AZUL

"Poner a este muchacho al frente de la seguridad provincial es como pretender que una maestra jardinera haga una cirugía a corazón abierto", definió, quizá con exageración, un comisario retirado de la fuerza.

No es una cuestión personal entre los "Patas Negras" y Cafiero. Ni tampoco tiene que ver con matices ideológicos. A los uniformados no les importa tanto el presunto espíritu garantista de su gestión, como el hecho de que el ministro sea un personaje foráneo a la corporación policial.

En su momento, de un modo similar los jefes de La Bonaerense se plantaron ante Aldo Rico, a quien lograron eyectar del Ministerio de Seguridad con otra sutileza: a través de una foto trucada le hicieron creer que el "Indio" Castillo, un matón vinculado a la represión, integraba la custodia del entonces presidente De la Rúa. Y el "Nato", al fin y al cabo un ex coronel de Infantería, entró como un caballo, debiendo regresar raudamente a San Miguel tras hacer pública esa foto en una conferencia de prensa.

En ese universo complejo y traicionero trataba de abrirse paso esta ex estrella del gobierno de la Alianza. El rechazo policial a su persona fue arrojando episodios más devastadores que el efecto cómico provocado por una simple recomendación maliciosa.

Durante la madrugada del segundo domingo de julio fueron profanadas 150 tumbas del cementerio islámico de La Matanza. Los ruidos fueron escuchados por el cuidador pero no por los efectivos policiales que debían custodiar el lugar.

Es casi un axioma: cada vez que reina el malestar en la franja más dura de La Bonaerense, inevitablemente hay profanaciones. Las hubo en 1997, tras asumir Luis Lugones como interventor civil en la fuerza, y también en 1999, cuando los Patas Negras quedaron cuestionados luego de la masacre de Ramallo. Solían ensañarse con cementerios judíos, pero ahora, tal vez para no ser tildados de antisemitas, sus autores han extendido esas prácticas a cementerios de otras comunidades.

Pocas horas antes de que esto sucediera, un extraño acontecimiento había sacudido a la familia policial: la ejecución del segundo jefe de la Departamental Morón, comisario Daniel Omar Palacios. El crimen fue cometido el 13 de julio en una elegante casa quinta de su propiedad, ubicada en Tortuguitas, cuando tres presuntos asaltantes ingresaron a la misma, para simplemente descerrajar tres balazos sobre la víctima y después irse.

Palacios se desempeñaba en el mismo territorio en el que el que había fortalecido su poder el actual jefe de la fuerza, comisario Alberto Sobrado. Pero allí Palacios era una especie de intruso, ya que había sido incrustado en Morón por el flamante segundo jefe de La Bonaerense, comisario Alberto Savasta, considerado un legalista de discurso políticamente correcto. En esos mismos días, Savasta halló oculto en el sillón de su despacho un micrófono que transmitía todo lo que allí se hablaba.

Otro asesinato de características similares se produjo el 8 de agosto en una esquina de Lanús, cuando el vehículo de otro jefe policial fue interceptado por los ocupantes de un Ford Escort. Los delincuentes, sin mostrar interés por sustraer objetos de valor, descargaron una ráfaga de ametralladora sobre su víctima.

El policía malogrado no era otro que el comisario Jorge Abel Echeverri, titular de la comisaría Lanús 8°, de Villa Obrera. El mismo Echeverri que fue identificado en un video mientras levantaba cartuchos de plomo durante la represión del 26 de junio en Avellaneda.

Aquí también hay otro axioma: cada vez que reina malestar en la franja más dura de La Bonaerense, muere algún alto jefe en un presunto intento de asalto. Del mismo modo, en vísperas a la intervención policial de León Arslanián, el comisario Adolfo Bassino, factótum de la cuestionada compra de helicópteros Robinson R22, fue ejecutado por dos extraños ladrones que, en vez de exigirle el botín, directamente le dispararon.

A esta suma de circunstancias puntuales se agregan el hostigamiento y, por lo menos, dos atentados a testigos que

identificaren a los policías acusados de los homicidios en Avellaneda.

Engrosaría este sórdido menú un crimen por encargo en un descampado de La Plata, donde un hombre fue asesinado por la espalda, luego de ser esposado al tronco de un árbol. Se trataba de Marcelo Peña, un abogado vinculado a una banda delictiva integrada por policías. Poco después serían detenidos por el hecho tres efectivos bonaerenses.

Por esos mismos días, en un vehículo abandonado fueron hallados tres cadáveres, uno de ellos decapitado. Las víctimas serían hampones de peso, ejecutados en el marco de un ajuste de cuentas. Casi al mismo tiempo era asesinado a balazos en la puerta de su domicilio el ex titular de la Unión Industrial de Avellaneda, Jorge Fernández Prieto.

El presunto plan policial para desestabilizar la gestión de Cafiero se completaría con una especie de huelga de hecho, consistente en relajar las tareas de vigilancia y establecer zonas liberadas, para así forzar al máximo la sensación térmica de la inseguridad: "poner palanca en boludo", como se dice en la jerga interna.

TERMINATOR

En ese contexto no resultó sorprendente la multiplicación desahogada de secuestros. Por esos días ya se buscaba infructuosamente a Diego Peralta, quien aparecería acuchillado el 12 de agosto.

El amanecer siguiente fue para Luis y Emilse Peralta el más agobiante de sus vidas. Durante toda la noche habían permanecido a los pies del féretro cerrado en el que yacía Diego.

No muy lejos de allí, el juez federal de Lomas de Zamora, Carlos Ferreira Pella, levantaba su mirada hacia el hombre de rasgos macilentos y muñecas esposadas que tenía frente a él.

Se trataba de Juan Pablo García, un ladrón de poca monta, analfabeto y ocasional informante de la policía, domiciliado a pocas cuadras de la casa de los Peralta. Era, por ese entonces, el único detenido en la causa por el secuestro y asesinato del chico; se lo acusaba de haber efectuado llamadas telefónicas a la familia para negociar el rescate.

Tras el hallazgo del cadáver, García pidió ampliar su declaración indagatoria. Comenzó con una revelación explosiva.

—¿Me puede repetir eso? —dijo, asombrado, el juez.

—Sí, señor, se lo repito: el sargento Giménez estuvo en el secuestro.

Se refería al jefe de calle de la comisaría de El Jagüel, Miguel Ángel Giménez, cuya figura había comenzado a tomar estado público dos noches antes, cuando una turba de vecinos enardecidos incendió esa dependencia.

El crimen del chico de El Jagüel sacó a la luz una hipótesis que sólo se mencionaba en voz baja y con un hilo de temor: el posible funcionamiento de un escuadrón de la muerte en Esteban Echeverría y Ezeiza, conectado tanto con algunos comerciantes como con dignatarios locales del poder político. Casi por decantación fue tomando estado público que en los dos últimos años habría otros cuatro adolescentes —algunos, con prontuario— desaparecidos o acribillados por balas policiales.

Todo bajo la figura omnipresente del sargento Giménez.

Ariel Chávez, de 19 años, también desapareció en esa zona desde la noche del 11 de noviembre de 2000. Previamente fue golpeado, esposado y subido a un mévil de la comisaría 1° de Ezeiza, donde ya había estado detenido.

La desaparición de Ariel había tenido ribetes inusuales. Horas después de aquel secuestro, un amigo del intendente Alejandro Granados, el director técnico del Club Tristán Suárez, Rodolfo Garayar, se presentó en la comisaría 1° para denunciar que minutos antes Chávez lo había asaltado. Testigo de aquel hecho fue el subinspector Diego Cristian Pavón, quien curiosamente está sindicado como uno de los policías que levantaron al chico.

Un amigo de Ariel presenció ese episodio a la distancia, y también responsabilizó a los suboficiales Eduardo Bogada, Juan de Dios Pezze, de la comisaría 1°, y al inflexible sargento Giménez, que por entonces prestaba servicios en la 5a de Ezeiza. Según doña Zulema Cabral, la madre del chico, todos ellos "seguían directivas de los comisarios Carlos Dombrosqui y Julio Quintela (jefe del Comando de Patrullas de Ezeiza), quienes organizaban este tipo de acciones".

El mismo elenco policial, con Giménez a la cabeza, también sería responsable de la desaparición de Alcides Fernández, de 15 años. Alcides fue visto por última vez el 3 de enero de 2002, mientras recogía cartones. Ya había estado detenido en la 1°, y posteriormente su madre, María López, denunció que el chico fue amenazado por personal de calle de esa seccional. Sus vecinos deslizaron que "comerciantes de la zona pagaban para que la policía limpie el barrio de cherritos". La abuela del menor, Natividad Molina, de 81 años, también apuntó sobre el intendente Granados, quien habría mandado a golpear al padre de Alcides, Luis Molina, porque "prefería trabajar de albañil y no hacerle trabajos políticos".

El vínculo entre Granados y esos efectivos de La Bonaerense se hizo explícito hace unos meses, cuando el intendente designó como director de seguridad municipal al comisario Quintela. Según sus propias palabras, lo hizo "con el propósito de fortalecer los lazos profesionales con la policía". Giménez sería uno de los uniformados predilectos de Granados, ya que en 1999 éste lo declaró "el mejor policía del municipio".

En la comisaría 1° de Ezeiza, tanto su cuestionada cúpula como la patota de calle no tardaron en ser transferidas hacia otros destinos. Pero uno de sus jefes actuales, el sub-comisario Julio César Ávila, esgrimió una insólita teoría lingüística para justificar a sus antecesores:

—Vea, cuando en Capital alguien se pierde, el asunto es 'averiguación de paradero'. Y acá simplemente le ponen 'desaparición', que es una palabra que sólo sirve para confundir los tontos.

A la cosecha roja en el feudo de Granados se le suma otro muerto: el 6 de febrero pasado, Hugo Javier Barrionuevo fue asesinado a balazos cuando participaba de un Piquete organizado en El Jagüel por la Agrupación Anibal Verón, a la que también pertenecían Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. La policía aseguró que el autor de los disparos fue "un automovilista furioso por ver impedido su derecho a circular". El iracundo chofer resultó ser el ex policía Jorge Bogado, dueño de una parrilla de la zona y puntero del intendente Granados.

Exactamente tres meses después se produjo la muerte de Emmanuel Salafia, cuyo cuerpo acribillado apareció en la cabina de una camioneta robada. El relato de los suboficiales

Roberto Macua e Isabel Ciarc, de la comisaría 5a, fue que ellos "interceptaron el vehículo y dispararon en legítima defensa", pero el fiscal Daniel Gualtieri comprobó que se había tratado de una ejecución. Fue el epílogo de una tortuosa relación entre los policías de la zona y la víctima, quien en otras ocasiones sufrió amenazas, una causa armada en su contra y hasta un secuestro extorsivo ocurrido hace dos años, en el que participaron efectivos de esa seccional.

Entre ellos se menciona "a un tal Giménez", tal como consta en el expediente.

Durante el último día de agosto, el nuevo superintendente de La Bonaerense, comisario Alberto Sobrado, y el jefe de la Brigada Antisecuestros, comisario Ángel Casafús, que sucedió a Rago en su fugaz gestión, declararon a la prensa haber resuelto dos casos a la vez, en el marco de la misma investigación: la muerte de Diego Peralta y el robo de un ciclomotor. El anuncio se produjo luego de 25 allanamientos y 17 detenciones; entre ellas, la del sargento Miguel Ángel Giménez y la de otro policía apellidado Reque. Pero éstos no estarían imputados en el secuestro y homicidio del adolescente, sino "en el asunto del ciclomotor", como se encargó de puntualizar Casafús. Posteriormente ambos recuperaron la libertad por falta de mérito.

El gobernador Felipe Solá creyó ver detrás del crimen de Diego Peralta una maniobra para hacer impedir sus aspiraciones a un nuevo mandato.

Para el comisario Sobrado, en cambio, la muerte del chico fue obra de delincuentes comunes, quienes actuaron sin ninguna motivación política.

El jefe policial suele despertar pasiones enconradas. Por un lado, fascina a sus allegados y, por otro, despierta una tenue desconfianza. Lo cierto es que a los 45 años se produjo su irresistible ascenso hacia la cúpula de la fuerza, convirtiéndose así en el jefe más joven de su historia.

Hombre de buena presencia, modales afables y conversación florida, supo encantar al ministro de Seguridad y Justicia de la Nación, Juan José Álvarez, cuando éste era intendente de Hurlingham. Por entonces Sobrado era un sub-comisario barrial.

De allí escaló a la jefatura de la Departamental Merón, territorio de otro padrino suyo: el senador provincial Horacio Remán. Este personaje antiguamente regenteaba una cadena de farmacias, y jamás se le pudo probar que vendiese medicamentos robados. Desde hace más de una década es una suerte de operador permanente entre La Bonaerense y el poder político de turno.

El senador, un amigo íntimo y socio de comisarios emblemáticos como Mario "Cherizo" Rodríguez y Domingo "Pinoche" Lugo, supo moldear desde las sombras el ansia y los deseos de los sectores policiales más duros. Negoció el reemplazo de Arslanián por Osvaldo Lorenze, un sacaprosos suburbano al que también había impulsado como juez en Merón.

Fue precisamente en la Departamental de esa zona donde Sobrado, al amparo de Remán, transitó por la etapa más intensa de su carrera.

Possiblemente en su legaje no haya constancia de algunos tropiezos. Pero el comisario Sebrado, junto al subcomisario Marcelo Andrade y el cabo Julián Barrios, está denunciado en la JPP (Investigación Penal Preliminar) N° 87451, que se tramita en la UFF 3 de Morón, a cargo del fiscal Gustavo Rebles, por los delitos de "falsedad ideológica en instrumento público, falso testimonio agravado y encubrimiento de evasión". El hecho también involucra a un preso apellidado Quinteros, quien habría abandonado su celda en la comisaría 6a de El Palomar, previo pago a Barrios de 10.000 dólares.

Durante el paso de Sebrado por Morón sucedieron otras tantas irregularidades. A cambio de dádivas, sus subordinados registraban por "averiguación de antecedentes" a personas que habían sido detenidas por delitos graves. Otros subordinados suyos produjeron lesiones gravísimas a una pareja que se desplazaba en un vehículo, en calidad de rehenes, y también hubo una banda policial en su jurisdicción, detenida tras comprobarse actividades como sustracción y corte de vehículos.

El secretario de Sebrado en la Jefatura no es otro que el subcomisario Jorge Fiallic, un viejo hombre de confianza del actual jefe.

Fiallic está mencionado en el expediente que investiga la masacre de Ramallo. De él se sospecha que habría tenido algo que ver en la contratación de la banda que asaltó el Banco Nación de esa localidad el trágico 16 de septiembre de 1999.

"Juampi" siempre tuvo conciencia de los escollos que tendría su gestión, pero evitó reconocerlos públicamente. Cada vez que algún periodista le ha preguntado al respecto, invariablemente contestó: "No pido respaldo policial. Mi único respaldo es el del Gobernador. No necesito otra cosa para trabajar".

Puede parecer que la aureola eminosa que envuelve a la fuerza policial más poderosa del país se renueva cada tanto. Pero esa imagen es un espejismo: no es que la Maldita Policía haya regresado; en realidad, nunca se fue.

Capítulo 5
CANTOS DE SIRENA

*"Buena parte de la política
en la provincia se financia
con la corrupción policial."*
Subsecretario *MARGELLO SAIN*

LOS HOMBRES DEL PRESIDENTE

Fueron horas extenuantes para el gobernador Felipe Solá, y la jornada aún no tenía visos de concluir.

La agenda de aquel jueves 14 de agosto había comenzado temprano en su residencia oficial de la Calle 5, con la visita del gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner. Primero posaron para las fotos, y luego tuvieron una breve conversación a solas, en la que abordaron el tema de las internas del P.J. Ambos coincidieron en que no se vislumbraba ningún arreglo al respecto y que, por ende, la estructura partidaria crujió. Finalmente se desplazaron al salón principal para unirse a sus cónyuges, Teresita González Fernández de Solá y Cristina Fernández de Kirchner.

Los diálogos fueron circunstanciales y con una fuerte carga protocolar. Muche no tenían para decirse, salvo transmitir a la Casa Rosada el mensaje elíptico de que quizá podría haber un acuerdo entre ellos. Sin protocolos de estilo, se dispuso que los fotógrafos trabajaran a sus anchas mientras las dos parejas departían entre sonrisas con un tono forzosamente casual. A quien más le costó mantener esa impostura fue precisamente al anfitrión; una seguidilla de funestas imágenes atravesaba su mente como una ráfaga apenas disimulada.

Tres días antes, dos muchachos que pescaban en una tosquera de Ezpeleta se habían topado con una espaldá que flotaba junto a la orilla; el resto del cuerpo permanecía bajo el agua. Era el acto final del secuestro de Diego Peralta, cuyo telón se había alzado del modo más sombrío. Eran los prolegómenos de un verdadero día de furia.

Al atardecer de ese mismo lunes, vecinos y amigos que responsabilizaban por el crimen a miembros de La Bonaerense marcharon iracundos hacia la comisaría del barrio. Y la quemaron sin encontrar resistencia. La policía ensayó a renglón seguido una respuesta de gases y balas de goma y la noche finalizó con furtivos saqueos y nuevos temores. Había sido la explosión violenta de un viejo rencor entre los habitantes del barrio El Jagüel y los efectivos policiales de la zona, sobre quienes pesaba la sospecha de estar asociados con un cúmulo de actividades ilícitas.

El Gobernador, tras despedir a su par santacruceño, se dejó caer en un sillón de cuero e intentó prender su habano Cohiba con un encendedor que se obstinaba en fallar. Un colaborador debió prestarle el suyo, mientras otro le extendía un celular, no sin antes susurrarle al oído el nombre del Presidente. Solá abandonó el cigarro sobre un cenicero y tomó el aparato.

—Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? —La inflexión de su voz intentaba traslucir alguna sorpresa.

Por algunos minutos el sucesor de Carlos Ruckauf permaneció en silencio, con el celular siempre en la mejilla y dando pequeños pasos en círculos. Su rostro se alteraba en un catálogo de muecas; asentía y negaba con la cabeza, enarcaba las cejas, lanzaba miradas hacia el cielo raso y, de tanto en tanto, trataba de insertar un bocadillo. No tuvo éxito: las palabras de su interlocutor se precipitaban sobre él como una lluvia pertinaz.

La conexión por lo ocurrido en El Jagüel agravó la de por sí tensa relación entre el Gobierno nacional y el provincial, con los compases de la campaña electoral sonando como música de fondo.

Esa misma pelea se había insinuado durante los trágicos hechos de junio, cuando balas policiales mataron a dos piqueteros en la estación de Avellaneda. Desde entonces, el conflicto fue creciendo en proporción directa a los índices de violencia en el territorio provincial. Esa sensación de inseguridad, alimentada por una ola de secuestros, desvelaba al Gobernador y hacía entrar en combustión el humor del Presidente. Ambos mandatarios habían cruzado sucesivos duelos verbales al respecto. En tales ocasiones, indefectiblemente, Solá exponía sus dificultades para marcar el rumbo a La Bonaerense.

Los sectores más duros de la fuerza no disimulaban su animosidad hacia la conducción política que les había tocado en gracia y exhibían su disgusto con una variedad abrumadora de recursos: bromas maliciosas, trabajo a reglamento, zonas liberadas y hasta el envío de cadáveres a modo de macabros telegramas. La teoría del complot, a la que tanto se apejaba el

nuevo ministro de Seguridad, tenía esos ingredientes. Juan Pablo Cafiero desataba un vendaval de réplicas y desmentidas, tanto del duhaldismo de paladar negro como de los propios jefes policiales. Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso fueron las explosivas declaraciones del subsecretario de Seguridad, Marcelo Saín: días antes había sacudido el tablero partidario al asegurar que "buena parte de la política en la provincia se financia con la corrupción policial".

El extenso monólogo telefónico que el Presidente le dispensaba al mandatario bonaerense continuó hasta que se escuchó un Solá contentorizador:

—Buene, Eduardo, no seas tan duro; cuando vos estabas acá, tampoco te fue bien con este asunto...

Sobrevino una nueva y prolongada diatriba desde el otro lado de la línea, que sólo culminó cuando el gobernador, derrumbado nuevamente en el sillón, dijo:

—De acuerdo; voy para allá. Nos vemos en un rato —y cortó la comunicación.

El habano que no había podido saborear, con su brasa ya extinguida, se había deslizado del cenicero y ahora yacía a un costado como una pieza mortuoria.

Exactamente a la una menos cuarto Felipe Solá ingresó en la Casa Rosada por la explanada de la calle Rivadavia. Lo hizo acompañado por un pequeño séquito de colaboradores y guardaespaldas. Estos quedaron en el Salón de los Bustos mientras el Gobernador ascendía hasta el primer piso. En el despacho presidencial lo aguardaba Eduardo Duhalde.

—Los diarios no hablan de otra cosa, Felipe —fue la primera frase que soltó. Su semblante era severo y tenía la boca más labrada que nunca.

Por su expreso pedido no estaba presente el ministro Cafiero, cuyo nombramiento él mismo había avalado 44 días antes. Ahora estaba arrepentido de ello, y su encone hacia el hijo de Don Antonio era tal que hasta se negaba a recibirlo. Sin embargo, para compensar al visitante, tuvo la deferencia de no citar tampoco a su propio ministro de Justicia y Seguridad, Juan José Álvarez. En esa decisión habría primado el sentido común, ya que su presencia hubiera desatado un conflicto innecesario que el Presidente evitaba por el momento.

Era un secreto a voces la enemistad que enfrentaba al ex intendente de Hurlingham con el Gobernador, pese a que en público ambos se esmeraban en parecer amigables. El entorno de Solá acusaba a "Juanjo" Álvarez de haber suscripto un oscuro pacto con Carlos Ruckauf para esmerilar su gestión. También señalaba al ministro como el impulsor en la sombra de las operaciones periodísticas irradiadas desde los medios controlados por Daniel Hadad. "Álvarez juega a que colabora con nosotros, y en realidad hace todo lo contrario", se escuchó decir en esos días a un ofuscado alto funcionario del Ejecutivo bonaerense.

—Hay que bajarle el perfil a todas las polémicas —dijo.

Duhalde, con convicción y sin preámbulos, mirando fijo al hombre sentado frente a él.

El mandatario provincial asintió con la cabeza, mirando a su vez cómo los dedos del Presidente jugueteaban con una lapicera; era su gesto característico a la hora de escoger las palabras. Solá temió que no tardaría en pedirle la cabeza de "Juanpi" Cafiero o, al menos, la de Marcelo Saín, su subsecretario de Seguridad.

Sin embargo, el Presidente no enarboló esas pretensiones y comenzó a expner su proyecto de crear un Comité de Crisis, unificando la acción policial en la Capital y el Gran Buenos Aires a través de un dispositivo conjunto de todas las fuerzas de seguridad. Enfatizó, eso sí, la urgencia del asunto, pero con un cuidado hincapié en las demoras previsibles para adecuar su marco legal, dado que la Ley de Seguridad Interior impide operativos de esas características en una jurisdicción provincial.

Solá, ya más distendido, aportó algunas sugerencias. Duhalde lo escuchaba con aparente interés. Luego estiró la comisura derecha de la boca: era su modo de sonreír. La tensión reinante parecía haberse disipado.

Hasta que, de pronto, la puerta se abrió.

La súbita llegada del jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, tuvo un efecto inesperado. El funcionario había entrado únicamente para dejar unos papeles que su jefe debía firmar. Pero a Solá se le transfiguró el rostro. Mirándolo de soslayo, se puso de pie. No fue precisamente para saludarlo. Atanasof, un ex sindicalista e integrante del ala dura del justicialismo

bonaerense, en los hechos actuaba como vocero del Gobierno. En calidad de tal había anticipado el día anterior la posible aplicación de "medidas excepcionales" en el territorio provincial, aunque sin apertar mayores detalles. Dejaba así flotando el fantasma del estado de sitio o, inclusive, el de la intervención. Sus dichos no tardaron en llegar a La Plata, donde provocaron la ira de Solá, quien inmediatamente entendió que la advertencia provenía de un eventual contrincante en la interna bonaerense; el jefe de Gabinete ya tenía un guiño de Duhalde para probar suerte como precandidato a gobernador. Ante el cariz que fue tomando su propio juego, Átanasef se apuró en reconocer, poco antes de que Solá llegara a la Rosada, que "por ahora no estaba contemplada ninguna medida excepcional en la provincia de Buenos Aires". Eso no evitó que los acontecimientos entre ellos se precipitaran.

—Podés mandarme la intervención cuando quieras —lo desafió Solá, avanzando resueltamente hacia él. Daba la impresión de estar fuera de sí.

Con una mezcla de asombro y desesperación, el jefe de Gabinete alcanzó a mirar al Presidente, quien permanecía atónito en su asiento; pero apartó la mirada al sentir la fugacidad de un empujón.

—¡Paré, Felipe! —bramó Duhalde, incorporándose como impulsado por un resorte.

Su alarido fue tan clamoroso que provocó el abrupto ingreso de un custodio, temeroso de estar ante un magnicidio. Al mismo tiempo entraba el secretario presidencial, José Pampuro, quien se interpuso entre los dos hombres en pugna.

"Esto es una vergüenza", farfullaba el primer mandatario una y otra vez, con los ojos clavados en el piso y sacudiendo la cabeza. Solá depuso su beligerancia corporal, pero prosiguió en una andanada de recriminaciones.

— Vos malinterpretaste todo, viejo —lo cortó Átanasef, alisándose las solapas del saco. Y tras prender su pipa con las manos aún temblorosas por el incidente, prosiguió:

— Si a los periodistas no les doy respuestas como ésa, el tema se agiganta como una bola de nieve.

El Gobernador no le contestó. Minutos después se lo vio emerger del Salón de los Bustos, estudiando a algunos periodistas congregados en la explanada de la calle Rivadavia.

II

MAGIA CHINA

En el regreso a La Plata permaneció pensativo y apesadumbrado. Su silencio inquietó a quienes viajaban con él.

Su expresión de agobio se prolongó durante un acto oficial, celebrado al atardecer en el Teatro Argentino. Era la inauguración de unas jornadas para el intercambio de experiencias en el sector sanitario. La Sala Astor Piazzolla estaba colmada de médicos, funcionarios y cámaras de televisión; asistían también el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y el titular bonaerense del área, Ismael Passaglia.

González García, a quien conocía desde hacía años, lo observaba con un aire socarrón, pero sin decir nada. Era probable que el veterano médico estuviera al tanto de lo sucedido en el despacho presidencial. A Solá lo invadía una combinación de vergüenza y remordimiento. No se perdonaba haber perdido el control y sentía que su estilo elegante, democrático y poco apegado al aparato partidario, el cual venía cultivando con esmero desde su despertar en la política, se había desplomado estrepitosamente.

Su mente voló hacia el tramo final de los años ochenta, cuando aún era un joven y promisorio dirigente justicialista, a cargo del Ministerio de Asuntos Agrarios durante la gestión de Antonio Cafiero. Ese recuerdo lo llevó a otro: las tribulaciones padecidas en aquellos días por el titular de la cartera de Gobierno, Luis Brunatti, al pretender interponerse en los destinos de La Bonaerense. Sus intentos por democratizar y expurgar a los "Patas Negras", sin contar con aliados de peso dentro de su estructura, lo llevaron al extremo de tener que pedir una pistola para volver a su casa, durante la última de las muchas concentraciones que los uniformados le hicieron en La Plata.

A casi tres lustros de aquello, Solá se descubría atrapado por la misma encrucijada. Temía haber incurrido, al igual que su antiguo colega de Gabinete, en el peor de los errores: ladrar, sin tener con qué morder.

Los aplausos que recibió la disertación del ministro González García lo rescataron de sus cavilaciones. Casi por reflejo, comenzó él también a aplaudir. Luego, consultó su reloj; faltaban quince minutos para las nueve. Aún tenía por delante un encuentro crucial.

Exactamente a esa hora, alguien lo esperaba en el Salón Rojo de la Gobernación, que se utiliza como antecámara para las audiencias con el primer mandatario.

Era un hombre ya mayor, de estatura breve y expresión serena. En sus ojos, sin embargo, brillaba una pizca de ferocidad. Había llegado puntualmente, unos quince minutos antes, y ahora, haciendo tintinear un pocillo, revolvió el azúcar de su segundo café. Su actitud traslucía impaciencia; trataba de matar el tiempo escrutando un reloj de pie que había pertenecido a Dardo Rocha y cuyas manecillas comparaba con las de su propio Rolex, como si hubiese una competencia entre los dos relojes.

Se trataba del comisario retirado Ramón Oreste Verón.

Había estado infinidad de veces en ese mismo recinto, pero siempre para ser recibido por otro gobernador, Carlos Ruckauf, que en diciembre de 1999 lo recuperó de la actividad privada, para convertirlo primero en el jefe policial de Años Ricos y luego, en ministro de Seguridad.

Desde entonces fue un símbolo de la mano dura, hasta que fue eyectado del cargo por una denuncia referida a 60 casos de menores supuestamente ejecutados por La Bonaerense durante su gestión. Aquella etapa fue el último eslabón de una inolvidable feja de servicios, cuyo origen tuvo visos de novela negra.

"El Chino", como lo llamaban en el ambiente, solía explicar su vocación por el uniforme pronunciando invariablemente la palabra "sangre". Se refería a la de su hermano mayor, que dejó un charco rojo en la vereda de la casa familiar cuando un grupo de asaltantes lo acribilló, al enfrentarse con la policía durante la retirada de un golpe. Precisamente esa imagen lo empujaría a alistarse en el bando contrario. Durante 32 años vistió con orgullo la gabardina azul. Fue un policía implacable

y hasta llegó a ponerle el cuerpo a las balas.

En el comienzo de los años setenta se tiroteó con una banda de secuestradores en San Miguel. De un lado disparaba él, junto a un joven oficial llamado Mario Naldi, a quien todos apodaban "El Gordo". Del otro lado estaban los hermanos Obregón, tipos de la pesada, que tenían de rehén a un nene de seis años. El fuego cruzado se prolongó durante largos minutos. Al final, el chico fue rescatado; pero Verón recibió cuatro proyectiles en el pulmón. Estuvo al borde de la muerte, y su convalecencia le costó seis meses de internación. Naldi diariamente le llevaba facturas. Así, entre catéteres y vigilantes, nació una entrañable amistad.

El reloj de Dardo Rocha comenzó a anunciar las nueve de la noche con una sucesión de campanadas graves. El viejo comisario meneó la cabeza en señal de disgusto. Pero en ese instante una secretaria le avisó que el Gobernador le estaba aguardando en su despacho.

Solá lo recibió sin levantarse de su asiento. Con tono cortante dijo:

—Disculpe la demora. Hoy tuve un día...

El policía asintió con un parpadec, mientras extendía una mano fría y húmeda.

A Solá nunca le había caído en gracia ese tipo. Lo conoció poco antes de jurar como vicegobernador de la provincia, cuando Ryckauf se refería a él en términos elogiosos y con miras a sumarle a su gestión. "Es un pesado de verdad, y los comisarios lo consideran un señor", afirmó entonces.

Entre sus atributos había uno que helaba la sangre: su legajo daba fe de que era el policía con mayor cantidad de abatidos en toda la historia de La Bonaerense: en la culata de su pistola había unas 45 muescas.

También tenía otro récord en su haber. Ante sus amigos, Verón se jactaba de haber resuelto más de 60 secuestros, en su mayoría de empresarios, junto con "El Gordo" Naldi y otro muchacho que se les había unido: Oscar Rossi, también conocido como "Cocodrilo" o, simplemente, "Coco". En los años setenta, los tres integraron una brigada de élite abocada a combatir esos delitos, conocida como Grupo Paris, en alusión al apellido del comisario que la comandaba. En 1977 la unidad fue desactivada por el general Ramón Camps. Sus legajos comenzaron a resbalar en la bruma de los años de plomo. De Verón, en particular, se sospechó que habría prestado servicios en "Coti Martínez", un centro clandestino de detención ubicado en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde Camps y el comisario Miguel Echecciatz solían presenciar las sesiones de tormento.

El Gobernador observaba al ex ministro con el mismo asombro de la primera vez. Estaba ansioso por saber qué motivo traía al comisario hasta su despacho: la iniciativa del encuentro había sido de Verón.

"El Chino", tras permanecer un largo rato con los ojos clavados en el suelo, levantó la mirada y fue al grano:

—Vea, estoy al tanto de sus dificultades con algunos comisarios. Y sepa que estoy a su entera disposición.

El Gobernador se rascó la barbilla, sin saber cómo tomar el ofrecimiento. Sin preámbulos, el veterano jefe policial le sugirió reducir las comisarias a la mitad y resolver el problema de los 7.400 presos bajo la custodia policial. Habló también de sueldos y presupuestos. Luego puso especial énfasis en la falta de diálogo entre políticos y uniformados. Y completó su exposición deslizando la conveniencia de acordar un pacto de gobernabilidad con los caciques de La Bonaerense.

Solá comprendió de inmediato que allí estaba la clave de aquella visita.

—Eso lo tendría que analizar con mis funcionarios del área —se atajó, tratando de dejar zanjada la cuestión. Verón insistió:

—Si no lo toma a mal, señor, puedo aportar la gente indicada para sondear el asunto...

Y recitó dos nombres.

No era un secreto que "El Chino" conservaba una gran influencia en las entrañas de la corporación policial. Su carrera lo había llevado por casi todas las brigadas de Investigaciones. En ese tránsito se le despertó un objetivo: llegar bien alto en la fuerza. Armó una "línea", como se les dice a las corrientes internas de la policía, asociándose con sus dos históricos compinches. Así fue como Verón, durante el reinado de Pedro Kuczynski, se convirtió en un policía exitoso, tuvo destinos estratégicos y ocupó espacios de poder. En cierto modo, su retiro también fue un golpe de suerte: ocurrió a mediados de 1995,

tras su aséptico paso como investigador de la causa *A.M.J.A.*; es decir, mucho antes de la debacle que precipitaría la caída de aquella cúpula.

—Hágame caso, señor gobernador; dígame a su ministro que reciba a estas personas —fue su frase final, antes de despedirse.

En la sala contigua, las campanadas del reloj comenzaban a marcar la medianoche.

El encuentro con los enviados del comisario Verón fue fijado con celeridad para el atardecer del viernes 15. Aunque hubo una ligera variación en lo convenido: no sería "Juampi" el encargado de recibirlos.

A la hora señalada, dos hombres pulcramente vestidos descendieron de una 4 x 4 para encaminarse por la Calle 2 hacia las escalinatas de mármol del Ministerio de Seguridad.

Uno era alto, sobrio y espigado; el otro, regordete, de voz aflautada y papada colosal. El primero lucía un impecable blazer con botones navales, y su acompañante, un brillante traje verde, que lo hacía parecer un comediante de Las Vegas.

Atravesaron el patio interno desparramando guiños, saludos y hasta abrazos. Se sentían a sus anchas y estaban familiarizados con cada palmo del lugar. En ese mismo edificio, hasta la reforma de León Arslanián, había funcionado la vieja Jefatura.

Al final del trayecto, el más bajo escrutó una de las puertas y, con un deje de pesar, gruñó:

—¡Qué hijos de puta! Esa era la cueva del "Gyico".

Se refería al comisario Eduardo Pérez Rejón, quien había sido el último secretario general de La Bonaerense durante la gestión de K. Jedczyk. Sobre la madera ahora brillaba una pequeña placa, en la que se podía leer: "Subsecretaría de Planificación".

Era el despacho de Marcelo Saín.

El comisario retirado Mario Naldi se anunció a una secretaria, mirando con altanería hacia el vacío. A su lado, el también comisario retirado Oscar Rossi ensayaba una expresión impávida. En el momento de entrar, ambos intercambiaron un guiño. Se sabían portadores, al mejor estilo siciliano, de una oferta que el funcionario no podría rechazar.

III

EL GORDO Y EL FLACO

—*Acá el problema es otro, querido; hay que avivarse que estamos frente a bandas delictivas muy complejas* —aseguró el comisario retirado *Maric Naldi*, llenando su boca del aire que siempre parece faltarle y la saliva que habitualmente le sobra.

Ocupaba un sillón situado en diagonal al del subsecretario de Seguridad, *Marcelo Saín*. Su amigo y socio, *Oscar Rossi*, seguía el hilo de la conversación desde el asiento que completaba el triángulo.

—*Esas bandas no tienen conexión policial. Se dedican al secuestro, para financiar la compra de armas y droga en cantidad* —prosiguió "El Ñeño", como suelen llamarlo sus amigos.

Saín no atinaba a interrumpirlo y, de tanto en tanto, acomodaba la montura de sus lentes sobre la nariz.

—*Los jefes de esas bandas, querido, viven en countries de la zona norte. Y claro, trabajan en las villas, especialmente en las de San Martín, porque desde allí se distribuye la droga* —remató *Naldi*, y fijó la mirada en una cadenita de oro que colgaba de su muñeca.

Este hombre de 57 años solía jactarse de haber sido el policía más felicitado en La Bonaerense.

Nacido en *Morén*, en el seno de una familia de clase media dedicada al comercio de artículos para el hogar, ingresó a la *Vucetich* el 28 de febrero de 1966, cuando todavía gobernaban los radicales. Sus primeros destinos fueron en comisarias del noroeste bonaerense, para luego recalcar en la zona norte, donde años después alcanzaría renombre. En treinta años de servicio transitó todo el espinel: secuestros, automotores y drogas. Al frente de la División Norte de Narcotráfico, la gloria acarició sus sienes.

El 21 de marzo de 1995, *Eduardo Duhalde* presidió el acto en el cual fueron condecorados por su participación en el operativo *Café Blanco* veintidós oficiales de la fuerza, con *Naldi* a la cabeza. Empapado en sudor, ancho como nunca, con su *Magnum 357* colgándole de la sobaquera, el "Gordo" fue el centro de los flashes y las cámaras.

Sin embargo, su trayectoria policial está plagada de puntos oscuros. Siempre estuvo en el ojo de la tormenta, tal vez por su holgada situación patrimonial. Entre los bienes que reiteradamente se le han atribuido, figura un lujoso chás en *Villa Devoto*, un departamento en *Punta del Este* y un yate valuado en 600.000 dólares que —dicen— tuvo que malvender cuando los medios comenzaron a publicar datos sobre su fortuna personal. Incluso se le adjudican dos propiedades en los Estados Unidos. Fue memorable el festejo de uno de sus cumpleaños en el *Alvear Palace Hotel*, donde —también dicen— habría gastado unos 60.000 dólares.

—*Esa es una de las tantas mentiras que circulan sobre mí* —declaró oportunamente—. Lo que pasa, querido, es que soy amigo de mucha gente, y esa fiestita me la pagó *Sutton Daba*, uno de los dueños del *Alvear*. Lo mismo pasa con el yate; yo jamás tuve embarcación propia, aunque, de vez en cuando, gente amiga me ha prestado sus veleros.

Pasado sorpresivamente a retiro a fines de 1996, por haber sido mencionado en una escucha del caso *Céppela* —en realidad fue confundido con un comisario de la Federal apellidado *Nardi*—, tuvo que volver con urgencia de Alemania, donde ajustaba los preparativos de la Operación *Strawberry*, de cuya fase final no pudo participar.

La injusticia cometida con él lo ofuscó. En esos días acostumbraba rechazar a los periodistas con palabras cargadas de rencor: "Ovídense de mí. Ustedes ya me jorobaron la vida".

Mantuvo el bajo perfil durante casi un lustro.

Buena parte de ese lapso prestó servicios como agente "inorgánico" de la *SJDE*. Dicha actividad tomó estado público cuando el proxeneta *Claudio Garbellano*, dueño del prestibulo gay al cual asistía el juez *Norberto Oyarbide*, reveló que el "Ñeño", junto al entonces jefe de contrainteligencia de la *SJDE*, *Jaime Stiuzo*, se hicieron una oferta para adquirir videos de los clientes que acudían a su establecimiento.

Naldi rompió su silencio recién en mayo de 2001. Por esa fecha comenzó a recorrer casi todos los programas vespertinos de televisión, en los que se gustaba ser presentado como "experto en temas de seguridad". Al poco tiempo, su rostro volvió a ser conocido por el público. Los domingos corría de los estudios de América IV hacia el programa de Grendena; por las mañanas atendía radios, y su voluminosa figura hasta llegó a ser tapa de una revista semanal.

Ante los micrófonos, invariablemente exponía su original idea de cercar las villas, para así evitar que los delincuentes salgan a la calle. Naldi, ahora cómodamente sentado en el despacho de Marcelo Saín, esbozaba nuevamente ese proyecto:

— Con el cerrojo en la villa podés bajar el delito un 50 por ciento en los primeros 90 días, y hasta un 70 por ciento en 120.

Entre ellos flotaba una canción de Spinetta, que el subsecretario había puesto, según aclaró, para neutralizar "los micrófonos que podrían haber metido acá".

Saín se resistía a desairar a su interlocutor refutando sus dichos, pero sí trató de pasar a otro tema.

— Yo creo más bien que el Gran Buenos Aires se está pareciendo a lo que era Río de Janeiro en los setenta y el Gran San Pablo en los ochenta...

El "Cecodrilo" Rossi, que había permanecido en silencio, interrumpió al subsecretario:

— El problema reside en la falta de previsión; este estallido de la delincuencia nunca se previó. En parte se debe al fracaso del Estado, y por otro lado, a la enorme brecha económica que existe hoy.

Sus palabras asombraron al joven funcionario, a quien se gustaba decir que era profesor universitario y que se había doctorado en la Universidad de Campinas, Brasil. Para no ser menos, el comisario retirado le contó que tenía un hijo estudiando Derecho en la Universidad de Bolonia.

Rossi era la antítesis de su acompañante.

Extremadamente cortés, sin llegar a la obsecuencia, el "Coco" se destacaba sobre todo por su inteligencia, siempre recalcada por los jueces y políticos que llegaron a tratarlo. "Es un tipo capaz", solían decir.

En la fuerza, algunos recordaban al antiguo jefe por un episodio más cercano al reino de la pasión que a la esfera estrictamente policial: el suicidio del comisario Rodolfo Cristóbal.

Todo el personal se había enterado de los entretelones de la tragedia por unos volantes anónimos que circularon en la Regional. Los uniformados criticaron en voz baja el supuesto exabrupto libertino del "Coco", que habría sido sorprendido por su amigo y compañero de promoción entre las sábanas de su propio lecho. Pero el asunto pasó rápidamente al olvido.

De los tres amigos, Rossi fue el que más lejos llegó en la estructura de la fuerza, sin contar la posterior gestión ministerial de Ramón Verón. Su cima profesional fue la jefatura de la estratégica Dirección de Narcotráfico.

A ese hombre le sentaba de maravillas integrar la cúpula. Lo tomaba con absoluta normalidad; se creía un predestinado. Su vieja amistad con muchos integrantes del fuero federal de la zona norte del Gran Buenos Aires le había allanado el camino para acceder a ese puesto. Además tenía bien ganado su apodo. El "Cecodrilo" fue, por encima de todo, un policía veraz; era diestro para urdir alianzas como para deshacerlas, y en ambos casos causando el menor ruido posible.

En la fase final de su carrera soñaba nada menos que con suceder al "Polaco" K Sedczyk. Pero no pudo ser, y pasó a retiro a fines de 1996, sacudido por la tormenta que envolvía entonces a la Maldita Policía.

No fue dificultoso su regreso al mundo civil. Rossi había conocido a Alfredo Yabrán en Mar del Plata, mientras investigaba el secuestro del hijo del sindicalista Diego Ibáñez. Años después esa relación se tradujo en un ofrecimiento concreto: el magnate postal lo quiso al frente de su aparato de seguridad. Rossi aceptó a medias: fue director de seguridad de Luncadella, una empresa adjudicada a Yabrán.

Al mismo tiempo buscó abrirse camino por su propia cuenta, formando una sociedad junto a sus viejos camaradas. En el Boletín Oficial N° 28.591, del viernes 21 de febrero de 1997, apareció un aviso dando cuenta de la constitución de "Global Solutions Consultora Integral". El anuncio legal presentaba como sus socios fundadores a "Ramón Orestes Verón, argentino, 23/5/46, viudo, empresario, domiciliado en Miguel Ángel 5667, de Villa Bosch, Tres de Febrero. Y Mario Naldi, argentino, divorciado, empresario, domiciliado en José Guba 4806, de Capital Federal". La dirección comercial quedó asentada en Esmeralda 351, a metros de Corrientes. En los papeles, Verón figuraba como presidente, y un

señor José Vertrugno como director suplente. Rossi, si bien era la tercera pata de la sociedad anónima, declinó registrar su nombre.

Así nació la famosa consultora en temas de seguridad, única en su género. La compañía casi no tiene empleados. Lo que se ve es apenas un conmutador. Según la explicación de Naldi: "Nosotros contratamos gente de acuerdo al trabajo que nos encarguen".

Verón y Rossi no suelen ir a la oficina todos los días, pero sí el "Ñeño", quien pasa sus tardes allí, disfrutando de la calma chicha, haciendo girar su sillón anatómico, echándose hacia atrás para probar la suspensión del respaldo y dejando en primer plano su voluminoso abdomen. Desde allí sigue la actualidad a través de un televiser de pantalla gigante, empotrado en la pared.

"Yo de acá no me muevo ni loco. Gano gaita, no tengo problemas. Y no me joden con boludeces los políticos de turno", suele explicar a sus ocasionales visitas.

Una versión asegura que allí funciona una suerte de cúpula policial en las sombras, a la que respondería —según se afirma dentro de la fuerza— un tercio de los 47.000 efectivos de la institución. Hay también quienes dicen que el primer trabajo de Global Solutions fue organizar la contrarreforma. En La Plata dan por sentado que algunos policías desplazados y agentes de la SJD, haciendo base en las oficinas de la calle Esmeralda, conspiraron para desestabilizar a Arslanián.

No es descabellado suponer eso.

La empresa se presenta como consultora, aunque no aclara sobre qué se la consulta. No es una agencia de seguridad, por cuanto no ofrece servicios de custodia ni vigilancia. Para muchos parecería tratarse de una gerencialera de La Bonaerense, abocada a blanquear los negocios que la fuerza no puede asumir. En sus filas reconocen que "la consultora" utiliza la red y los contactos policiales para encargarse de asuntos y, a la vez, hacer tareas de inteligencia. Cuentan que, recientemente, una empresa constructora contrató a Global para recuperar unas motoniveladoras robadas. El "Ñeño" mandó unos radiogramas a las departamentales, y las motoniveladoras aparecieron. La empresa cobró por ello 30.000 dólares, pagando a sus ocasionales colaboradores unos 10.000 patacones.

También se sabe que los socios de Global intervinieron como mediadores en algunos secuestros. Naldi, en particular, en el del chico Juan Pablo Anceschi, de Ramos Mejía. El negocio cierra: se paga el rescate, los negociadores cobran un porcentaje y la víctima recupera su libertad.

El trío empresarial, utilizando su condición de viejos caudillos de la Maldita Policía, suele jugar a dos puntas: se ofrecen al Estado como mediadores mientras constituyen un poder en sí mismo, gracias al respaldo de la corporación policial. Entre su clientela habría altos funcionarios de los ministerios del Interior y Justicia, personal jerárquico de la SJD y también el directorio del relanzado Canal 9.

Declamando cantos de sirena en su entrevista con el subsecretario, comenzaban a hacer base en el Ministerio de Seguridad provincial. Saín seguía escuchando a sus visitantes.

Rossi desgranaba un sinfín de recetas organizativas. Entre sus ideas se refería a la municipalización de la seguridad y también se pronunciaba acerca de la necesidad de crear una policía judicial.

De pronto, rió para sí, y dijo:

—Era inimaginable que esto hace algunos años saliera de mi boca. Pero, se confiese, doctor, que mi paso por empresas privadas me abrió la cabeza. Ahora todo lo miro con el ojo de un administrador.

Naldi, sin mucha sutileza, fue directamente al grano: —Mirá, en resumidas cuentas, la cosa es ayudarlos a ustedes y salvar la policía. Nosotros podemos hacerlo. El Subsecretario tragó saliva.

Dando por hecho el interés de su propuesta, Naldi aconsejó que fueran confirmados en sus cargos los comisarios Aníbal Degastaldi y Oscar Cánepa, titulares departamentales de Investigaciones y Seguridad de San Isidro; también pidió por el comisario Rodolfo Cercnel, de Quilmes y, por último, puso especial énfasis en la figura del jefe departamental de Lomas, comisario Claudio Smith.

Se trataba de un hombre que en los últimos tiempos fulguraba por televisión, apareciendo en una misma jornada durante la recuperación de una seccional amotinada en Villa Soldati y, luego, encabezando una liberación de rehenes en Avellaneda.

Saín, que seguía atónito, sólo alcanzó a decir:

—Este... Smith es un excelente policía.

Dando por hecho el interés de su propuesta, Naldi aconsejó que fueran confirmados en sus cargos los comisarios Claudio Smith, de Lomas, Anibal Degastaldi, de San Isidro, Oscar Cánepa, de Tigre, y Eduardo Coronel, de Quilmes.

Saín, que seguía atónito, sólo alcanzó a decir:

—Este... Coronel es un excelente policía.

Los dos antiguos comisarios fijaron la fecha de otro encuentro, y se retiraron tras sendos apretones de mano. Derrochaban amabilidad.

—Buene, quedamos en contacto —dijo Rossi, antes de cruzar la puerta.

Naldi ya se le había adelantado.

Saín volvió a hundirse en el sillón, con una expresión perpleja. Había comprendido que algo estaba por comenzar. Aunque no sabía exactamente qué.

Capítulo 6
VIÑAS DE IRA

—¿Es verdad que al asesino lo tienen cercado?
—En realidad no sabemos dónde está, pero se
aseguro que el prófugo tiene las horas
contadas —contestó el comisario Claudio Smith.

I

DÍA DE FURIA

Fras recortó la cartulina, dibujó unas letras con caligrafía casi infantil.

Acompañaba la acción asemando la lengua por el extremo de la boca en el que su bigote se hacía desaparejo. Luego adosó aquel rectángulo sobre la puerta que daba a una pequeña habitación. Rascándose la calva, retrocedió unos pasos para apreciar su obra con deleite. En ella podía leerse "Comité de Crisis".

Así era él; se tomaba a pecho hasta los mínimos detalles.

— Jefe, abajo hay tres canales de televisión y unos muchachos de Gente —le avisaron.

Unos minutos después emergió de las escaleras, con la camisa arremangada y una coqueta pistola Glock encajada en la cintura.

Era el único detalle que sugería su condición de policía. El resto de su estampa asemejaba la de un antiguo y postergado burócrata municipal. A los periodistas les costó reconocer en él al jefe que habían ido a entrevistar.

Hasta ese día su carrera no le había deparado esos rebotes mediáticos a los que ya estaban acostumbrados algunos de sus camaradas de promoción, como el comisario Oscar Vigilante, también conocido como "el Caballo", o Carlos Miniscarce, a quien sus amigos apodaban "el Vampire".

En cierto modo los envidiaba, ya que estaban asignados a una investigación tan de vidriera como el caso de José Luis Cabezas. La posibilidad de tener bajo su responsabilidad un caso de gran repercusión le despertaba ilusiones que hasta entonces nunca había podido paladear.

Al acercarse a los hombres de prensa, sintió un alegre estremecimiento. Tuvo la certeza de que al fin había llegado su momento.

— El cuádruple homicida prófugo sabe que con nosotros no hay escapatoria posible... —aseguró, modulando la voz, pero sin poder evitar el seseo que arrastra desde su infancia.

— ¿Es verdad que lo tienen cercado? — quise saber uno de los movileros.

— Tanto como cercado, no — admitió, ya con voz menos áspera.

— ¿En qué etapa de la búsqueda se encuentran, entonces? — indagó otro de los periodistas.

La pregunta, inesperadamente, le provocó un ramalazo de nerviosismo y dio por terminada su conferencia con una definición que sonó ambigua:

— En realidad no sabemos donde está, pero les aseguro que el prófugo tiene las horas contadas.

Unas horas antes, el comisario Claude Smith, de la DDJ (Dirección Departamental de Investigaciones) de Quilmes, había sido designado al frente de un equipo especial de doce detectives abocados exclusivamente a rastrear al taxista Hugo Acevedo, cuya sangrienta faena conmovía por esos días a la opinión pública.

Sus vecinos del Barrio Pepsi lo tenían por un tipo difícil; siempre se mostraba hosco y no saludaba a nadie. Pero el sábado 7 de marzo de 1998 despertó de un talante peor que el habitual.

Y obró en consecuencia.

Fras el desayuno, ahorcó a su pareja sobre la cama matrimonial. Luego partió apresuradamente hacia Quilmes para finiquitar otros encenos. Allí mató de seis disparos al marido de su primera mujer. Poco después, su ex cónyuge lo vio llegar a su pequeño negocio, sin suponer que otros seis tiros la convertirían en la siguiente víctima. Finalmente, Acevedo enfiló hacia el monoblock donde vivía su madre; ella pidió que no hiciera ruido para no despertar a su padrastro. Al rato, del anciano sólo quedaba un cadáver atravesado por doce proyectiles.

Desde entonces el paradero de Acevedo fue un enigma.

El propio gobernador Eduardo Duhalde había ofrecido una recompensa de 30.000 pesos a quienes aportasen infor-

mación fehaciente para localizar y detener al taxista convertido en cuádruple homicida.

La premura tenía una lógica de marketing. Acevedo no era un maleante sociológico ni un efectivo de La Bonaerense; el impacto de sus crímenes daría un respiro a los desatines cometidos en el área de seguridad.

Esa, al menos, fue la conclusión a la que llegaron los asesores del Gobernador.

II

LA NOCHE DEL CAZADOR

En esos días, Eduardo Duhalde no ganaba para sustos.

Un mes antes había tenido su más reciente sobresalto causado por las fuerzas oscuras que tanto temía. En su residencia de Pinamar, al despertar un domingo, sus guardaespaldas descubrieron que les habían robado un FAL con dos cargadores y dos escopetas calibre 12.70, marca Bañtró y Batán.

De los ladrones no había rastros. Ni siquiera habían forzado puertas o ventanas. El armamento se hallaba en un sitio estratégico de la casa, y ningún mercedeador espontáneo hubiera dado con él ni aunque le hubiese favorecido el más impensable de los azares. El FAL fue abandonado en la puerta de la casa, con el deliberado propósito de ser visto.

El hecho tuvo la elocuencia de un radiograma.

Aún estaba fresco otro recordatorio dejado en el interior de un auto en Iimas, al costado de la ruta. Había ocurrido un año antes y a escasos metros de allí, con el asesinato de José Luis Cabezas. Para colmo, en el fragor del triste aniversario, el interventor civil de La Bonaerense, Luis Lugones, había tenido la ocurrencia de decir que "no hay pruebas" que involucren a Alfredo Yabrán en el asesinato", mientras el propio Duhalde trataba por todos los medios de probar que el empresario estaba vinculado con ese crimen.

Esta y otras afirmaciones poco afortunadas de Lugones sellaron su suerte.

Duhalde dejó que Lugones se quemara con la primera fase de la reforma policial, tras la cual lo reemplazó por el ex camarista León Arslanián, su verdadero arquitecto.

La intervención civil a la Policía había concluido. El cargo del nuevo funcionario era el de ministro de Seguridad y Justicia. Su caballito de batalla fue desguazar la estructura monolítica de la fuerza en diez y ocho policías departamentales autónomas, para así impedir el flujo piramidal de la recaudación.

El primer cimbronazo se produjo con la renuncia del subsecretario de Investigaciones Judiciales del flamante ministerio, Juan Ramón Ramos Padilla, un abogado de extracción radical que hasta 1989 fue titular del juzgado federal de Morón. Lo significativo fue que el funcionario se alejó de su cargo apenas cinco días después de su designación. Su temprana renuncia sembró dudas sobre la reestructuración en su conjunto.

Pese al breve lapso que estuvo en función, Ramos Padilla dejó sembradas semillas de peligro. Impulsó el relevo de Luis Vicat, que ya estaba al frente de la estratégica Dirección de Asuntos Internos, y lo reemplazó por el comisario Víctor Fogelman. En ese momento, la Dirección llevaba adelante dos investigaciones: una sobre el "Vampiro" Miniscarco por "enriquecimiento ilícito", y otra precisamente sobre Fogelman, por presuntas irregularidades en el caso Cabezas. Al ser designado al frente de esa dependencia, pasaba a ser, pasaba a ser el investigador de sí mismo.

Miniscarco fue ascendido a comisario inspector y nombrado en la jefatura de la Dirección de Investigaciones. Paralelamente, el ex juez Ramos Padilla nombró al comisario Eduardo Martínez como jefe de la Unidad de Investigaciones Complejas. Por último, ordenó la disolución del Área Especial. Esa tarea le cupo a Claudio Smith.

El puntilloso comisario no las tenía todas consigo.

Ya había pasado casi mes y medio del cuádruple homicidio de Quilmes y su autor aún tenía los pies en polvorosa. Sólo se había interceptado un par de conversaciones que mantuvo desde un teléfono público con su madre en los días posteriores a los asesinatos.

El comisario Smith no perdía las esperanzas de dur con él, y utilizaba ingeniosos métodos para lograrlo. Solía visitar a la progenitora del prófugo, Ada Delgado, con la que, pacientemente, fue cimentando una relación de confianza. Un día la anciana le mostró un álbum. En él había diversos retratos familiares. En casi todos estaba Hugo en diferentes edades y etapas de su vida: el colegio, la primera comunión, su casamiento. Pero todas ellas tenían un denominador común: la

expresión entre temerosa y acechante de sus ojos. Doña Ada las exhibía con un dejo de ternura; incluso besó la superficie de una de ellas. Sin contener el llanto, exclamó:

—Mi bebé... ¿Dónde estará mi bebé?

Esa misma pregunta, pero planteada en otros términos, era la que se hacía el comisario. Intuía que en esa anciana estaba la llave para acceder a la respuesta.

En esas circunstancias recibió la noticia de que el subsecretario Rgmos Padilla le había elegido para tomar por asalto las dependencias del Área Especial. Por fin podía paladear el saber corporativo de la venganza.

Al fin y al cabo llevaba sobre sus hombros antecedentes de confusa naturaleza. Había sido uno de los autores de la llamada "masacre de Villa Albertina", ocurrida el 17 de junio de 1985. Ese día, junto a otros tres uniformados, acribilló a una familia que se encontraba en el interior de una casilla de chapa, al creer que allí se escondía un ladrón. Smith estuvo procesado por ese hecho e, incluso, durante algunos meses cumplió prisión preventiva.

Posteriormente pudo acomodarse en el círculo de amigos íntimos del comisario Mario Naldi. Ahora se convertía en la cara más visible del grupo orgánicamente conducido por Carlos Miniscarco, en el que también estaba el comisario Oscar Vigilanco.

El Caballe, como le gustaba que le dijeran, había adquirido una dudosa celebridad al encabezar el procedimiento en el que se detuvo en Mar del Plata a la banda de "Los Pepitos". En el allanamiento del domicilio de Martínez Maidana, uno de los supuestos sospechosos por el crimen de Cabezas, Vigilanco, en vez de precintar el revólver secuestrado para depositarlo en un sobre, como lo establecen los reglamentos, salió de la casa luciendo esa arma en la cintura.

En la noche del miércoles 22 de abril, la gente del Área Especial ya estaba enterada de la llegada del comisario Smith al mando de una especie de horda. A último momento, los expedientes más importantes fueron sacados de allí, ocultos bajo el asiento de una camioneta. Su destino era el despacho de la jueza Silvia González. El vehículo ganó la calle, justo cuando por el mismo portón ingresaban los comisarios Martínez y Miniscarco; acompañados por una selecta guardia preteriana.

Smith hizo acto de presencia en los primeros minutos del día siguiente, encabezando a veinticuatro hombres armados. Con perfecta sincronía, se apostaron en puntos estratégicos, obligando a los presentes a tener las manos visibles. Smith aclaró con tono energético, por si alguien no había comprendido:

— ¡Esto está intervenido y va ser disuelto!

— Su seseo era más pronunciado que nunca.

El Vampire, entre tanto, hojeaba un tomo de su propio expediente por "enriquecimiento ilícito". La sonrisa que esbozó hacía juego con su apodo.

III

LA DANZA DE LOS SUICIDAS

Hubo un tiempo en que Miniscarco no era aún el Vampire.

En 1985 se desempeñaba en la subcomisaría de la localidad de Alberdi. Por entonces vivía en la localidad de Vedia con su mujer, Susana Quiñones, en una pequeña vivienda que les había cedido el padre de ella, dueño de una barraca. El aún joven oficial se movilizaba a bordo de un desvencijado Renault 18. Sus trapisendos eran de baja estofa; no pasaban de requisar cueros de liebres a los cazadores furtivos.

Tuvo su primer "ruído" al convertirse en el brazo ejecutor de la "masacre de Germania", un caserío cercano a General Pinto, donde descerrajó sendos balazos a quemarropa a dos ladrones rurales.

Los disparos fueron efectuados con un revólver 32 apoyado sobre las sienes de las víctimas.

—¡Pará! ¿Por qué carajo les tirás tan de cerca? —se indignó un sargento que lo acompañaba.

—Para asegurar la puntería, boludo —fue su respuesta.

La situación patrimonial de Miniscarco dio un inexplicable giro en 1990, luego de su nombramiento como encargado de la División de Cuatreroismo, en Pergamino.

Poco después protagonizó un episodio que le serviría para cincelar su perfil: el traslado en avión desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, de un caballo de carrera que había sido secuestrado en La Plata. Habría pertenecido al ex gobernador bonaerense Victorio Calabró, con el cual entabló una cordial amistad.

En esos años comenzó a construir una casena valuada en unos 100.000 dólares, ubicada en la calle Solari, de Vedia. Al año siguiente adquirió por 250.000 una casaquinta en la misma localidad y un tambo de última tecnología, además de un campo de 250 hectáreas. Sin embargo, vivía en un departamento capitalino que había comprado en la esquina de Corrientes y Callao. Ya prestaba servicios en una dependencia de Grand Bourg, con grado de comisario, donde permaneció durante tres largos y fructíferos años. Pero nunca cortó los lazos con su Vedia natal. Allí residía un prestamista apellidado Eder, quien, según dicen en el pueblo, habría sido el encargado de lavar sus dividendos.

De Vedia era también el abogado Héctor Cazabat, que impulsó la denuncia contra él por "enriquecimiento ilícito". Cuando esa causa judicial comenzó a tomar impulso, extrañamente, Cazabat murió como consecuencia de un presunto suicidio.

El Vampire seguía sonriendo en la sede del Área Especial, mientras repasaba aquellas fejas judiciales que hablaban de su historia. A su lado, el comisario Martínez se había enfrascado en una insólita arenga de tono bíblico, dirigida al personal de la ya disuelta repartición:

—¡Ustedes son como el hijo pródigo! Los arrepentidos de su error serán otra vez bienvenidos en las filas de la fuerza.

Martínez era el segundo de Naldi cuando éste era jefe de Narcotráfico Norte. Su feja de servicios incluye una detención por parte de la Gendarmería en Salta, junto al infame principal Daniel Diamante y Antonio Gerase, ambos célebres por el caso Coppola. Diamante y Gerase integraban el círculo áulico de Martínez, quien a su vez supo ser íntimo del cuestionado Cocodrilo Rossi.

En los siguientes meses, Miniscarco, Martínez y Smith fueron consolidando sus espacios de poder.

Casi con paciencia oriental, ya a fines de junio Smith pudo dar con el taxista asesino. Tal como había intuido en aquella lejana visita efectuada a Doña Ada, fue finalmente ésta la entregadora de su hijo. "Es la única forma de preservar su vida, señora", fue un argumento demovedor para convencerla. Tres días después, en una oscura celda de la DDI de Quilmes, Hugo Acevedo se suicidó.

IV

CLUB DE AMIGOS

Su oficio era robar y ahora temblaba de miedo. Razones no le faltaban.

El hombre contó que el 30 de junio de 1998 participó en el asalto al laboratorio Cyanamid, ubicado en la ruta provincial 36 y Juana Azurduy, de Florencio Varela. Aseguraba que los entregadores eran policías y que, en el momento del asalto, hasta había zona liberada. El robo fue un éxito; los pistoleros se llevaron un botín de 196.000 pesos sin complicaciones.

Su pesadilla comenzó en la madrugada siguiente al golpe. Fue secuestrado por dos hombres de civil que lo llevaron a una ex dependencia policial abandonada, cerca de Lavalls. Allí lo torturaron; querían saber dónde estaba el dinero robado. El ladrón estaba seguro de que sus captores eran policías.

Completó su relato con otro hecho que habría sido instigado por la misma gente: el asalto a la sucursal del Banco Torquinst ubicada en Nazca y Gaona de la Capital. Fue en la mañana del 11 de agosto de 1998. En esa ocasión los asaltantes se llevaron 107.000 pesos.

El método parecía el mismo: algunos policías reclutaban delincuentes para cometer un asalto. Los uniformados se encargaban de hacer inteligencia sobre el objetivo y conseguían las armas. Después del golpe venía el apriete, con el propósito de "mejicanear" el botín. En el peor de los casos, mataban a los ladrones y luego simulaban un enfrentamiento.

Esa banda policial habría mantenido algunas reuniones en una de las torres del Barrio Pepsi, de Florencio Varela. 4 Allí estaría el departamento de Emilia, alias "la Correntina". Se trataba de la mujer de Anibal Fretes, un pirata del asfalto que continúa detenido en un pabellón vecino al del célebre ex comisario Juan José Ribelli.

El 27 de agosto de 1998, el gobernador Eduardo Duhalde habría recibido un informe que detallaba las actividades del grupo. Se afirma que lo leyó con una incontestable mueca de preocupación. Su comentario fue: "Esto me puede estallar en el despacho". El paper involucraba a algunos policías que habían prestado servicios en las brigadas de Lanús y Quilmes, y en Sustracción de Automotores. Tres destinos por los que Juan José Ribelli también pasó.

Nunca se supo qué medidas tomó el gobernador. Pero a partir de entonces los integrantes del grupo habrían cesado sus actividades. La existencia del informe recibido por Duhalde fue confirmada mucho después por una fuente estrechamente vinculada al entonces ministro de Justicia y Seguridad,

León Arslanián.

En el invierno de 1998, Juan José Ribelli era el preso más importante del país. A través de socios y administradores conservaba en pie sus intereses comerciales privados: tres agencias de autos, una empresa de seguridad y una joyería. Desde su celda controlaba algunos resortes claves de la interna policial mediante altos jefes que le respondían y colaboraban puntualmente con los gastos carcelarios de los ex uniformados detenidos por el caso AMJA. Esto suponía honorarios de los abogados, manutención de familiares y gastos personales de los detenidos. En Caseros circulaba la versión de que, sólo para solventar sus comodidades, Ribelli recibía una ayuda de 5.000 pesos mensuales.

El "Club de Amigos" que ejercitaba aquella suerte de solidaridad activa estuvo integrado por un nutrido grupo de oficiales en actividad. Era un acto de reciprocidad: Ribelli había aportado dinero, abogados y gestiones cuando alguno de ellos estuvo en problemas. Se calcula que durante esa temporada, el presupuesto mensual destinado a los policías presos por el atentado a la mutual judía oscilaba entre los 150.000 y los 200.000 pesos.

Los tentáculos del ex comisario se extendían a través de una compleja red de dependencias policiales diseminadas en el vasto territorio bonaerense, que incluían La Matanza, Almirante Brown y Banfield. Pero sus zonas de mayor influencia eran Quilmes y Lomas de Zamora. Ribelli nunca prestó servicios en esta última, pero al jefe de la Departamental de Seguridad era el comisario Daniel Rago, hermano de Jorge Horacio Rago, uno de los detenidos en la causa AMJA.

Quienes los conocieron aseguran que es muy fuerte el lazo fraternal que los une. Daniel solía quejarse amargamente de

que su futuro policial era sombrío "por portación de apellido". Pero desde que detuvieron a Jorge Heracio no ha dejado de estar pendiente de su situación y de sus necesidades.

Eso lo comprendió el comisario Claudio Smith, que había escalado a la Jefatura de Investigaciones de la misma Departamental. Rago había tomado la ayuda a su hermano como una verdadera militancia, y Smith lo secundó en la gesta.

En Lomas de Zamora sobrevivían numerosos bolscones de corrupción policial. La recaudación proseguía en su variante clásica: de abajo hacia arriba, y "arreglando" con delitos como drogas, juego y prostitución.

La situación en Quilmes era más compleja. Ribelli desembarcó allí en 1988 siendo un simple oficial inspector, de la mano del comisario Pedro Kłodczyk, titular de la Brigada. Regresó cinco años después, pero ya como subjefe. La estructura ilegal que funcionaba en esa jurisdicción data de aquellos tiempos.

La DDI de Quilmes era considerada la "gran caja" de la zona. Sus negocios eran variados. Uno de los negocios era el doblaje de camiones: algunos uniformados compraban colectivos viejos y conseguían camiones robados; luego desarmaban el vehículo de pasajeros y los pasaban las autopartes al transporte de carga. Los camiones eran vendidos a razón de 20.000 pesos por unidad. Una operación ulterior consistía en detener al comprador y obligarlo a un "arreglo" para no ir preso.

A partir de ahí se controlaba todo el negocio automotor de la zona: no sólo había policías que cobran 500 pesos semanales a los desarmaderos, sino también agencias de autos que se veían obligadas a "colaborar" para no tener problemas. Otra actividad era comprar autos siniestrados con los papeles en regla, para luego doblarlos con vehículos idénticos pero robados.

Contaban, además, con dos importantes desarmaderos propios. Uno se encontraba en las afueras de Villa Elisa; el otro, en la zona periférica de Quilmes. Este último predio, en 1998, estaba manejado por un comisario que aparecía como frecuente interlocutor de Ribelli en las escuchas obtenidas por el juez José Luis Galeano: Alfredo Franchietti.

El jefe de Operaciones de esta Departamental era el comisario Roberto Oscar Mantel. Se trataba de uno de los hombres del "Lebe" —apelativo por el que se conoce a Ribelli— que estuvieron detenidos por la masacre de Wilde. Además atesoraba causas por defraudación, extorsión y apremios ilegales. En la primera fue sobreseído y las otras prescribieron.

Otra fuente de divisas era manejada por algunos efectivos de la Planta Verificadora de Quilmes —ex Sustracción de Automotores—. Solían cobrar 500 pesos mensuales a los locales que venden formularios. Luego extraían una buena tajada con la verificación misma: si algún vehículo era mellizo o doblado, se los legalizaba por unos módicos 300 pesos.

Se calcula que por allí circulaban no menos de 100 vehículos por día.

En 1998, el jefe de esa dependencia era el comisario inspector Eduardo Gómez. Se trataba de otro de los vinculados al asunto de Wilde. También arrastraba un proceso por tentativa de extorsión, que luego quedó paralizado. Administraba la agencia de autos que Ribelli poseía sobre la avenida Pavón, y era además propietario de una compañía de seguros en Avellaneda.

Quienes conocen el organigrama de la recaudación policial de la zona aseguran que la División Verificación de Automotores era un lugar clave, ya que allí se canalizaba parte de lo recaudado en la DDI y en la Planta Verificadora.

Por entonces su jefe era el comisario Jorge Cassino, que fue trasladado a Almirante Brown. Este policía reside aún hoy en una mansión ubicada en la calle Derqui. En un galpón situado en esa misma cuadra, funciona el "Team Cassino", su propia escudería de kártings de carrera. Además posee otras dos propiedades, un campo cerca de La Plata, una empresa financiera, una camioneta 4x4 y otros tres vehículos. Se le instruyeron dos causas por defraudación, una por extorsión y otra por incumplimiento de deberes de funcionario público. En una fue sobreseído y las otras dos prescribieron. Estuvo imputado en la causa de la "Aduana Paralela", que él mismo investigó.

El comisario Carlos "La Rana" Reynoso, por su parte, era para los detenidos por la causa AMJA una especie de tesorero; a sus manos iban a parar las sumas que reunían los amigos de Ribelli. Llevaba una parte a los abogados y el resto se lo daba a Ribelli en persona.

Reynoso lo sigue visitando por lo menos una vez por semana. Tal vez sea en quien más confía Ribelli. Se podría decir que es su manager y también su administrador: en la actualidad conduce la agencia de seguridad SAT, propiedad del ex comisario. Posee una estación de servicio situada en Remedios de Escalada, en sociedad con el comisario Moltedo, cuñado

de Ribelli. Asimismo, es dueño de una casa de repuestos en Derazategui. Hace años estuvo detenido por el caso de la nafta adulterada.

Los amigos de los ex pelotaris procesados por el juez Galeano mantenían en ese invierno un riguroso bajo perfil. Conservaban la misma estructura que existía cuando Ribelli estaba en libertad, pero rara vez se reunían entre ellos, se cuidaban al hablar por teléfono y no se dejaban ver juntos.

El propio Ribelli les había recomendado discreción, ya que uno de sus miedos era que estuviesen vigilados por "agentes judíos", como él mismo los definía.

EL LEÓN EN INVIERNO

El gobernador Duhalde sabía perfectamente que de no solucionar el asunto policial, sus aspiraciones presidenciales se verían en un brete.

León Arslanián era consciente de que su reforma no era fruto de una decisión política sino de un apuro electoral. Pronto adquirió la certeza de que la reestructuración en marcha se reducía a maquillar los frentes de las dependencias policiales y rebautizar sus unidades operativas. Y, tal vez, así lograr adormecer hasta los comicios del 24 de octubre de 1999 aquella criatura monstruosa nacida en las entrañas de la institución policial.

Esto último no fue sino una quimera.

En su afán por complacer a todos, dejó prescindibles a 309 comisarios y otros tantos oficiales intermedios y suboficiales, muchos de ellos por motivos arbitrarios y algunos por faltas leves. Sin embargo, el filo de su historial no alcanzó la precisión quirúrgica que requería la operación.

El ministro y sus colaboradores no tardarían en estrellarse contra la resistencia que su política causaba en los municipios. En solo un día se recibieron 74 llamadas de jueces e intendentes que pedían que no se expulsara a determinados policías. Uno de ellos tenía dieciocho causas por "homicidio en riña", siete por "apremios ilegales" y dos por "tráfico de drogas". También comprobaron que los punteros del Partido Justicialista financiaban sus actividades políticas mediante la venta de cocaína, en complicidad con la policía.

"Me tuve que bancar la presión de los intendentes cuando les tocamos el sistema recaudatorio. Pero no nos torcieron la mano", señalaba Arslanián, en los inicios de su gestión.

Pero los enfrentamientos con los aparatos políticos del justicialismo de Morón y La Matanza empezaron a desgastar su gestión. Morón es el territorio de Horacio Remán, y La Matanza el de quien lo secundaba en la Comisión de Seguimiento de la Reestructuración de La Bonaerense, el ultraderechista Andrés Devillacqua.

En esos días, Carlos Ruckauf había comenzado a introducir su bastón en las ruedas de la reforma policial, transmitiéndole a Duhalde la siguiente advertencia: "Arslanián nos cuesta cada día más caro. Tiene prejuicios contra la clase política y se niega a recibir a los intendentes que se quejan de él. Relevo a los comisarios que tienen buena relación con ellos y designa a otros que no dialogan con el municipio".

En sintonía con ese clima, el gabinete ministerial sufrió una de sus primeras bajas: la del secretario de relaciones con la Comunidad, Juan José Álvarez, quien fundamentó su renuncia en "las ya inaceptables diferencias mantenidas con el ministro Arslanián".

Los desplazados aprovecharon la agitación de la superficie y se plantaron en torno a al movimiento de "Los sin Gorra". Hicieron su presentación en sociedad en junio de 1998, manifestándose frente al edificio de la ex jefatura, donde dejaron como testimonio de su protesta las gorras que habían usado en sus tiempos de servicio. Luego perfeccionaron su identificación usando en la solapa un pin con ese símbolo. Y, tal vez inspirados en los gremios decentes, hasta llegaron a levantar una carpa negra frente al Ministerio de Seguridad:

A menudo sus actos recibían adhesiones solidarias de personajes como el Chorizo Rodríguez o el senador Horacio Remán. Éste fue aún más lejos, y expuso en la propia Legislatura su apoyo a los policías prescindibles.

"A los ladrones los quiero meter presos y a los buenos policías, que son la mayoría, los quiero aplaudir", discursó en el recinto de la Cámara Alta, provocando una salva de aplausos por parte de un nutrido grupo de exonerados que poblaba la barra. Entre ellos estaban las cabezas visibles del movimiento, los comisarios Miguel Ángel Ravizzione, Pablo Lucero y Alberto De Fiore.

"Los sin Gorra" tenían una heterogénea composición; en sus filas convivían algunos reconocidos exponentes de la

Maldita Policía, pero también otros a los que no se los había investigado seriamente. Todos ellos, en consecuencia, decían que no había nada demostrado en su contra, que sus fejas eran impecables e, incluso, que la mayoría estaba en condiciones de reintegrarse al servicio. Aseguraban, sin embargo, no defender a la cúpula de "La Maldita", pero cuidadosamente evitaban criticarla. Su afirmación más reiterada era que su lucha pasaba solamente por la reivindicación laboral. Pero de su discurso se desprendían durísimas críticas a la reforma policial en la provincia de Buenos Aires. A menudo se les escapaban los ingredientes de una ideología como la que aplicó el general Ramón Camps durante la dictadura.

La del comisario Alberto De Fiere sería la primera baja de "Los sin Guerra", pero en el sentido más extremo de la palabra.

Su cuerpo apareció acribillado el 7 de junio de 2000 en una calle oscura de Remedios de Escalada. Horas antes había salido a efectuar un cobro con su amigo Miguel Bustamante, dueño de un comercio de membranas, a bordo del Alfa Romeo de éste. A las nueve de la noche, una balacera sacudió la tranquilidad de ese barrio de casas bajas, lindante entre la cancha de Lanús y el cementerio. El cadáver del comisario tenía las manos atadas a la espalda; presentaba siete impactos de bala. A su lado yacía el comerciante, con cinco tiros en la cabeza. En el lugar fue encontrada una decena de vainas calibre 9 mm. Ambos cuerpos conservaban intactos sus efectos personales.

Mientras velaban a De Fiere en una funeraria de Lomas de Zamora, su compañero de lucha, el comisario Miguel Ángel Ravizzione, fue tajante: "El crimen no fue por un intento de robo; por el contrario, lleva implícito un mensaje, y ese mensaje es para nosotros".

La investigación recayó nada menos que sobre el comisario Claudio Smith, quien se apuró en aclarar que "no se descartaba ninguna hipótesis". Aunque se mostró molesto cuando le preguntaron si podría tratarse de un ajuste de cuentas:

—Ofende a la repartición que se hable de un ajuste cuando se trata de un policía muerto.

No menos molesto se mostró al ser duramente increpado por la viuda del comisario, de quien era amigo y vecino, ya que ambos vivían en la misma cuadra de un elegante barrio residencial de Banfield.

—¡Dios una basura! Vos sabés quienes fueron los asesinos de Alberto, y los estás encubriendo —fueron las palabras de la señora De Fiere.

En el ámbito procesal, los desplazados lograron, merced a los fuertes lazos con algunos jueces y fiscales, que se desactivaran causas en las que estaban procesados. Asimismo mediante el antiquísimo recurso de plantar pruebas, inventaron acusaciones penales contra sus enemigos dentro de la fuerza, en particular contra quienes desde el Área Especial: habían puesto piedras en el camino de sus negocios.

Tal fue el caso del ex jefe de ese organismo, comisario Luis Vicat, cuyo domicilio fue allanado dos veces en noviembre de 1998, por orden del juez de garantías César Melaza. Entre los elementos secuestrados había una voluminosa caja de cartón que contenía supuestas transcripciones de escuchas a jueces de La Plata y del ex secretario de Seguridad, Alberto Piotti, como si Vicat los hubiese estado investigando por su propia cuenta. Ahora estaría prácticamente acreditado que esa caja fue plantada en la cochera de la casa del comisario poco antes del procedimiento. Sin embargo, la causa sigue abierta.

En el plano del sabotaje puro, las acciones directas articuladas desde las sombras sobrepasaban holgadamente el concepto de "advertencias".

Durante 1998, uno de sus hitos más resonantes fue, el 6 de mayo, un ataque a balazos contra los custodios de la hija del Gobernador, Analía Duhalde, en la que dos de ellos resultaron gravemente heridos.

Más trágico fue el homicidio de María Eugenia Azogaray. Tenía 22 años y era oficial de La Bonaerense. La asesinaron de seis balazos el 17 de marzo de ese año, cuando custodiaba en un vehículo la casa de Federico Domínguez, quien ya se había convertido en presidente del Tribunal de Casación.

Como una broma de mal gusto, para investigar el hecho fue designado el comisario Claudio Smith.

VI HOMBRES DE RECAMBIO

Aunque cuidando no llamar la atención, los antiguos "perengas" jamás dejaron de verse. A lo largo de la gestión de Arslanián mantuvieron encuentros regulares en varios puntos de la provincia. Los enlaces principales entre los diferentes grupos fueron los comisarios Alberto Lufre, había sido el segundo del Chorrizo en la Regional de Lanús y el comisario Ricardo Degastaldi, futuro superintendente de La Bonaerense y de frondoso pasado en el Partido de la Costa.

En algunos de esos encuentros solía hacer acto de presencia el emblemático jefe de la "Maldita Policía", el comisario Pedro K. Jodczyk. Se sabe que el Polaco estuvo reunido con Forgiene, el "Negro" Herrera, jefe de la D.D.F. La Plata, y Mario Rodríguez en el bar Prince, ubicado en el Cruce Varela y General Belgrano, de Florencio Varela.

Institucionalmente, quienes tenían a su cargo negociar sus posiciones ante el Poder Ejecutivo fueron Alberto Pierri y el senador Horacio Román. Este último, a quien los policías llaman "el Zorro" y los jueces, "el Monje Negro", además de tener un férreo control de las estructuras y bandas policiales asentadas en Morén, maneja a su antojo el Departamento Judicial de la zona. Su influencia se extiende a los Departamentos Judiciales de La Plata y Mercedes.

Tampoco Luis Genoud era ajeno a la representación de los cuadros duros de La Bonaerense ante el poder político. Se trata de un ex policía que, como diputado, llegó a presidir la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. Luego fue el antecesor de Juan Pablo Cafiero en el Ministerio de Seguridad. En la época de Arslanián, mantenía estrechas relaciones con el comisario Carlos Segura, involucrado en el caso de la "Aduana Paralela", y con Jorge Prepatc, uno de los hombres de confianza del Chorrizo.

Das semanas antes de la crisis que desembocó con la renuncia de León Arslanián, hubo un encuentro en una confitería frente a la terminal de colectivos de La Plata.

En ella estuvieron presentes el ex subjefe de la fuerza, comisario Domingo "Pinoche" Lugos, Rodríguez y Oscar "Cocodrilo" Rossi, entre otros. En esa ocasión se barajaron nombres para reemplazar al ministro que estaba por caer y se debatió cómo "repartirse" las comisarias. Esos cónclaves luego se repitieron en una "cueva" frecuentada también por agentes de la S.P.D.F., en la que Mario Naldi oficiaba de anfitrión. Se trataba de la oficina donde actualmente funciona la consultora Global Solutions, cuyo volumen de asuntos fue tomando dimensión en los últimos tiempos.

Los conjurados, a través de Pierri, ya habían barajado el nombre de Héctor Lufrano para reemplazar al ex camarista en el Ministerio de Seguridad. Se trataba de un "saca-presos" preñado por Román, que mantenía excelentes relaciones con casi todas las líneas policiales.

Duhalde se resistía a darle el visto bueno.

Pero en los primeros días de agosto, un viejo impulso parecía haberse apoderado nuevamente de él: cambiar de caballo por cuarta vez, con otro giro de 180 grados.

Capítulo 7
SEPTIEMBRE NEGRO

*"Por dos meses, muchachos,
hay que parar la mano con los bancos."
El ministro OSVALDO LORENZO
a los altos mandos policiales.*

DECISIÓN PATRIÓTICA

Durante casi un minuto, el hombre permaneció callado y sonriente con el celular pegado a la oreja, hasta que finalmente dijo:

—Gracias, Marito.

El cariñoso agradecimiento iba dirigido al comisario retirado Mario "Cherizo" Rodríguez, ex jefe de la poderosa Brigada de Investigaciones de La Matanza, socio en algunos negocios de Alberto Pierri, autor intelectual de las palizas sufridas por el periodista Hernán López Echagüe y el primer alto dignatario de la "Maldita Policía" en dar un paso al costado al caer la cúpula encabezada por Pedro Kiedrzyk.

Cuien se trataba con tanto afecto acababa de asumir como nuevo ministro de Justicia y Seguridad bonaerense.

La escena tenía lugar en el Salón Dorado de la Gobernación, poco antes del mediodía del viernes 6 de agosto de 1999, luego de que el ex juez federal Osvaldo Lorenzo dejara atrás ocho años de carrera judicial para reemplazar al saliente León Arslanián y cubrir esa cartera en los ochenta días que se faltaban a Eduardo Duhalde para completar su mandato.

El reemplazo llamó poderosamente la atención. Muchos se preguntaron por qué este hombre de barba desprolija, mirada vidriosa y kilos de más había resignado a la magistratura para ejercer una gestión tan esfímera. El propio Lorenzo se encargó de aclararlo.

—Fue una decisión patriótica —afirmó, ya rodeado por un collar de micrófonos.

Era otro peldaño de una historia iniciada a fines de 1991, cuando cedió su arrugado traje de "sacapresos" suburbano, para hacerse cargo del Juzgado en lo Criminal N° 4 de Morón. Su pliego había sido impulsado por el senador provincial Horacio Remán. A comienzos de 1996, Lorenzo tuvo un significativo ascenso en su carrera en la Justicia, al ser nombrado juez federal de la ciudad de Campana. Nuevamente, el senador Remán había apoyado su designación por la Legislatura.

Al año siguiente la figura de Lorenzo cobró notoriedad al ordenar el llamado operativo "Madera Verde", por el que se decomisaron casi dos toneladas de marihuana. El camión que los traía desde Paraguay fue abordado por hombres de la Policía Federal. El cargamento —interceptado en las afueras de la localidad bonaerense de Lima— iba destinado a un empresario de La Matanza que, según se dijo, también construía escuelas para el gobierno de la provincia.

Su volumen fue un verdadero récord.

El juez decidió celebrarlo invitando a autoridades municipales y alumnos de las escuelas de la zona para presenciar la incineración. La escena fue de película. Luego de que la primera oleada de humo emergiera de los hornos del cementerio de Campana, una súbita sensación de laxitud envolvió a los presentes; con la segunda oleada, los pequeños educandos comenzaron a reírse sin razón alguna, mientras el magistrado, con la mirada más vidriosa que nunca, tuvo que ser llevado a un costado del palco oficial.

Después de sus quince minutos de gloria, Lorenzo vio declinar su estrella. Los jueces de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, Alberto Mansur, Horacio Track y Daniel Rudi, lo denunciaron ante el Consejo de la Magistratura por su desempeño en una causa por "contrabando y evasión fiscal" contra directivos de la petrolera Rhosa. Al parecer, las irregularidades de esa causa lo habían convertido en un calco del caso Cépola, pero sin famosos en el medio.

Los camaristas acusaban al magistrado de haber tomado decisiones en contra de la presunción de inocencia de los detenidos y la garantía de defensa en juicio. Además ponían en duda el despliegue dispuesto por Lorenzo "al afectar a personal policial en innumerables seguimientos, filmaciones y tomas fotográficas, que implicaron el traslado de varias comisiones por diferentes localidades bonaerenses". Se asemejaban de que esa "extenuante labor desarrollada durante dos años no sirviera para corroborar ni uno solo de los delitos investigados". En los pasillos tribunales se insinuaba que Lorenzo habría ordenado detenciones arbitrarias para luego modificar la situación de los procesados a cambio de algún beneficio.

El juicio político contra él prosperaba a pasos agigantados. Aceptar el ofrecimiento del Gobernador fue su manera de evitarlo.

Al estrenar su condición de funcionario del Ejecutivo provincial, Lorenzo exponía sus ideas sobre la seguridad ante los meriseros de los canales. A pocos metros, bajo un escudo que simboliza la Balanza de la Justicia, Duhalde departía con Carlos Ryckauf, candidato del PJ para sucederle como gobernador.

Precisamente Ryckauf había provocado la crisis en el centro del poder duhaldistista que llevó a la salida de Arslanián —el ministro más prestigioso del gabinete provincial—, al criticar el rumbo de la política de seguridad, en contraposición a su propio ideario de "meter baza a los delincuentes". No tardaría en saberse que el elegido para suplantarlo era un hombre estrechamente vinculado con Alberto Picetti, quien fuera el socio político del comisario Pedro K. Sedczyk.

Entre las personalidades que aplaudieron la asunción del ministro estaba un hombre bajito y regordete que permanecía casi oculto en un rincón. Se trataba del comisario retirado Mario Naldi, ahora devenido en agente de la SIFD, empresario y consultor.

—La Maldita vuelve con todo —le susurró al oído un oficial inspector, mientras chocaba su copa con la suya. Junto a ellos, el comisario Oscar Rossi esbozaba una sonrisa.

El brindis tenía sus motivos.

Concluía un intento de reforma policial que había amenazado con destruir el grueso de "los negocios" que los uniformados hicieron parte de su actividad cotidiana. También llegaba a su fin una interna feroz, que incluyó no menos de doce ajustes de cuentas entre policías, un atentado contra la custodia del Gobernador, el robo de armas en su residencia de Pinamar y varias profanaciones de cementerios judíos, entre otras manifestaciones de descontento.

Los oficiales superiores presentes en la ceremonia de asunción, entre quienes estaban los jefes de las dieciocho departamentales, se restregaban las manos, calculando las nuevas fuentes de ingresos que posibilitaría la actividad policial.

Los cambios en la estructura de La Bonaerense se hicieron notar en el atardecer de ese mismo viernes.

El primer relevo se produjo en la Dirección de Coordinación de las Policías Departamentales. Su titular, el comisario mayor Aldo Burgos, uno de los pocos hombres de confianza de Arslanián, fue trasladado al Centro de Instrucción, en una suerte de exilio dorado.

Al comisario Eduardo Martínez, que tenía a su cargo la Dirección de Narcocriminalidad e Investigaciones Complejas, también le destinaron a jugar en otra posición. La suerte del "Detective Millenario", como se decían por su parecido con el personaje televisivo, estuvo echada ya antes de la caída de Arslanián: estando al frente del organismo encargado de combatir al narcotráfico, durante su gestión no hubo ni un solo procedimiento antidroga. También influyó que pocos días antes —y por motivos que aún se desconocen— había caído en desgracia su padrino, el jefe de la DEA en la Argentina, Abel Reynoso.

Su relevo se asemejó a un enroque. Por pedido especial del Gordó Naldi, Martínez no fue pasado a retiro sino trasladado a la Dirección de Planeamiento e Inteligencia, la cual, lejos de cumplir tales funciones, no era más que un coto inoperante, casi un sello. Su reemplazante en Narcocriminalidad fue el comisario Jorge Miniscarco, el verdadero hombre fuerte de La Bonaerense en ese momento. Miniscarco hasta entonces se desempeñaba en la estratégica Dirección General de Investigaciones.

El Vampire posiblemente sea el único jefe de la era Arslanián que no ganó ni perdió con la caída de éste. Eso se debía a su estrecha relación con el comisario Víctor Fogelmann, uno de los protegidos del universo duhaldistista, tal vez porque tenía en su poder algunos cruces de Excalibur que hacían temblar a más de uno:

El retroceso más pronunciado de la reforma policial tuvo como epicentro a la Dirección General de Investigaciones. Era el verdadero centro de poder de La Bonaerense, ya que en el nuevo esquema tenía una mayor relevancia que la mismísima Dirección de Seguridad.

En un primer momento se barajó el nombre del comisario Carlos Allende para reemplazar a Miniscarco. Era un oficial obeso y de modales campechanos que participó en la investigación del caso Cabezas. Hizo gran parte de su carrera en

Mar del Plata, en cuyos centros nocturnos se lo conocía por su afición al whisky J.B. Su nombramiento fue descartado de inmediato, ya que el flamante ministro tenía otro candidato para esa dependencia.

Se trataba de Alberto Degastaldi, un verdadero exponente de la "policía brava".

Ascendido recientemente a comisario mayor, ya había ocupado algunos cargos claves durante la gestión de K.Jodczyk.

Era amigo personal del Polaco y trabajó en Mar del Plata junto al comisario Enrique Fergione, un histórico compinche de Naldi y Rossi. Su último destino había sido la Jefatura Departamental de La Matanza, donde algunos años antes se había desempeñado como simple oficial principal. De esa época se quedaron dos amistades entrañables: el Chorizo Rodríguez y Alberto Pierri.

En la Dirección de Seguridad fue nombrado otro ex jefe departamental de La Matanza: el comisario Felipe Parravichini. Se trataba de un veterano policía con fama de "operativo", que también mantenía estrechos vínculos con Rodríguez y Pierri. Sin embargo, fue Naldi quien sugirió su nombramiento.

No era un secreto que el ministro Lorenzo mantenía un afectuoso trato con los antiguos jefes policiales que integra con la cúpula desplazada a fines de 1996. Durante su paso por el Juzgado de Morén, por ejemplo, daba carta blanca a los hombres del Chorizo para manejar a su antojo algunos asuntos. Su más destacado acto de lealtad hacia ellos fue abrir una causa, basándose en los dichos de un "buche", sobre el asalto a un camión blindado. Lo curioso es que el expediente se inició dos meses antes de producirse el hecho. Eso posibilitó que la patota policial preparara una emboscada para lucirse y sacar rédito.

En buena sintonía con la corporación policial, el nuevo ministro no dudó en nombrar como su segundo al abogado penalista Héctor Lufrano, designación que los uniformados aplaudieron estruendosamente.

Otro dato relevante sobre Lorenzo era su relación con el ahora silencioso Alberto Piotti. Era mucho más que una añeja amistad. Según el enterno de Arslanián, el "Tano" Piotti fue el verdadero artífice de la maniobra que terminó con su renuncia. Afirmaban, asimismo, que el ex juez de San Isidro manejaba desde las sombras los intereses del duhaldismo en el área de la Justicia Federal.

En la conspiración contra la reforma tampoco fue ajeno el intendente de Escobar, Luis Patti. Con engaños, sus hombres habían instigado a una bandita de delincuentes de poca monta para que coparan la comisaría local. Así posibilitaron el retorno del ex subcomisario al campo de la "acción directa", al encabezar personalmente el operativo de recuperación. Sus declaraciones posteriores, instando a armar "piquetes civiles armados", fueron parte de la misma puesta en escena. Todo tendía a forzar una confrontación mediática con Arslanián.

El mismo choque que luego protagonizó el candidato Ruckauf.

II

PIEDRA LIBRE

Eran las ocho de la mañana del 6 de septiembre cuando el gobernador Duhalde lo citó en su despacho. Su voz en el teléfono sonaba con un dejo de irritación. Osvaldo Lorenzo, a un mes de haber asumido el Ministerio, asintió con un monosílabo. De inmediato canceló una entrevista periodística que tenía acordada y corrió a presentarse ante su jefe.

Ese día el Gobernador no parecía de muy buen humor. Recibió secamente al Ministro:

—¿Qué significa esto? —se espetó, señalando con el dedo la portada del diario La Nación.

El nombre de Héctor Lufrano aparecía en los titulares con tipeografía digna de una catástrofe. El matutino revelaba que el secretario de Seguridad que secundaba a Lorenzo había sido el abogado defensor nada menos que de Luis "El Gorde" Valer, jefe de la célebre superbanda que en los últimos años había protagonizado una escalada de robos en el conurbano. Lufrano había renunciado a su defensa del pistolero dos días antes de asumir como funcionario.

Lorenzo, sin atreverse a mirar los ojos del Gobernador, farfulló:

—Yo no sabía nada de esto.

Duhalde dejó el diario sobre su escritorio y, fulminando con la mirada al Ministro, ordenó:

—A Lufranc no lo quiero ver más por acá. ¿Entendido? Y dio por concluida la reunión.

Curiosamente, en la presentación oficial del ahora ex Secretario, Lorenzo lo había "vendido" a la prensa como una muestra del carácter pluralista que tendría su gestión. En esa ocasión aseguré que el doctor Lufranc "no es un funcionario duhaldistas; por el contrario, proviene de las filas de la UCR". Sin embargo, para sus presuntos correligionarios, se trataba de un completo desconocido; nunca tuvo militancia orgánica y ni siquiera estaba afiliado. En realidad, este hombre sin pasado político, que a los 45 años debutaba en la función pública, resultaba más popular en otros círculos.

"Lo reconocí de inmediato al verlo jurar por televisión. Es el mismo tipo que en 1988 logró excarcelarnos por izquierda en una causa que teníamos con Pictti en San Isidro. Fue un tema por tenencia de armas de guerra; éramos seis los encadenados y el arreglo fue de cien mil verdes; y eso que nos hicieron precio", recordé prelijamente uno de sus antiguos clientes. El excarcelado había integrado la superbanda y se mostraba gratamente sorprendido de contar entre sus relaciones a un integrante del Poder Ejecutivo provincial.

De las virtudes de Lufranc como penalista, otros recordaban su excelente llegada a la policía de San Martín. Allí era donde él solía recolectar su clientela.

En su estudio situado en una calle céntrica de Caseros recibía tanto a piratas del asfalto como a uniformados. Entre estos últimos se destacaba el ex jefe de la Brigada de San Martín, comisario Jorge Guzmán, apodado "el Sucio", que fue apartado de sus funciones al comprobarse su vinculación con una red de casinos clandestinos. Lufranc también patrocinaba al ex jefe de la Regional, Ramón Campos, quien estaba acusado de robarse las partidas presupuestarias para la comida de los presos, en complicidad con el ex comisario José Ojeda, cuñado de Juan José Ribelli.

A la hora de que Duhalde le bajara el pulgar, el vecero del Ministerio, Daniel Arcón, oficializó el asunto en una conferencia de prensa. Tempranamente se había producido la primera crisis en el gabinete de Lorenzo, pero Arcón lo minimizó permitiéndose un chascarrillo: "Lo que pasó fue el valor agregado del Verde Valor".

Pocos apreciaron su ingenio.

En ese momento, probablemente el Gobernador no imaginase que el nuevo pacto con la "Maldita Policía" había comenzado a naufragar. A cambio de recuperar cuotas de poder, ubicando en puestos claves a sus hombres de confianza, los antiguos comisarios de La Bonaerense le habían garantizado al candidato para suceder a Duhalde una notable disminución de la actividad criminal.

El acuerdo consistía en frenar, durante el período preelectoral, la delincuencia zafada y suspender los hechos ruidosos. Las grandes bandas, en su mayoría integradas por delincuentes y policías, dejaron momentáneamente de operar. Así pudo frenarse la escalada de asaltos a bancos, cuya cifra en el mes julio había superado a la de todo el año anterior.

El pacto parecía ir viento en popa.

El propio Lorenzo no tardó en usarse públicamente, al asegurar: "Ahora la Policía enfrenta con firmeza a las bandas de delincuentes. En las últimas tres semanas no hubo asaltos a bancos".

No faltaba a la verdad, aunque sí omitía mencionar el contenido de una reunión mantenida el 15 de agosto con los altos mandos policiales:

—Per dos meses, muchachos, hay que parar la mano con los bancos.

Pero la caída de Lufranc erizó la sensibilidad de los uniformados. Al rato de conocerse su renuncia, toda la telefonía de los antiguos comisarios comenzó a sonar. En pocas horas, jefes y ex jefes policiales protagonizaron una intensa actividad de reuniones, no precisamente sociales.

El primer cónclave tuvo lugar en una confitería de San Martín. Participaron no más de siete altos oficiales retirados. Entre ellos, Enrique Forgione, jefe de la Brigada de Vicente López cuando desde allí se preparaba un testigo falso para encubrir la causa AMJA.

Poco después, en una apartada oficina de la comisaría de Morón se reunía el Chorizo Rodríguez con el comisario

Oscar Vigilance. También estaba el comisario Carlos "el Negro" Herrera, jefe de la Departamental San Martín, hombre del Chorrizo y veterano de la masacre de Andreani.

Simultáneamente, el bar Mediterráneo, ubicado en Moreno y Alsina, de Quilmes, cerraba sus puertas al público. Sobre el cordón de la vereda estaban estacionados algunos vehículos con vidrios polarizados y antenas imponentes. En el salón había por lo menos siete oficiales que querían estar solos; entre ellos, un desfin de Ribelli, el comisario Roberto "Piti" Catinari.

La febril seguidilla de encuentros tenía un doble propósito: definir un plan de acción dentro del marco legal y hacerse sentir por otros medios. Todo anunciaba una nueva ofensiva sobre Duhalde y la desestabilización del ministro Lorenzo, a quien ahora consideraban un traidor.

Se habían reiniciado las hostilidades.

A los pocos días, un grupo comando irrumpió en las cajas de atención al público de la sucursal Quilmes de la Banca Nazionale del Lavoro, llevándose un botín de 350.000 pesos. Días después cayeron otras sucursales bancarias en Pacheco, Garín y Villa Caraza. Estos dos últimos, con tema de rehenes.

El 16 de septiembre le llegaría el turno a la sucursal del Banco Nación en Villa Ramallo.

III

A QUEMARROPA

El hombre que se hacía llamar simplemente Pablo caminaba sin soltar el celular. Se trataba del subcomisario Carlos Bressi. Pertenecía al Grupo Halcón de La Bonaerense y había sido presentado en sociedad como un experto negociador en casos de asaltos con rehenes. Eran las cuatro y diez de la madrugada del viernes y se había vuelto a comunicar con Cristian, el alias que, a su vez, usaba Martín Salsaña, uno de los asaltantes que aún mantenían tres rehenes en la sucursal del Banco Nación.

Pablo lucía exultante. Daba la sensación de que venía ganando la partida. Ya había logrado la liberación de tres de los seis rehenes originales, sin dar nada importante a cambio. Luego de un agotador tira y afloje que ya llevaba más de veinte horas tuvo que ceder sólo unas llaves del tesoro. Pero a los ladrones no les servía de mucho, ya que les faltaba el número clave para activar la puerta de la bóveda. Esa era la carta que Pablo guardaba en la manga para prolongar la negociación todo lo posible. Yo estaba logrando.

Pero, imprevistamente, Cristian anunció:

—Tengo que llevar al gerente al baño. Esperame...

El subcomisario aguardó sin cortar la comunicación. La escena transcurría en un aula de la Escuela Benificio Velásquez, a pocos metros del banco. Allí se había constituido el Comité de Crisis, encabezado por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo y altos oficiales de La Bonaerense y de la Federal. Todos ellos, callados y expectantes, tenían las miradas clavadas en el negociador.

Con el correr de los segundos, el rostro de Pablo denunciaba su creciente inquietud. Razones no le faltaban: Cristian no regresaba al teléfono y por el auricular se colaban ruidos de puertas que se abrían y cerraban, pasos, un motor que se ponía en marcha.

Había comenzado el acto final.

Lo que ya era un presentimiento, una posibilidad que todos —a partir del monitoreo de las conversaciones telefónicas— deberían haber previsto, se convertía en una desagradable evidencia.

—¡Imbéciles! ¡Entréguense, que son boleta! —aulló el negociador, aun sabiendo que nadie lo escuchaba desde el otro lado de la línea. Pablo había perdido los estribos, el control de la situación y también su protagonismo, todo en unos pocos segundos.

En el aula todas las miradas giraron hacia la corpulenta silueta del segundo jefe del Grupo Halcón, subcomisario Gerardo Ascacibar. El hombre, con la mandíbula temblándole por la tensión, se volteó hacia el juez y bramó:

—¡Se están por rajar! ¡¿Qué mierda hacemos?!

La respuesta del magistrado fue el silencio. El subcomisario escupió unas palabras en clave sobre su handy. Era la orden para entrar en acción.

Enseguida se escucharon los primeros disparos.

El juez se tiró boca abajo al piso. A su lado, lo imitaron los comisarios mayores Santiago Allendes, Carlos Miniscarco y Eduardo Martínez.

No muy lejos de allí, en la calle Rivadavia, de Villa Ramallo, el periodista Ariel Ribalk relataba el desarrollo de los acontecimientos desde el pequeño estudio de F.M. Acero. Curiosamente, omitió mencionar la presencia en la radio de tres chicas por las que buena parte de los medios que fueron a cubrir el asalto habrían derramado ríos de tinta: Daniela, Cecilia y Betina Chaves, las hijas del gerente de la sucursal, Carlos Chaves, y de Flora, su mujer. Ambos permanecían en el banco, junto a los demás rehenes.

Las chicas habían llorado desconsoladamente, pero se sintieron acariciadas por una dosis de esperanza cuando los

rehenes Diego Sena —operador de un canal de cable— y Fernando Vilchez —empleado de OCA— fueron liberados a las 21.30 del jueves. La expectativa se volvió a encender en esas pocas después de la medianoche, al confirmarse otra liberación: la de Ricardo Pascual, uno de los jefes de área de la sucursal asaltada.

A las cuatro y diez de la mañana, se oyó la aceleración del auto en el que los delincuentes intentaron la fuga. Fue seguida por el estruendo de los disparos. Betina supo con certeza qué estaba pasando. En ese instante la radio transmitía avisos y en el estudio todos guardaban silencio. Los tiros sonaron muy cerca, y ella, tapándose los oídos con las manos, en un vano intento de preservarse del horror, rompió en un llanto tan profundo como desgarrador:

—Ésos son los tiros que están matando a papá.

Cerca de allí, Lisiana, la mujer del contador Carlos Santillán, iba y venía de una esquina a otra. La rodeaban mujeres y periodistas. Tenía un rosario entre los dedos y el rostro enrojecido por las horas de tensión que había acumulado desde que supo que su esposo estaba entre los rehenes.

Los primeros disparos la sorprendieron sobre la avenida San Martín, a unos sesenta metros de la sucursal. Lisiana estaba junto a unos vecinos que trataban de infundirle ánimo. Cuando la tormenta de pólvora comenzó a arreciar, intentó abalanzarse sobre el centro del conflicto, al grito de: "¡No tiren! ¡No tiren!". Un fornido efectivo del Grupo Especial de Operaciones de La Bonaerense se abalanzó sobre ella y la arrastró hasta la entrada de una casa. En un contradictorio intento por socorgerla, prorrumpió en asaridos:

—¡Callate la boca! ¡Dejá de gritar!

Lisiana siguió clamando por la vida de su marido, hasta que cesó el infierno de balas. Un segundo después alguien efectuó el último disparo, con la inequívoca resonancia de un tiro de gracia. Aún no podía saber que el proyectil, salido de un FAL, se había incrustado precisamente entre las cejas de su marido.

Los integrantes del Comité de Crisis abandonaron la escuela convertida en búnker.

El Vampire Miniscarco se escabulló sin ser visto, al igual que Allendes. La suerte le fue más esquiva al comisario Martínez, quien fue sorprendido por las cámaras de televisión mientras trataba de abrirse paso entre la multitud. Poco quedaba de su estampa de galán maduro; su elegante traje azul estaba arrugado y el cuello de su camisa, húmedo por el sudor que le bajaba de la cara. Parecía tembloroso y desencajado. Al ser abordado por un micrófono, dijo con voz entrecortada:

—¡Por favor! No puedo hablar. Entiendan que esto no es grato para nadie.

La Escuela Benifacio Velázquez había quedado desierta. En el pizarrón del aula donde el juez y los oficiales diagramaron la estrategia de lo que terminó en masacre, se apreciaba el testimonio brutal de un esquema operativo dibujado con tiza. El croquis señalaba "seis tingos y seis romeos". En el hermético lenguaje de las tropas policiales de élite, "tingos" significa delincuentes y "romeos", rehenes. Era la prueba palpable de que ni siquiera la cifra estimada por los investigadores era exacta. El esquema también delineaba anticipadamente el posible trayecto de un auto que saliese de la cochera emplazada sobre la calle Sarmiento. Detallaba las posiciones de los policías con pequeñas estrellas e incluía la sigla "PEN³". El término significaba "penetración" o, dicho en un lenguaje más llano, "tirar a matar". Los agentes sabían que el auto iba a salir, por lo que decidieron dispararle. También estaría acreditado que la orden era precisamente la de tirar a matar, ya que, de los treinta y cinco disparos que impactaron en el Volkswagen Polo, ninguno hizo blanco en los neumáticos. Los peritos también hallaron huellas de cincuenta y seis balazos en frentes de casas, árboles, veredas y calles, a los que hay que sumar los que atravesaron a los ocupantes del vehículo. Es decir que en escasos veinte segundos, las armas policiales escupieron unos cien proyectiles.

El pistolero Martín Saldaña fue el único ocupante del Polo que salió ileso de la carga de artillería disparada por los policías bonaerenses. El cuerpo de su cómplice Javier Hernández exhibía numerosos impactos, entre ellos, un posible tiro de gracia que le dio de lleno en el paladar. El tercer asaltante, Carlos Martínez, presentaba una herida de FAL que le destrozó los huesos del brazo izquierdo. Flora Chaves, la mujer del gerente, fue herida con dos disparos superficiales. Su marido y el contador Santillán murieron en el acto.

Las primeras versiones sobre la muerte de Saldaña, ocurrida esa misma tarde cuando ya estaba alejado en la Comisaría

2a, parecían una ficción urdida por un guionista mediocre. Cerca de las 16.30, el cuerpo de Saldaña apareció sin vida en su celda. Minutos después, un cabo de la seccional apostado en la puerta, departía con un grupo de periodistas:

—Es posta que el muchacho se suicidó. Ellos saben cómo suicidarse...

—¿Cómo, practican? —quise saber un cronista.

Por única respuesta, el suboficial destiló una mirada fulminante.

Según la versión oficial, Saldaña se habría suicidado usando una tira de tela arrancada del costado de uno de los tres colchones que había en su celda. Saldaña no colgaba, sino que estaba semiapoyado, casi de cuclillas, entre el camastro y el suelo. La hipótesis suicida señalaba que, pese a lo reducida de esa celda, el detenido se habría anudado el extremo de la tira alrededor del cuello, antes de dar un salto y arrojarse, digamos en el aire, para acabar en una posición tan particular.

La versión no cerraba.

Los expertos no tardaron en señalar que, de haber ocurrido así, el cuerpo no habría quedado en esa postura: en el medio minuto que una persona tarda en morir por ahorcamiento, primero patalea y luego sufre convulsiones, mientras se le descontrolan los esfínteres. En el caso de Saldaña, nada de eso sucedió.

El Gobernador no tardó en relevar al comisario de la seccional, Antonio Gómez, y también a su oficial principal Alejandra Bucheta, a cargo de la comisaría cuando se descubrió el cadáver.

IV LA CONVERSACIÓN

En la noche del 16 de septiembre, horas antes del sangriento desenlace, a ochenta kilómetros de Rgnasso, sobre el bulevar Oroño de la ciudad de Rosario, sonó el teléfono del abogado de Javier Hernández, quien hasta entonces sólo era conocido como "Miguel".

Fue la última esperanza de que todo saliera en paz.

Carlos Varela, muy conocido en Rosario por ser el abogado de la barra brava de Central, atendió. Una vez se dijo, secamente:

—El Pata está metido en un quilombo.

Eran las nueve; el abogado aún no estaba enterado de la situación en Rgnasso. Encendió el televisor y descubrió una voz familiar. Varela había conocido a Hernández en 1995, bajo el nombre de Sergio Benedetti, alias "el Pata". Nunca había visto su documento, pero en la causa su cliente aparecía con esa identidad. Se le imputaba el robo de la sucursal Arroyito del Banco de la Provincia de Santa Fe. Benedetti o Hernández pasó tres años preso, y el juez debió ex-carcelarlo por el tiempo de detención transcurrido.

Su antiguo cliente ahora conversaba telefónicamente con el periodista Chiche Gelblung. Varela decidió trasladarse de inmediato a Villa Rgnasso. A la medianoche, el abogado se presentó en la escuela ante el juez Villafuerte Ruzo, se explicó quién era y pidió autorización para hablar con "Miguel".

El magistrado aceptó.

A eso de la una y media de la madrugada, Varela telefonó al Pata desde la escuela. Junto a él estaba el juez. La conversación, obviamente, fue grabada.

Atendió la mujer del gerente.

—¿Quién habla?

—Pasame con Miguel.

Transcurrieron dos minutos hasta que el delincuente tomó el teléfono.

—¡Hola!, ¿cómo te va, Miguel?

—¿Quién habla?

—¿No sabés quién habla?

—¿Qué hacés! ¿Cómo te va! ¿Viste el quilombo que hice? Estoy hasta las pelotas...

—¿Y, sí... Vamos a tratar de arreglarlo.

La primera llamada duró casi media hora. Luego hubo dos más.

—Ya perdiste, se terminó, rendite —fue la recomendación de Varela.

—Le di mi palabra a mi compañero que se iba a acompañar hasta el final.

De allí en más, el abogado habló con los dos alternativamente. Saldaña era más intransigente. Decía: "Yo a la cárcel no vuelvo". A medida que el desenlace se acercaba, el diálogo entre Miguel y Varela se tornó dramático.

—Ese Pablo, el negociador, es un hijo de puta, se voy a hacer mierda. Ojalá lo tuviera acá para reventarlo porque nos traicionó.

—Pibe, preocupate por otra cosa. Nosotros estamos en otro tema...

—¿Cuántos policías hay?

—Son un montón. No van a poder salir... Entregate. Hay gente inocente, que no son canas.

—Sí, ya sé que no son policías...

Entonces llegó el momento revelador de la última conversación. Habló Miguel:

— Nosotros de acá nos vamos.

— Imposible, no te van a dejar ir.

— Nos vamos en el auto de los rehenes.

— Te van a matar, Miguel.

— Pero tenemos los rehenes. No van a tirar.

— No te van a dejar ir. Pensá en lo que vas a hacer. Pensá que en el proceso siempre se puede inventar algo. De la cárcel se sale...

— Los cobanis no van a tirar.

— Te digo que no se van a poder escapar... ¿Qué harías en lugar de ellos? ¿Tirarías o no?

El pistolero lo pensó por unos segundos. Finalmente contestó:

— No. Yo no tiraría.

La conversación seguía siendo grabada. El juez y la policía ya sabían que los delincuentes iban a salir, en un auto y con los rehenes.

V BACKSTAGE

El primer movimiento del ajedrez fatal que culminó en la masacre de Remallo fue dado no muy lejos de allí, en la ciudad santafesina de Villa Constitución, a 19 kilómetros de San Nicolás.

Faltaban pocos minutos para las diez de la noche del 14 de septiembre cuando un flamante Renault 19 blanco estacionó junto a la entrada del barrio Blanco de Acindar. Se trataba de un remis de la agencia 414 y, esa era su parada habitual. Su conductor se arrellanó ante el volante y encendió un cigarrillo, imaginando que pasaría un largo rato hasta que subiera algún pasajero.

Pero aún no había exhalado el humo de la segunda pitada cuando por el espejo retrovisor vio dos siluetas que caminaban directamente hacia él. Los tipos, que habían salido de un sectorio de Telecom, se acomodaron en el asiento trasero con cierta displicencia; no parecían tener apuro y se mostraron amables. Uno de ellos se puso un cigarrillo en la boca y le pidió fuego al chofer.

El otro, indicó:

—Levanos al barrio Luzuriaga, macho.

Jamás llegaron allí. Cuando el vehículo atravesaba el acceso Theobald, a cinco kilómetros de donde habían partido, el conductor sintió sobre la nuca el frío caño de una pistola:

—Quedate tranquilo, que a vos no te va a pasar nada. Sólo queremos el auto para hacer un trabajo.

Lo obligaron a entrar a un camino de tierra, por el que avanzaron unos quinientos metros. Allí lo hicieron bajar y lo ataron con una cinta beige de embalaje. Le dejaron un billete de dos pesos para que volviera a casa.

Los que jamás regresaron a Villa Constitución fueron los asaltantes.

El vehículo fue conducido al barrio Las Mellizas, un caserío con techos de chapa ubicado en la entrada de San Nicolás, a 15 kilómetros de donde abandonaron al remisero. Allí también había estado guardado el Renault 18 rojo que, en la mañana del asalto, fue visto en las inmediaciones del Banco Nación de Remallo.

Javier Hernández estuvo alojado en un aguantadero de esa villa durante las horas previas al asalto, junto con Marcelo Saldaña, a quien todos conocían como "Tito". Posiblemente desde allí efectuó la última llamada telefónica a su mujer, Norma Ojeda, que cinco días antes había dado a luz un hijo.

También allí habrían planificado los últimos detalles del golpe.

Saldaña y Hernández se llevaron muchos secretos a la tumba; entre otros, cómo obtuvieron el soporte informativo para cometer el asalto. En otras palabras, quiénes fueron los entregadores y de qué modo consiguieron el plano de la bóveda, que fue hallado entre las ropas de Saldaña cuando éste ya era cadáver.

No se trataba de un dibujo garabateado a mano, sino la copia de un croquis que sólo pudo estar al alcance de un efectivo policial de Seguridad Bancaria o de un funcionario del Banco Central. Algunas versiones aseguran que, entre los elementos no secuestrados después de la masacre, habría una anetralladora Ingram de origen policial, la que no estaba denunciada por robo, y un handy, con el que los delincuentes mantuvieron negociaciones paralelas con los uniformados.

Ambos objetos jamás fueron hallados.

Otra versión señala que los asaltantes contaban con "información intoxicada": les habían pasado el dato de que en la bóveda estaban depositados unos 300.000 pesos destinados a la campaña del vicegobernador Rafael Remá. Era una verdad a medias: existía verdaderamente esa cifra, pero era para pagar a los jubilados el lunes siguiente.

La sospecha de que habría un entregador policial estuvo presente desde los primeros instantes del robo. En la tramitación posterior se investigó al subcomisario Jorge Fiallo, un íntimo del comisario Alberto Sobrado. En esos días, Fiallo se desempeñaba como secretario del titular de la Dirección de Seguridad, el comisario Felipe Parravicini, y un

subordinado suyo, el suboficial Peto, habría sido el encargado de "contratar" a la banda para el asalto del Banco Nación. Este hombre también habría estado relacionado con el comisario Ángel Mendizábal de San Nicolás, quien en el expediente está sospechado de ser el nexo entre entregadores y asaltantes. También se llegó a precisar que el cabo Aldo Cabral, del Comando de Patrullas de San Nicolás, habría entregado el handy a los asaltantes durante la toma de rehenes.

Saldaña y Hernández habrían abandonado el barrio Las Mellizas durante las primeras luces del jueves. Llevaban dos pistolas 9mm, una 11,25 y un revólver Bagual calibre 22; algunas versiones también sostienen que poseían una ametralladora Ingram.

Poco antes de las siete de la mañana, el Renault 19 tripulado por ellos llegó a una vivienda ubicada en el barrio Santa Clara, de San Nicolás. Allí vivía Carlos Martínez, un delincuente mucho menos experimentado que sus dos cómplices; solamente atesoraba un puñado de causas por delitos menores y nunca había estado en la cárcel.

Martínez tuvo que salir a hurtadillas por el fondo de su casa para que no se viera su madre. Seguramente a ella le habría resultado extraño verlo irse a una hora tan poco habitual en él. Y tal vez no le hubiera dejado ir a cometer el asalto.

En ese momento repasaron el plan. El mismo era ambicioso, quizás demasiado ambicioso para ellos. Porque no se trataba de un simple asalto a las cajas de atención al público. Por el contrario, querían cometer lo que se conoce como un "asalto inteligente"; o sea, reducir al empleado que abre la puerta de la sucursal, esperar la llegada del resto de los empleados —entre ellos, el tesorero, que tenía la llave y el código de la bóveda—, encerrarlos en algún lugar seguro para finalmente lanzarse al tesoro y saquearlo.

La misión de Martínez consistía en vigilar al personal bancario en ese transitorio cautiverio. Pero el asaltante hizo ingresar a la fuerza a quien él creía que era el tesorero. Se equivocó; se trataba de Diego Serra, el operador de un canal de cable que pasaba por allí. En ese instante el plan se derrumbó. Alguien observó lo sucedido desde la otra esquina y no dudó en llamar a la policía.

Este último también encierra una paradoja. En el momento del asalto —las 8.10 de la mañana— no había ningún policía vigilando la apertura del banco. En realidad el lugar se había convertido en una "zona liberada", ya que habitualmente había entre dos y tres uniformados custodiando la sucursal. Unos minutos después, los pistoleros fueron rodeados por más de 200 policías.

Con las primeras luces del viernes 19, el Gobernador enfrentó los micrófonos para fijar su posición ante la masacre. Sin pelos en la lengua, espetó: "Lo de Ragnallo fue una operación, una emboscada urdida por algunos jefes policiales. Lo hicieron para embarrar mi campaña. Para perjudicarme. Sabemos que estos individuos han hecho varias reuniones con el objeto de conspirar. Pero lamentablemente el acto de reunirse no está prohibido".

Esa misma noche, Duhalde supo que sus aspiraciones presidenciales se habían malogrado irremediablemente.

Horas después, el superministro Osvaldo Lorenzo se vio obligado a abandonar el cargo. Al dejar su despacho en La Plata, debió hacerlo por una puerta lateral, para evitar el asedio periodístico. El Ministerio de Justicia y Seguridad quedaba acéfalo. Las tareas propias del área fueron manejadas provisoriamente por ex diputado Luis Genaud, hasta que Carlos Seria —un nombre aún poco conocido en esos días— fue designado al frente de la cartera.

La masacre de Ragnallo fue festejada como un éxito por los antiguos jefes de La Bonaerense.

En la noche del domingo 19, los "perengas" se reunieron en un domicilio particular de la zona de Quilmes. Los anticipes de los noticieros informaban sobre una nueva profanación ocurrida en el cementerio de La Tablada. Ya estaba en marcha el plan para otro atentado contra la comunidad judía. Las instituciones que corrían riesgo de verse agredidas eran un colegio, un hospital o un asilo de ancianos de la comunidad. "Ésos blancos son un caramelo y hacen ruido", dijo uno de los comisarios reunidos. Horas después, una escuela hebrea fue atacada con bombas de alquitrán.

En la noche del viernes 24 hubo otro conciliábulo del ala dura de La Bonaerense. Ocurrió en la confitería Demetrio, ubicada en Mosconi y Belgrano, de Quilmes. El encuentro se hizo a puertas cerradas y nuevamente los vecinos se asombraron por la cantidad de autos lujosos estacionados en las cuadras adyacentes.

El cónclave fue presidido por el comisario Mario Naldi y se evaluaron nuevas operaciones. El objetivo superaba, en

*tiempo y alcances, la etapa electoral. Los "perengas" querían llegar con poder al próximo gobierno provincial.
Fuerza no les faltaba y herramientas de presión, tampoco.*

Capítulo 8
NOCHE Y NIEBLA

*"No vaya a tomar en serio, doctor, las
cosas que dije sobre la inseguridad.
Son pavadas. Era sólo para diferenciarme
de la Alianza."
El gobernador CARLOS RUCKAUF
al procurador Eduardo Matías de la Cruz*

EL HOMBRE QUE RÍE

La escena era surrealista: un preso descorchaba en su celda una botella de Dom Pérignon, rodeado de sus compañeros de encierro y también de algunos guardias. Sucedió durante la noche del domingo 24 de octubre de 1999 en el sector de la cárcel de Caseros que albergaba a ex integrantes de las fuerzas de seguridad. El animador de aquel brindis era el ex comisario Juan José Ribelli.

La celebración obedecía a un fallo en la causa por la masacre de Wilde, en la que estaban procesados once subordinados suyos. Tres días antes, el juez Emilio Villamayor había dictado el sobreseimiento definitivo para todos los acusados. El júbilo era por partida doble: Juancito —como le decía K Sedczyk— y los ex policías presos también festejaban el triunfo electoral de Carlos Ruckauf en la provincia y, más que eso, la derrota de Graciela Fernández Meijide.

El mandatario electo había ganado la contienda en un territorio convulsionado por la inseguridad, hilvanando un discurso centrado en la "mano dura" contra el delito. Fue la piedra angular de su estrategia de campaña. A medida que ésta avanzaba, su contenido fue adquiriendo la virulencia propia de una declaración de guerra, en la que, por momentos, resultaban difusos los límites de la legalidad.

Antes de asumir la gobernación, Ruckauf efectuó una visita de cortesía al procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo Matías de la Cruz. El encuentro tuvo lugar en el primer piso del palacio judicial de la calle 13, donde el jefe de los fiscales tiene su despacho. Allí flotaba una atmósfera cordial, pero se advertía una falta de correspondencia entre el ánimo exultante de Ruckauf y el aire cauteloso, casi reticente, del doctor De la Cruz.

El veterano jurista guardaba un cuidadoso silencio mientras oía las palabras del político, alternando pitadas de tabaco con sorbos de café. En cambio, su interlocutor se mostraba sumamente expansivo. Hasta se permitió una pequeña confesión:

—No vaya a tomar en serio, doctor, las cosas que dije sobre la inseguridad. Son pavadas. Era sólo para diferenciarme de de la Alianza...

—Ah, bueno. Ahora me quedo más tranquilo —replicó el procurador, sin sonreír.

Para quienes lo conocían desde sus inicios en la política, el Gobernador era un pragmático incurable, capaz de dar inesperados virajes en sus actitudes si así lo recomendaban las encuestas o cuando los cálculos de poder le eran adversos. Peronista ortodoxo y ultracatólico, se filtró en el universo del PJ cuando era un modesto abogado de las 62 Organizaciones.

Desde entonces recorrió un largo camino.

De la mano de Lorenzo Miguel, el 11 de agosto de 1975 se convirtió en ministro de Trabajo. En el gabinete de Isabel Perón tendría que cohabitar con dos especies en pugna: sindicalistas que respondían a la "Patria Metalúrgica" y verticalistas alineados con José López Rega. Contrariando a su mentor, Ruckauf se zambulló en los brazos de estos últimos.

Durante su gestión en el Ministerio, cuando los rumores gelpistas eran cada vez más sonoros, Ruckauf supo hacerles guiños a los militares, al pedir que "se eliminaran los elementos subversivos de las fábricas", según un informe de la empresa Mercedes Benz, en cuya planta posteriormente desaparecieron 14 operarios. Ese gesto lo remataría con su firma en el decreto que ordenó a las Fuerzas Armadas "el aniquilamiento de la subversión".

Ese y otros detalles curriculares hicieron que recién en 1987 pudiera volver a la política, al acceder a una banca en la Cámara Baja. En esa ocasión su padrino había sido el renovador Carlos Grosse.

Sus conocidos aseguran que su historia estuvo signada por desplantes y miserias, al punto de que sus adversarios no dudan en tildarlo de "traidor". No sólo plantó —suelen recordar— al "Loro" Miguel, sino que, luego, mirando distraí-

damente hacia un costado, dejó caer a Carlos Grosso. Entre los encensos que fue cosechando en el transcurso de los años se sumó el del presidente Carlos Menem, quien hasta le había prohibido asistir a las reuniones de gabinete.

En aquella luminosa mañana primaveral de 1999, con una buena parte de su ambiciosa apuesta ya ganada, Ruckauf sintió que el fuego, cuando está bien administrado, no siempre quema.

Y nuevamente, decidió jugar al límite.

El 27 de octubre oficializó el nombre del ex coronel carapintada Aldo Rico para comandar el Ministerio de Seguridad y Justicia bonaerense. El anuncio cayó como un balde de agua fría. Tras lanzar esa piedra, Ruckauf se fue a descansar a Miami; en la playa especuló con los efectos que tendría la designación.

Una oleada de asombro recorrió todo el arco político, incluido el setenta por ciento del electorado de San Miguel que había reelegido al militar como intendente. También alcanzó a las propias filas de La Bonaerense, en las que desde las épocas del general Ramón Camps existía cierta inquina hacia todo lo que fuese verde oliva. Las preferencias de los Patas Negras se inclinaban hacia el ex subcomisario Luis Abelardo Patti, cuyo nombre también había sonado con insistencia en los planes de Ruckauf. Pero el Gobernador formuló el siguiente razonamiento al cido de su compañero de fórmula, Felipe Solá:

—Del Nato se puede pensar cualquier cosa. Pero es un tipo implacable y no está entengado con los negocios de la policía.

No tenía dudas acerca de su decisión.

Previamente había enviado un emisario hacia el corazón de las tinieblas, con sede en un edificio situado en la calle Esmeralda 371, de la Capital.

—Y... yo contra Aldo Rico no tengo nada, querido. Pero debería estar secundado por un jefe policial en serio, o sea, con prestigio —fue el diagnóstico vertido allí por el comisario retirado Mario Naldi. Mirando de soslayo la pantalla de un televisor gigante, pronunció un nombre: Ramón Oreste Verón.

El comisario Verón era uno de los candidatos para ocupar la Superintendencia de Coordinación Policial, un cargo diseñado por el propio Ruckauf para dotar de un mando vertical a las dieciocho departamentales creadas por León Arslanián. La insinuación formulada por el hombre de Global Solutions no hizo sino confirmar la designación del "Chino" en ese puesto. Su figura era un contrapeso para los recelos que Rico podría despertar en la comunidad policial.

Verón había sido uno de los bastoneros de la "Maldita Policía", pero tuvo la suficiente cintura como para solicitar su pase a retiro meses antes de la debacle de 1996. De ese modo, su prestigio dentro de la fuerza fue proporcional al desconocimiento que la opinión pública tenía de él. A lo largo de los años mantuvo un perfil tan discreto que ningún medio periodístico contaba con su foto en los archivos. Tampoco se sabía que en ese momento era el director de seguridad del Banco Hipotecario, a la vez que asesoraba al intendente de Escobar, su antiguo subordinado Luis Patti. Con total reserva mantenía la sociedad empresarial constituida con sus viejos amigos: el inefable Néstor Naldi y el Cecodrilo Rossi.

Con su designación había quedado en el camino el candidato policial duhaldista, Víctor Fogelman, quien no imaginaba que había llegado el final de su carrera.

El 13 de diciembre fue citado por el ministro Aldo Rico.

Fogelman recordaría aquel encuentro con las siguientes palabras: "Tras un saludo medio cortante, Rico fue al fondo del asunto; me dijo que no había lugar para mí en el esquema de la nueva policía. Yo traté de reaccionar lo más dignamente posible y le dije que no se hiciera problemas. Y él entonces me despidió con un no menos cortante apretón de manos".

El ex coronel había hecho pie en La Plata como un paracaidista francés en Argelia. Llegaba acompañado por uno de sus lugartenientes de antaño, el ex mayor carapintado Osvaldo Vercelotti, que participó en los alzamientos de Semana Santa y Monte Caseros, para años después convertirse en el titular de la Dirección de Seguridad del municipio riquista. En su despacho de San Miguel solía desplegar ante los periodistas un enorme plano del partido, en el que toscamente estaban marcados todos los bares, clubes y esquinas en las que se reunían las "barras y patotas que molestan y causan disturbios", según su propia definición. También se abstinaba en asegurar que la delincuencia en esa zona había disminuido en un cuarenta y dos por ciento en 1998, en tanto que las estadísticas elaboradas por la Suprema Corte bonaerense hablaban

de un aumento del cuarenta y cinco por ciento en ese mismo año.

Al funcionario municipal le agradaba alternar el estudio de las estadísticas con el trabajo de campo. En esas ocasiones encabezaba un grupo de correccionarios con los que efectuaba provechosos "relevos de zona", generalmente de noche y vestidos con pantalones o chaquetillas militares. Casi siempre era de la partida Daniel Torres, uno de los coordinadores del Plan Barricos Bonaerenses. Cuentan que por esos días amenazó con su pistola a un muchacho en pleno centro de San Miguel.

No menos sombrío era Alejandro Peto, un puntero directamente afectado al despacho de Vercesi.

En 1996 se desempeñaba como administrador del cementerio local, y en una ocasión fue sacado de allí con las muñecas esposadas por orden del juez Fernández Gancn, luego de querer cobrar una coima de 500 pesos por dejar trabajar a un albañil en una sépida.

La Justicia también investigaba a un grupo de funcionarios riquistas involucrados en el manejo de un desarmadero. Entre ellos estaban el jefe de Inspección del municipio, Gustavo Salerno, el subdirector de la Policía municipal, Jorge Elshigabe, y el director de Tránsito, Carlos Dicca. La causa se abrió por la denuncia de un chatarrero en cuyo lote los tres funcionarios, junto a un oficial de La Bonaerense llamado Luis Naya, desarmaron aproximadamente quinientos vehículos para vender las autopartes.

Todos ellos desembarcaron junto a Rizzo en el Ministerio de Seguridad.

En la silla del Gabinete provincial lindante a la del Nato, se sentaba el también flamante ministro de Justicia, Jorge Casanovas, una especie de fanático religioso que, siendo fiscal de Lomas, fundamentó con una cita de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino un pedido de pena de muerte a un secuestrador y homicida.

Detrás de ambos, desde luego, se erigía la figura omnipresente del senador Horacio Remán, quien seguía al frente de la Comisión Bicameral. Diez años antes había cabalgado sobre el acuartelamiento policial para desestabilizar al entonces ministro de Gobierno, Luis Brunatti.

Luego estuvo entre quienes se confabularon contra la gestión de Arslanián. Ahí, desde las sombras, tomaba en sus manos las riendas de la política de seguridad en la provincia, junto a un par de culegas suyos en la Comisión: los justicialistas Juan Antonio Gariveto y Andrés Bevilacqua.

Los tres militaron hace un cuarto de siglo en la Juventud Peronista de la República Argentina, más conocida como Jotaperra, que respondía a José López Rega. Bevilacqua además era el segundo de Alberto Brito Lima en el Comando de Organización, un grupo de choque que en 1973 abrió fuego contra los manifestantes en la llamada Masacre de Ezeiza.

Todos los movimientos dados por Aldo Rizzo en su condición de ministro tenían previamente que pasar por el tamiz del trío.

El ex comando de la Guerra de Malvinas calculaba que no le iba a ser difícil disciplinar a la irredenta tropa policial. En parte, esa creencia se debía a que su relación con los jefes policiales de San Miguel había sido cordial, aunque no exenta de cierta desconfianza mutua. En los últimos dos años se había manejado con el jefe del Comando de Patrullas, comisario Miguel Ategiario, un hombre de modales dóciles que, sin embargo, había sido denunciado por "destrucción de causas".

Los comisarios Roberto Ampugnani, Gustavo Botei y Daniel Villegas eran los titulares de las tres comisarías de la zona. El intendente les hizo reparar 78 móviles y también duplicó el cupo de combustible. A cambio de eso, los uniformados intensificaron su presencia en las calles y solían hacer razias los fines de semana.

El nuevo ministro, en su afán de medir todo en términos militares, creyó que en la provincia sólo bastaba con repetir en una escala mayor los ejes de ese mismo esquema.

No tuvo tiempo de comprobarlo. Tampoco advirtió, durante sus arengas cuarteleras, la sorna en la mirada de sus nuevos subordinados.

Fue más perceptivo, en cambio, con los periodistas, con los cuales mantuvo una seguidilla de encontronazos. El más resonante ocurrió el 7 de enero en Pinamar, al salir intempestivamente del restaurante donde almorzaba con el intendente Blas Astieri, bramando con su particular retórica: "¿Para que quieren más fotos? ¿Ustedes se masturban con las fotos?"

Y remató:

— ¡Les voy a mandar a la policía para que los detenga!

El incidente tuvo tanta repercusión que hasta el Gobernador le reclamó que pidiera disculpas, aunque el Ministro aseguraba que se había tratado de un malentendido.

Su tropiezo final — en realidad, una "patinada" inducida — se produjo dos meses y medio después, precisamente en el transcurso de una conferencia de prensa. Sus enemigos habían captado que su punto más vulnerable era la comunicación. Es posible que la maniobra comenzara a urdirse en alguna sobremesa policial. Se la puso en práctica la mañana del lunes 20 de marzo.

Ese día, un hombre vestido con uniforme de comisario mayor permanecía parado en la planta baja del Ministerio, "marcando" con suma atención una puerta que conduce a la oficina de prensa. No se movió de allí hasta que vio salir a un sujeto alto, de rasgos angulosos, que fue hacia la cafetería. Era Horacio Poggi, un ex militante de la ortodoxia peronista que oficiaba como vocero de Rico.

Era la oportunidad esperada. El presunto comisario mayor aprovechó la ausencia de Poggi para ingresar a la oficina y entregar a la secretaria un sobre cerrado con cinta adhesiva.

Al volver a su despacho, Poggi recibió el recado:

— Señor Horacio, el comisario Galíndez se acaba de dejar esto. — La secretaria ignoraba que era un apellido de fantasía.

El sobre contenía una foto y un papel aclaratorio. El vocero, tras una ojeada, fue de inmediato al despacho de su jefe.

Una hora después, ambos se presentaban ante la prensa en la jefatura de la Departamental La Plata, donde Rico tenía programada una conferencia para felicitar públicamente al personal policial por el esclarecimiento del asesinato de una mujer que apareció descuartizada en Lisandro Olmos. El Negro Herrera, comisario que había actuado bajo las órdenes del Chorizo Rodríguez, recibió de buen grado los halagos del caso, para luego retirarse a una distancia prudencial mientras el ex coronel iniciaba su habitual centienda con los movileros.

— Del hecho en sí, no les voy a dar datos, porque no estoy autorizado por el juez, ¿estamos?

Y sin decir "agua va", arrojó sobre la mesa una fotografía del presidente Fernando De la Rúa sabiendo de una reciente visita a la A.F.P.P. A su derecha había un hombre cuyo rostro estaba enmarcado por un círculo rojo. Los colaboradores del Ministro distribuyeron entre la concurrencia un papel, en el que se leía: "Ningún periodista se ha percatado de lo que hace el Indio Castillo en la custodia presidencial".

El "Indio" había sido hombre de Aldo Rico, hasta que un entredicho los enemistó para siempre. Se trataba de un matón histórico del sindicato de marítimos. Participó en la represión ilegal durante la dictadura, para luego alinearse en el bando de los carapintadas. Estaba sospechado de participar en varios asesinatos y permanecía prófugo de la Justicia por el intento de homicidio contra el intendente de la localidad correntina de Monte Caseros. Este hecho se había originado en un pleito por el uso de un predio sobre el río Paraná, a la altura de la Triple Frontera, que Castillo y unos amigos utilizaban para traficar armas y drogas.

Rico había caído en la trampa.

No sabía que, en ese preciso instante, el Indio Castillo estaba detenido en la ciudad de Paraná, donde lo habían sorprendido con una pistola y una, otra calibre 38, tres granadas y documentación falsa a nombre de dos personas distintas.

La cazabombas le explotó en pleno rostro al Ministro. Su onda expansiva se prepagaría en múltiples direcciones. En la Casa Rosada todos pusieron el grito en el cielo, exigiendo la inmediata rectificación. El gobernador Ruckauf, abochornado por el episodio, partió con urgencia a los Estados Unidos, en una visita protocolar, sin hacer declaraciones. El gauchete bonaerense, entre tanto, se llamaba a un estricto silencio.

Sólo el testarudo ex militar persistió en el error.

En la tarde siguiente convocó a los medios para hablar sobre la desarticulación de una banda de traficantes de heroína. A esa altura, todos estaban al tanto de que el Poder Ejecutivo Nacional había negado la presencia del Indio Castillo en la

custodia del primer mandatario. La conferencia marchaba sin mayores sobresaltos hasta que, desde el fondo de la sala, un cronista levantó la voz y alcanzó a preguntar sobre el tema.

Rico se certó:

—La foto es evidente. El Gobierno puede decir lo que se le cante.

Poco después trascendería la verdadera identidad del hombre retratado junto a De la Rúa. Se trataba del oficial principal de la Policía Federal Carlos Alberto Beraldi, asignado a la División Custodia Presidencial.

El incidente precipitó el final del verano carapintada en el Ministerio de Seguridad. Aldo Rico tuvo que volver inmediatamente a San Miguel. Su breve gestión fue como la calma que precede a la tormenta.

Verón, en tanto, se probaba su flamante traje de ministro.

II

MAREA AZUL

El comisario Eduardo Martínez transitaba por un momento de esplendor. Lejos habían quedado los tiempos en que estuvo a punto de caer en desgracia, relegado a designaciones periféricas que auguraban su retiro forzoso. Así se habían marchitado brillantes carreras policiales, como la del Vampiro Miniscarco y la del Caballo Vigilante, sus antiguos compañeros de andanzas. Martínez había logrado hacer de su permanencia un verdadero arte; su herramienta fue el silencio. A los 46 años, con sus flamantes jinetas de comisario mayor, era premiado con la Superintendencia de Coordinación Policial, entonces el máximo cargo en la estructura de La Bonaerense.

Desde allí tuvo que lidiar con los fantasmas de su imagen, brutalmente expuesta a la jauría de los medios. Ya en el inicio de su gestión debió salir al cruce de algunas "chicanas" periodísticas. Por ejemplo, se vio obligado a aclarar que la denominación de su quinta en la zona norte, "Villa Blanca", no aludía en absoluto a su paso por la división de Narcotráfico, sino al nombre de su esposa.

El primer topetazo frontal contra su investidura llegó en agosto de 2000, por efecto residual de un remoto episodio, de cuando era un joven oficial subinspector de 24 años que prestaba servicios en la comisaría 2° de San Isidro. Martínez arrastraba una causa penal, que incluso lo llevó por una breve temporada tras las rejas, por torturar en 1978, a palazos y con una picana eléctrica, a un detenido de nacionalidad alemana.

El expediente judicial fue instruido por el titular del Juzgado en lo Penal N° 2 de San Isidro, Juan Carlos Dillon, y estaba caratulado "Apremios ilegales con lesiones gravísimas". El secretario de la causa fue Eusebio Osorio Soler, quien para 1999 se había convertido en juez del Tribunal Oral N° 7 de San Martín. El fiscal había sido Juan Carlos Fugaretta, camarista de San Isidro para cuando Martínez llegó a la Superintendencia de Coordinación.

Fugaretta, en una conversación con algunos periodistas, desempolvó aquel lejano hecho, ocurrido cuando el jefe de la fuerza no era otro que Ramón Camps.

Las revelaciones sobre el pasado de Martínez no parecieron perturbar a su superior directo, el ministro Ramón Oreste Verón. Al ser abordado por periodistas en la entrada al Ministerio, Verón pretendió descalificar la veracidad de la noticia:

—No tengo ningún registro sobre el hecho al que ustedes se refieren.

—Antes de designar como sucesor suyo al comisario Martínez, ¿estudió su legajo?

—Por supuesto. Es mi obligación hacerlo.

—¿Y no advirtió nada raro?

—No, para nada.

—¿Sabía que fue procesado por torturar a un detenido?

—No, no lo sabía.

—¿No se sorprende el asunto?

—Vea, no me sorprende que haya sido denunciado. Es común que los delincuentes lo hagan por enemistad hacia el policía que los detuvo o por alguna otra cuestión personal.

El Ministro dio por finalizadas sus declaraciones y consultó su Rolex; eran las doce del mediodía del 25 de agosto. En ese mismo instante, muy lejos de allí, se engarzaba el primer eslabón de una cadena de hechos que convertirían ese viernes en un día particularmente agitado.

Todo comenzó en la sucursal Talar de Pacheco de la Banca Nazionale del Lavoro, ubicada en el cruce de la Ruta 197 y la colectora de la Panamericana. Un sujeto, portando sin demasiada sutileza un FAL, ingresó en el banco, secundado por otros que empuñaban armas cortas. Uno de ellos se quedó en la puerta, y sus socios saltaron con agilidad sobre el

mostrador para vaciar dos cajas de atención al público. Sus movimientos quedaron registrados por las cámaras de seguridad. Cuatro minutos después, los asaltantes se batieron en retirada, abordando un Ford Falcon de apoyo que jamás sería localizado. El arqueo posterior determinaría que el botín fue de 20.000 pesos.

Alertado por la alarma, no tardó en llegar un patrullero de El Talar.

De inmediato se dio aviso al Comando de Patrullas, lo que originó un rápido despliegue de efectivos, bautizado con el criterioso nombre de "Marea Azul". Según fuentes policiales, no tardó en ser detectada una moto, en la que se desplazaban tres de los asaltantes, llevando a cuestas un bolso que contenía todo el arsenal utilizado en la faena. Perseguidos por un móvil del Comando de San Miguel, se internaron en las fangosas calles de la villa Parque Alvear, en Los Polvorines. En pocos minutos se congregaron otros cuarenta patrulleros, atestados de policías. El despliegue sumó 324 uniformados, apoyados por cuatro helicópteros.

Todos gatillaron su granito de arena para consumir una verdadera tarde de perros.

Ya habían transcurrido tres horas desde el inicio del operativo policial. El centro de la escena era una casita precaria, construida con ladrillo de canto sin revocar, donde, presumiblemente, se habían refugiado los asaltantes. La vivienda se había convertido en una especie de queso Gruyere. Tampoco quedó en pie el almacén aldeaño, del que había desaparecido hasta la balanza. Los tres delincuentes muertos fueron identificados como Sergio Torres, Fabio Brizzola y Eduardo Leguizamón. Cada cuerpo presentaba alrededor de setenta impactos de bala, casi todos en la cabeza. Otro dato significativo fue que, según las autoridades bancarias, en el botín recuperado faltaban unos 9.000 pesos.

Entre los policías, además de dos suboficiales gravemente heridos, había caído el sargento primero Julio Sánchez, quien dejó una viuda y tres pequeños hijos.

Al principio, el comisario Aníbal Degastaldi, uno de los jefes del operativo, tuvo a su cargo coordinar la comunicación entre las autoridades policiales y los periodistas que fueron llegando al lugar en hordas. Luego se hizo presente el ministro Verón, cuyo traje negro le daba apariencia de empleado de una funeraria. A su lado, uniformado y circunspecto, estaba el comisario Martínez, quien se encargó de informar:

— Eran delincuentes de alta peligrosidad; no llegaron a tomar rehenes porque el rápido accionar policial se los impidió.

El tiroteo de Los Polvorines tendría una derivación inesperada al comprobarse que tanto los efectivos heridos como el fallecido habían sido víctimas de disparos policiales: proyectiles de una escopeta calibre 11,70 que no figuraba en el arsenal de los delincuentes, y otro de calibre 12,70 — que atravesó el cráneo del desafortunado Sánchez —, perteneciente a una Itaka de la fuerza.

El comisario Degastaldi tuvo que dar nuevamente al periodismo las explicaciones del caso. En su despacho de la Departamental de San Isidro no lucía tan exultante como el día anterior. Para apoyar sus dichos se basó en un esquema que él mismo había dibujado en una enorme cartulina:

— Cuando los malvivientes fueron detectados en esa casilla, los efectivos policiales adoptaron cuatro posiciones de tiro. Había policías en el frente y en el fondo de la casa, quienes efectuaron disparos en línea recta y también en forma oblicua. En medio de los tiros, lamentablemente, quedaron otros policías que, en vez de recibir heridas de los delincuentes, habrían sido impactados por sus compañeros.

El tiroteo de Los Polvorines resultaba una versión desmejorada de la masacre de Andreani, ocurrida en noviembre de 1996.

Así se desprende de los dichos de un policía arrepentido que participó en la forzada contienda: el cabo Adrián Montenegro, quien luego de recibir innumerables amenazas, actualmente reside en los Estados Unidos con status de refugiado político.

La investigación judicial comenzó a los pocos días de producido el hecho, con la intervención del fiscal de San Martín, Mario Mariani. El fiscal detectó varios puntos oscuros en los informes recibidos. En abril del año siguiente, la causa cobraría impulso, precisamente tras la presentación de Montenegro y el pedido del fiscal general, Luis Chichizola, para que se intensificase su investigación.

Montenegro declaró ante los fiscales que los supuestos mandantes ideológicos de la masacre "fueron el ministro Ramón Verón y el comisario Eduardo Martínez". El cabo sostenía sus aseveraciones en una "conversación por handy entre el comisario Degastaldi y el jefe policial, en la que éste le pedía el cuadro de situación antes de que los hechos comenzaran". También aseguró bajo juramento que "otros tres policías que reportaban directamente a Degastaldi estaban desde hacía tres días en la villa, preparando el escenario del operativo, porque sabían que los asaltantes, tras robar el banco, irían a guardarse precisamente ahí".

La dupla formada por Verón y Martínez había incurrido en el viejo truco de fabricar una "proeza operativa" para quedar mejor posicionados.

Durante unos pocos meses, y por primera vez en un lustro, La Bonaerense había logrado salir del foco de la opinión pública. El Gobernador había gozado de un breve desahogo. Pero en ese agosto sangriento, la justicia y el periodismo volvieron a revisar el pasado y el presente de la policía.

La Suprema Corte provincial dio curso a una denuncia del asesor de menores de San Isidro, Carlos Eduardo Bigalli, quien documentó que entre enero y julio de 2000 se habían triplicado los casos de torturas policiales a niños y que las condiciones de su alojamiento en comisarias eran intolerables. El lunes 14 de agosto, Bigalli había presentado una denuncia con el fin de inhabilitar los calabozos que alojaban menores en la comisaría de Victoria. La fundamentó en estos términos: "Resulta inconstitucional, ilegal e ilegítimo que los niños vulnerables paguen con sus cuerpos y almas el palmario incumplimiento del estado provincial, reclusos en jaulas". Luego elevó a la Corte su tétrica estadística de maltratos a los chicos detenidos en su jurisdicción: puñetazos, patadas, rodillazos, culatazos, simulacros de fusilamiento, disparos de armas de fuego, amenazas de muerte y vejaciones sexuales.

Según su informe, en los dieciocho meses que habían transcurrido entre julio de 1998 y diciembre del año siguiente, comunicó a la Corte provincial "129 denuncias de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes a menores". Esto es: un promedio de 7,16 casos por mes. Añadía que en los siete primeros meses de 2000, las denuncias treparen a 159, es decir una media de 22,71 casos por mes, o un caso por día hábil. En otras palabras, las denuncias se habían triplicado desde la asunción del gobernador Ruckauf en la provincia.

Bajo la "mano dura" que el Gobernador instaló como eje de su campaña electoral asemeja la mano negra de La Bonaerense. A los pocos meses, la ascendente espiral de denuncias por corrupción y brutalidad policial avanzaba hacia una crisis que envolvía a los tres poderes del Estado provincial, al tiempo que se expandía el número de personas detenidas, sin que por ello se redujera la cantidad de delitos cometidos.

Con medio centenar de asaltos a mano armada y cuatro homicidios diarios, Ruckauf no podía vanagloriarse de éxito alguno en el perfil que había elegido para su política de seguridad. Sin embargo, a medida que transcurría su gestión, la cantidad de personas arrestadas en procedimientos judiciales se triplicó, agravando las ya de por sí calamitosas condiciones de detención en las comisarias bonaerenses.

La Cámara de Apelaciones de San Isidro, con la firma de los integrantes de todas sus salas, emitió un contundente pronunciamiento sobre la situación. Según las palabras de los magistrados, en ese Departamento Judicial existía "una enorme maquinaria para detener personas". En los primeros meses de 2000 fueron alojados 54.000 detenidos en comisarias, contra los 40.000 de todo el año anterior; es decir, el doble, sin que eso "pueda argüirse como demostración de eficacia que se refleje en alguna disminución en los índices delictivos".

A las denuncias de funcionarios judiciales, del periodismo y de ambas cámaras de la Legislatura se sumaban documentos oficiales de la propia administración provincial que, por otra parte, ya daban cuenta de la tensa relación entre Ruckauf y el vicegobernador Solá.

Mientras el Gobernador pretendía que los escándalos policiales no perturbaran su salto a la escena política nacional, Solá comenzaba a sospechar que, tarde o temprano, sus propias aspiraciones irían a estrellarse con el descontrol policial que, hasta ese momento, describía como un "desborde". La historia se encargaría de demostrar que sus aprehensiones eran proféticas.

Curiosamente, el comisario Eduardo Martínez, más que por los hechos ocurridos, terminaría tropezando con una encrucijada del lenguaje.

Al defender a sus subordinados y jurar que en las comisarias no se utilizaban picanas eléctricas para apremiar a los presos, lanzó una advertencia que dejó en claro que el jefe de la Superintendencia no era precisamente un moderado:

—Al policía que haga cosas de esas, yo mismo le fusilo por la espalda —no tuvo empacho en declarar ante Radio Nacional.

Poco después se produjo su reemplazo por un nuevo jefe de apellido poco recomendable para la carrera policial: el comisario José María Gallina, un moderado que estaba al frente de Asuntos Internos.

Lo suyo fue, apenas, un interinato.

Meses después lo sucedía un representante de la línea dura: el comisario Amadeo D'Angelo, a quien llamaban "El Renco" luego de que una bala le hiriera las cuerdas vocales. Era el mismo oficial que se había hecho cargo de la comisaría de Pinamar en aquella turbulenta temporada de 1997, cuando asesinaron a José Luis Cabezas. Anteriormente fue trepa del legendario Chorizo, en La Matanza, y de Pedro K Sedczyk, en la brigada de Almirante Brown.

Don Pedro se vio imposibilitado de asistir al acto de asunción de su antiguo subordinado. En esos días, el Polaco agonizaba en una sala de terapia intensiva del Instituto Médico Platense, como consecuencia de un cáncer de pulmón. Cuenta que murió en compañía de su abogado, el doctor Alejandro Casal, y que sus últimas palabras fueron:

—Viste, Alejandro, estos hijos de puta no me pudieron meter preso.

Fras lo cual cayó en un definitivo sepor.

Durante el gobierno de Ruckauf, el dato más sobrecogedor de su política de seguridad fue el florecimiento en diversas zonas del Gran Buenos Aires de grupos dedicados a imponer la pena de muerte extrajudicial. Se trataba de bandas firmadas por policías en actividad o retirados que, estando de franco o en su horario laboral, fusilaban a menores sospechados de ser delincuentes.

Los casos más emblemáticos tuvieron lugar en Don Torcuato, donde actuaba un escuadrón integrado por policías de la Comisaría 3a. Dos de esos efectivos compartían una agencia de seguridad ilegal, cuya sede servía además de base operativa para la "limpieza social" a la que estaban abocados.

Esa fue la única estructura desarticulada por una investigación judicial, ya que a sus integrantes se les dictó prisión preventiva. Pero una golondrina no hizo el verano. Muertes similares, registradas en otros confines, indicaban que el fantasma de los escuadrones sacudía las zonas más inhóspitas del Conurbano.

En Don Torcuato, luego de una extensa investigación hecha por el fiscal Lino Mirabelli, los sargentos Hugo Alberto Cáceres y Anselmo Puyó se convirtieron en los primeros policías a los que se les dictaba prisión preventiva por formar parte de un escuadrón de la muerte. Ambos regenteaban una agencia de seguridad ilegal y estaban sospechados de acabar con la vida de varios adolescentes; entre ellos, Guillermo "Nuni" Ríos, de 16 años, y Fabián Blanco, de la misma edad. El caso había tomado estado público a través de una investigación periodística publicada en Página 12 por Cristián Marcón.

Poco después de la ejecución de Ríos, quien este escribe tuvo la oportunidad de entrevistar a Puyó y Cáceres, en el domicilio de este último. Cáceres tenía en sus manos un afiche de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CRRPII) que denunciaba las muertes del escuadrón. "Mirá las fotos que ponen en los carteles, parecen angelitos. Yo te voy a mostrar lo que eran estos pibes", dijo Cáceres. Y sacó un cuaderno Gseria, manchado, lleno de fotografías de chicos apaleados, amarrados o muertos. Allí estaba la foto de Ríos parado en un descampado, con las manos atrás. "Este ya es boleta", aclaró. Abajo, efectivamente, se leía la palabra "abatido". El fiscal no encontró el cuaderno, pero sí negativos de varias instantáneas con chicos parados como Nuni, o quizás abatidos como él.

La profusión de esta modalidad generó un lapidario informe, dado a conocer en octubre de 2001 por la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense. Se refería a 60 chicos de entre 13 y 18 años, que habrían sido asesinados por efectivos de La Bonaerense. Muchos de ellos anteriormente habían sido golpeados y amenazados en comisarias.

Estas revelaciones precipitaron la caída del ministro Verón.

El ex comisario abandonó su despacho de La Plata con el mismo sigilo con el que había llegado. Lo sucedió el ex intendente de Hurlingham, Juan José Álvarez. "Juanjo" se limitó a cubrir los últimos estertores de un fracaso. El Gobernador ya estaba diseñando su rauda retirada, que se concretaría algunas semanas después, luego de las agitadas jornadas del 19 y 20 de diciembre.

La génesis de los incidentes dejó pocas dudas acerca del papel cumplido por el gobierno de Ruckauf en su propagación. En La Plata, las vallas colocadas sin custodia policial formaron un embudo que condujo a los manifestantes a las puertas de la Legislatura, que se abrieron al primer forcejeo; adentro sí los esperaban los proyectiles policiales. Mientras tanto, en distintos puntos del Gran Buenos Aires fue ostensible la presencia de hombres jóvenes que se desplazaban en vehículos nuevos azuzando los saqueos. Algunos respondían al ex mayordomo carapintado Jorge Venturino; otros, a diversos punteros del PJ. Nada pareció muy planificado de antemano, pero todas las operaciones posibles no tardaron en treparse sobre esa situación.

La Bonaerense, claro, no fue ajena a los hechos.

Como obedeciendo estrictas directivas al respecto, en casi todas las localidades del Conurbano las detenciones policiales fueron recorriendo los barrios más humildes, diseminando falsas informaciones sobre supuestas hordas provenientes de otros barrios que se aproximaban para atacarlos. La maniobra, a su vez, motorizaba nuevos desbandes y más saqueos, que los uniformados contemplaban con beneplácito. Incluso algunos, como los integrantes del servicio de calle de la comisaría 3a de Don Torcuato, fueron aún más lejos y repartieron armas entre algunos manifestantes. Así abierto el camino el camino para que Álvarez y Ruckauf pudieran consumar su gran escape hacia el Gabinete nacional.

Para entonces, la "mano dura" había dejado sus huellas dactilares en la provincia.

Capítulo 9

LEGAJO POR LEGAJO

"A Casiere se están haciendo la contra.

Peró es un muchachó bien intencionado.

Hay que darle una mano."

Comisario MARGO NALDI

RECUERDOS DEL PRESENTE

Nunca le dije abiertamente, pero Felipe Solá envidiaba a los gobernadores de otras provincias, que únicamente tenían que lidiar con la bancarrota de sus arcas. Él, además, debía enfrentarse con su propio karma territorial: La Bonaerense.

Hasta hacía poco, pensaba que la creciente inseguridad y la corrupción policial eran dos fenómenos cuyos orígenes estaban disociados. Pero, a poco de hacerse cargo de la gobernación, debió modificar el curso de su razonamiento. Los sectores más duros de la fuerza le habían declarado la guerra y no escatimaban recursos para llevarla adelante. Los uniformados hacían subir la sensación térmica del caos a través de una variada gama de delitos.

Por ejemplo, con los secuestros extorsivos.

Solá y su ministro del área, Juan Pablo Cafiero, tenían sobrados indicios sobre la presunta participación policial en los hechos más resonantes de esa modalidad. La comprobación empírica más notable fue el caso protagonizado por dos efectivos de la flamante Brigada Antisecuestros, el sargento Aníbal Masgoret y el cabo Hernán Palomeque. Ambos estaban asignados a la búsqueda de Diego Peralta y fueron detenidos por la comisión de un hecho similar, en el que la víctima era el hijo de un comerciante de Rufael Calzada. Los dos policías investigaban el secuestro de El Jagüel bajo las órdenes del subcomisario José Alberto Hernández, que también tuvo que dejar abruptamente el caso: fue arrestado por extorsionar a un comerciante de Lomas de Zamora.

El Gobernador, sin embargo, forzaba la creencia de que, en otros frentes, la ofensiva de los azules había disminuido en intensidad. Durante tres semanas no se registraron profanaciones de cementerios ni la aparición de cadáveres dejados a modo de señal. Solá y Juampi sospechaban que en esa insinuación de tregua habría tenido algo que ver el dúo compuesto por Mario Naldi y Oscar Rossi.

Ambos jefes policiales habían tenido un ameno encuentro con el subsecretario de Seguridad, Marcelo Saín, que se repitió poco después, pero sólo con el "Ñeño" Naldi. Luego, los dos comisarios retirados perfeccionaron un instructivo de emergencia, que les gustaba definir como una "reforma policial instantánea". Lo hicieron sobre unas hojas con membrete de la consultora Global Solutions. Su destinatario era el propio ministro Cafiero.

Naldi no tuvo empacho en deslizar públicamente la existencia de ese papen. Para darle repercusión, lo hizo ante periodistas, operadores políticos y otros policías. Así instaló la presunción de que él y su socio se habían convertido en asesores del Gobierno provincial.

Para robustecer esa idea, solía decir:

—A Cafiero le están haciendo la contra. Pero es un muchacho bien intencionado. Hay que darle una mano.

Incluso se produjo un episodio con las características de un paso de comedia, cuando él y Juampi coincidieron en un estudio de televisión al cual, sin saberlo, ambos habían sido invitados. Allí, los esfuerzos del Ñeño por resaltar su familiaridad con el ministro sólo fueron equivalentes a la desesperación de éste por mantenerse distante del comisario retirado.

En cambio, Naldi actuó con mucha reserva cuando, por esos mismos días, se reunió con el segundo de la SFDL, el ex intendente Oscar Rodríguez. El encuentro tuvo lugar en el despacho del "Señor 8". Allí se habría pactado un convenio por el cual el antiguo jefe policial recibiría unos 30.000 pesos mensuales, aunque no trascendió a cambio de qué tipo de servicios.

En ese contexto llegó a su fin el turbulento invierno de 2002.

Durante las últimas horas del 20 de septiembre, el Gobernador visitó el partido de Rojas acompañado por algunos funcionarios, para participar en una cena conmemorativa del Día de la Industria. El agasaje transcurrió en forma cordial. A los postres, flanqueado por el intendente Gustavo Vignali, Solá recibió una plaqueta de manos del presidente de la Unión Industrial bonaerense, Osvaldo Rial, y luego pronunció un discurso rebosante de palabras optimistas.

Ese era su estado de ánimo durante la velada.

El Gobernador se mostró distendido; departía amablemente con todo aquel que se le pusiera a tiro y, al final, hasta se permitió aflojarse el nudo de la corbata. Ya a la tercera copa de tinto, su horizonte comenzó a parecer más diáfano. Sentía que la etapa más turbulenta de la crisis policial ya había sido superada y esa noche concibió el sueño de inmediato.

Esa madrugada, lo despertó el teléfono que sonaba junto a su lecho. La vez de Juampi Casiere lo terminó de despejar:

—Acaban de intentar contra la Carlotta.

—¿Contra quién?

—Contra Estela Carlotta. Me avisaron recién. Voy para allá.

En la casa de City Bell donde vive la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo todavía podían verse las huellas del ataque.

El atentado se produjo a las cuatro de la madrugada. Minutos antes, Estela se había levantado para ir al baño y había caminado por el lugar donde impactarían las balas.

Fueron cuatro tiros de distintas Itakas, disparados desde dos puntos cercanos a la fachada de la casa.

—¿Qué indicios hay? —quiso saber Juampi, al toparse en el lugar del hecho con el jefe de la Departamental La Plata, Carlos Belén.

—No muchos, jefe. Salvo que las armas son las que usan las fuerzas de seguridad.

El Gobernador no tardó en llegar.

—¿Para quién de los dos fue esto? —fue lo primero que indagó a su ministro, al quedar a solas.

Era razonable suponer que el ataque había sido fruto de una acción policial, pero Solá sospechaba que lo acontecido también podría haber sido obra de algún sector ultradulhista conjurado contra él. Casiere le recordó que la firma de Estela Carlotta era una de las que se leía al pie de un durísimo documento que denunciaba a La Bonaerense por utilizar prácticas similares a las de la última dictadura militar. Junto a la de otros representantes de organismos de derechos humanos, legisladores y funcionarios, allí también figuraba la rúbrica del subsecretario Marcelo Saín.

Durante la mañana del lunes, al Ministerio de Seguridad llegó, en forma anónima, una fragmentada hipótesis del atentado, señalando que el episodio habría sido protagonizado por "efectivos exonerados de la fuerza, que en su momento fueron chieferes o custodios de algunos jefes".

Eso era todo.

Al día siguiente, bajo un clima otra vez cargado de oscuros presagios, el Gobernador participó en la Escuela de Suboficiales del acto de egreso de los aspirantes a agentes. En retribución a su salud, aquella nutrida fila de nevelos policías le dispensó un desparejo: "¡Buenos días, señor Gobernador!". Durante la entrega de medallas y diplomas, sintió sobre la nuca el aliento del titular de la fuerza, el comisario Alberto Sobrado.

A los cuarenta y cinco años este hombre menudo, de expresión hierática, se había convertido en el jefe más joven en toda la historia de La Bonaerense. Tenía el don de agradar a primera vista y también el de intercalar en su modo circunspecto algunos toques de humor.

Pero era difícil saber a ciencia cierta para quién jugaba.

Extrañamente, en medio de las hostilidades policiales desatadas contra la administración provincial, Sobrado no era resistido dentro de la fuerza. Solá estaba al tanto de sus aceitados vínculos con el senador Heracio Román, sin olvidar de que también era hombre de Juanjo Álvarez, su acérrimo rival.

Nunca había tenido suerte con las cúpulas policiales que se habían tocado desde que la intempestiva fuga de su antecesor lo pusiera al frente de la provincia. El comisario Anacleto D'Angelo, una herencia directa de Carlos Ryckauf —quien lo eligió por recomendación del Cherizo Rodríguez—, debió irse el 17 de abril, tras once meses de permanencia en el cargo, luego de que un juez de San Martín ordenara allanar su casa, en el marco de una investigación por presunta "protección policial" a empresarios de la prostitución. En esa causa también estaban imputados el secretario de Gobierno de San Miguel, Oscar Zilocchi, el presidente del Consejo Deliberante de ese municipio, Claudio Pérez, y alrededor de

veinte comisarios, subcomisarios y oficiales.

En esas circunstancias se había hecho cargo de La Bonaerense el comisario Ricardo Degastaldi, máximo exponente de una familia policial. Entre sus parientes están Norberto Degastaldi, un ex integrante de la patota del Cherizo y veterano de la masacre de Andreani, y Aníbal Degastaldi, el notorio titular de la Departamental San Isidro.

Las riendas no le duraron demasiado; fue relevado antes de cumplir setenta días de gestión, debido a la masacre de Avellaneda. Aquel trágico 26 de junio se encontraba descansando en Mar del Plata. Y siguió descansando una vez producidos los hechos. La notificación de su desplazamiento le llegó precisamente allí.

En la Escuela de Suboficiales, girando disimuladamente los ojos hacia el comisario Sobrado, el Gobernador intentaba imaginar de qué hablaba éste con otro uniformado cuya cara traslucía crispación. Vio que el jefe policial se encaminaba hacia él, con expresión sombría.

Solía recibir de Sobrado la noticia sobre otra muerte policial, la del comisario Gustavo José Di Giulio. Era el jefe de la comisaría de Lavallol, una localidad del partido de Lomas de Zamora. Su violento deceso había ocurrido hacía apenas una hora, cuando, acompañado por una mujer, fue abordado por cuatro hombres armados, aparentemente con la idea de asaltarlo. El policía sacó su arma, pero desde un vehículo de apoyo le dispararon ocho balazos por la espalda. Murió antes de caer al suelo.

En el horror de esa muerte subyacía una historia sobrecogedora.

El hecho formaba parte de lo que se podría denominar "la maldición Etcheverri", en alusión al comisario de ese apellido que había sido ejecutado con diecisiete proyectiles de ametralladora. Ese asesinato había ocurrido en la mañana del 8 de agosto en una esquina de Villa Barceló. Jorge Abel Etcheverri era el jefe de la comisaría Lanús 8a, de Villa Obrera. Algunos integrantes de su entorno se aventuraron a considerar que quizás el homicidio fuese una tardía secuela de "aquel problemita que tuvo hace unos años".

Se referían a lo que en su legajo, número 014768, figuraba como "disponibilidad preventiva, con fecha del 28 de noviembre de 1997, por causa caratulada como defraudación al fisco y otros".

Dicho de otro modo, el entonces oficial principal Etcheverri, de la Departamental Lomas de Zamora, fue procesado penalmente con prisión preventiva en una causa por manipulación de expedientes, en la que también se vieron involucrados el camarista Eduardo Alsina y los abogados de un estudio penalista.

En el siguiente párrafo de su legajo, con fecha del 4 de diciembre de 1998, se podía leer: "El Gobernador de la provincia de Buenos Aires decreta desestimar por extemporáneo el recurso de revocatoria impuesto sobre el causante, ascendiéndose al grado de subcomisario".

Habiendo superado ese mal trago, la fatalidad lo acorralaría cinco años después en una esquina suburbana, dejando una mujer y dos hijos.

La primera vuelta de tuerca la dio el destino esa misma noche, cuando en otra calle suburbana, en Remedios de Escalada, caía herido de cuatro disparos —uno de cuales le atravesó la columna— el oficial inspector Sandro José Peña, de la comisaría Lanús 5a. Media hora antes había sido designado para encabezar una investigación sobre el asesinato del comisario Etcheverri.

Un mes y medio después, "la maldición" cobraba una nueva víctima.

El comisario Gustavo Di Giulio era un viejo amigo de Etcheverri y en el momento de morir acompañaba a la mujer de éste, Nancy Cantilena, quien había ido a cobrar en un banco su pensión de viuda.

No menos misteriosa fue otra ejecución perpetrada durante la medianoche del último domingo de septiembre, aunque en este caso la víctima no era un policía sino un militar: el coronel retirado Régulo Carlos Menéndez. El hombre aguardaba a su hijo de 18 años en un Chevrelet Astra estacionado junto a la casa de su ex mujer, ubicada en Moreno al 2400, de Bella Vista. Cuando el muchacho fue a su encuentro, el coronel seguía en la cabina del vehículo, pero perforado por veinte tiros gatillados a quemarropa.

Menéndez, que había egresado del Colegio Militar en 1966 con el grado de subteniente de caballería, llegó un cuarto

de siglo después a la comandancia del Regimiento de San Martín de los Andes, donde por un tiempo estuvo detenido Mohamed Ali Seinfeldin. Tras su pase a retiro, montó una agencia de seguridad que tenía dos sedes; una estaba en Belgrano y otra en Bella Vista. Podía operar en todo el país, y su especialidad era la vigilancia de countries. El plantel de custodios lo integraban ex miembros de las Fuerzas Armadas y ex gendarmes. Había bautizado a su empresa Securitas SA, palabra que en latín significa "se cuida".

Eso fue exactamente lo que no hizo durante la noche de aquel domingo.

Este nuevo hecho de violencia, aunque se lo quiso guardar en la más estricta discreción, erizó la piel de quienes se desempeñan en el Ministerio de Seguridad bonaerense. Descartaban un intento de robo. Para los investigadores dirigidos por el fiscal de San Isidro, Fabio Gardigonde, la hipótesis que cobró más fuerza fue la de una guerra entre agencias de seguridad. La pesquisa avanzó un casillero más y centró la lupa sobre ex jefes policiales que manejan ese negocio millonario y que, por lo general, no aceptan competencia.

"Menéndez se metió en tierra de los Patas Negras y lo cortaron para sacarlo del medio", fue la explicación de una fuente judicial.

El Gobernador tuvo un nuevo motivo para su desvelo: los sectores duros de la fuerza no sólo habían reiniciado las hostilidades contra sus enemigos del poder político, sino que ahora la guerra de La Bonaerense se había extendido hacia un blanco multidireccional.

II

SECUESTROS S. A.

Juan Pablo Cafiero se había mostrado como un político diestro en la administración de programas sociales, pero se sentía perplejo ante los nuevos buyes con los que debía arar. Le resultaban incomprensibles los laberínticos códigos que regulaban el universo policial.

Desde el comienzo de su gestión al frente del Ministerio, el hijo de Don Antonio basó sus posibilidades para mantenerse a flote en el apoyo que le brindaría Felipe Solá. Sabía que los uniformados lo resistirían, aunque les aclaró que no incluía entre sus planes reforma alguna ni "la articulación de una caza de brujas".

Esas habían sido sus propias palabras en una reunión que mantuvo con los comisarios Alberto Sobrado y Raúl Marcelo Cheves, este último, secretario general de La Bonaerense.

Ambos asintieron con beneplácito.

De allí en más, el ministro repitió una y otra vez que revisaría "segajo por segajo". En realidad, su estrategia para atajar los acontecimientos estaba basada en cirugías circunstanciales, dentro de una política policial lo menos traumática posible.

No bastaba.

En su despacho, ubicado en la planta baja de la antigua Jefatura, cavilaba nuevamente sobre sus próximos pasos. Frente a él, el subsecretario Marcelo Saín estaba entregado a su tic de acomodarse los lentes sobre la nariz. Habían estado analizando la propuesta llevada por Naldi y sus amigos.

En verdad no se trataba de ninguna propuesta, sino de un catálogo de sugerencias acerca de movimientos de coyuntura, que contemplaban la designación de algunos uniformados en destinos estratégicos, el desplazamiento de otros, ciertos traslados y, desde luego, la confirmación en sus puestos de los jefes departamentales Claudio Smith, Rodolfo Coronel, Mario Cánepa y Aníbal Degastaldi.

En uno de sus encuentros con el Subsecretario, el Niño había dejado en claro que esos cuatro hombres eran de su propia cosecha.

—No sé si eso es tan así... —dijo Saín a Cafiero, al evocar aquella frase.

Y tras rascarse la barbilla, agregó:

—Me parece que ese Smith creció tanto que ya no es más de Naldi, sino de sí mismo.

El comisario Rodolfo Coronel, en cambio, tenía un origen cercano al Niño y mantenía estrechas relaciones con Sobrado. En la Departamental Morón fue jefe de turno durante el pase del jefe de la fuerza. Luego fue jefe del Comando de Patrullas de San Isidro, hasta que pasó a conducir la Departamental Quilmes.

Contrariamente a Coronel, Cánepa era un disculo. Creció junto a Naldi y había hecho gran parte de su carrera en la zona Norte, para luego pasar a Morón, donde tuvo enfrentamientos con Sobrado. Así fue como recaló nuevamente en San Isidro, llegando a la jefatura de esa Departamental gracias a los oficios de su influyente mentor.

El caso de Aníbal Degastaldi encerraría una trama más compleja, cuyo punto de partida fue un episodio de reciente data: el secuestro de Juan Manuel Canilla. Ocurrió el 12 de julio y pasaría a la historia por ser el primer "secuestro express" que tuvo un epílogo fatal, con el agravante de que sus padres habían pagado el rescate.

A la conexión causada por el asesinato no tardó en sumarse un hombre petiso y calvo, quien incesantemente acariciaba su tupido bigote. Era el jefe de la Departamental de Investigaciones de San Isidro, comisario Aníbal Degastaldi, cuya jurisdicción abarca la zona en la que se cometió el crimen.

En esa ocasión, Degastaldi accedió a la requisitoria periodística con un semblante que lucía entre desencajado y furioso.

— Fue un delito aberrante, una cosa totalmente salvaje — aseveró, antes de dar por concluida la conferencia de prensa.

Aseguran en su entorno que, a partir de ese momento, algo pareció haberlo afectado. El sombrío final del chico Canilla era un tema que lo ponía sumamente nervioso. "Fue gente que se zarpó", se confió por aquellos días a un veterano cronista policial. Pero no dijo más. Parecía atesorar un secreto que de ningún modo debía revelar.

Recientemente, una fuente vinculada a la investigación deslizo la posible complicidad en ese secuestro de "policías de la seccional de Victoria, y su participación habría consistido en el encubrimiento". También aportó el apellido de un sargento.

Degastaldi había incrementado su prestigio al investigar los secuestros del hermano de Renán Riquelme, Cristián, y el del ex jugador de rugby, Federico Virasoro, entre otros. Justamente, su consagración se produjo el 4 de abril, cuando en su oficina de la Departamental congregó a cronistas de todos los medios para anunciar la liberación del hermano de Riquelme. "El pibe fue liberado a esc de las cuatro de la madrugada, luego de que su familia pagara el rescate, pero no tengo información sobre el monto", informó, esbozando una amplia sonrisa bajo su bigote.

"Degastaldi tiene absoluto conocimiento sobre todos los secuestros que se hacen en San Isidro", dijo aquel hombre, antes de prender un cigarrillo.

La frase fue una introducción, que su autor estiró con unos segundos de suspense. Finalmente, con un deje de ironía, agregó: "Don Aníbal está en todas partes", y largó una risa quejumbrosa.

Se trataba de un agente de inteligencia, que había participado del operativo conjunto entre la SDF y La Bonaerense para detener a Félix "El Boli" Díaz, un integrante de la banda que secuestró a Riquelme. El hombre conocía la cocina de esa investigación y también las sospechas sobre Degastaldi. Según sus dichos, el jefe de la DDF de San Isidro tuvo una tarea relevante durante las negociaciones mantenidas por la familia Riquelme y los secuestradores, pese a que la policía trabajaba de oficio, por no existir denuncia.

— ¿Cuál fue esa tarea relevante de Degastaldi?

— Buena, él se encargó de llevar el rescate a los secuestradores. O sea, la familia le entregó un balse con 160.000 dólares, que él en la comisaría se encargó de contar. Nunca se supo el destino de esa suma. El comisario, desde luego, asegura que se la entregó a los secuestradores. Pero nadie lo vio.

— ¿Es habitual que un comisario sea el encargado de entregar el rescate?

— No. Salvo en San Isidro. Allí es una costumbre. En el secuestro de Virasoro, el comisario Degastaldi también se llevó los 50.000 dólares de rescate. Y claro, en este caso también subyacen dudas.

El ex jugador de rugby fue liberado el 5 de julio, tras nueve días de cautiverio.

Según el entrevistado, se habrían detectado "llamadas supuestamente efectuadas por los secuestradores nada menos que a los teléfonos de Degastaldi". Es decir, al directo suyo en la DDF y a sus dos celulares. También habría llamadas efectuadas entre los secuestradores y cuatro oficiales a las órdenes de Degastaldi. "Con ese elemento de prueba, cualquier juez los podría llamar a indagatoria", concluyó.

Se trata sólo de entrecruzamientos telefónicos, y no de escuchas propiamente dichas. Eso significa que únicamente se puede constatar la existencia de interlocutores y la frecuencia de las llamadas entre ellos. Pero no el cariz de sus conversaciones, ya que no hay registros textuales. Según parece, la aplicación de ese Excalibur fue ordenada por el juez de la causa, Roberto Marquovich, de quien se sabe que ya tuvo una reunión sobre el tema con el ministro de Seguridad.

Casiero y Saín iban comprendiendo a pasos agigantados la naturaleza ingobernable que animaba a la fuerza policial más numerosa del país. Pero aún les costaría advertir algunas entrelíneas en los legajos que han jurado revisar.

El 29 de julio de 2002, Juanpi Casiero firmó los ascensos de los efectivos del Comando de Operaciones Policiales, y puso como director al comisario Oscar Bogeljuk. Era el mismo que en 1999 había sido relevado del cargo de subjefe de la Departamental de Mercedes por encubrir a piratas del asfalto. Según consta en los expedientes internos de la fuerza, este y otros comisarios realizaban falsos procedimientos de control de camiones y vehículos de carga, además de liberar zonas y proteger galpones donde se almacenaba mercadería robada.

Bogoliuk se benefició con la llegada de Carlos Ruckauf a La Plata. Volvió a estar en circulación y convirtió en sub-jefe de Seguridad en la Departamental Mar del Plata. Así nuevamente incurrió en un desliz: los fiscales comprobaron que urdió una maniobra para encubrir a los policías acusados del asesinato de Natalia Mellman, además de facilitar la huida del único civil sospechado en la causa, Gustavo "Gallo" Hernández.

Aún más rápido fue el trámite reivindicatorio del sub-comisario José Alberto Fernández, de la Dirección de Delitos Complejos de Lomas, quien fue detenido por extorsionar a un empresario cuando encabezaba la investigación por el secuestro de Diego Peralta.

Había sido puesto en disponibilidad preventiva. La medida interna significaba que el comisario no podía usar su arma reglamentaria, no tendría destino dentro de la fuerza y cobraría la mitad del sueldo hasta que su situación se resolviese. Con la firma de Sobrado y Cafiero, la disposición fue levantada en la primera semana de septiembre.

En la institución todos tienen su segunda oportunidad.

III

EL VUELO DEL FÉNIX

Una vida que define la esencia de La Bonaerense es la del oficial principal Orlando María Camaño.

Su historia no es la de un "peronga" que acaricié la encrespada textura del poder ni el de un exagerado enriquecimiento ilícito. Por el contrario, su saga flota entre el ancinmate de sus jinetas intermedias, el oscuro ingenio que hace falta para sobrevivir en un mundo así y la habilidad para permanecer, contra viento y marea en el punto donde se cruzan las miserias de los tres poderes del Estado. Siempre haciendo del oficio policial el arte de lo posible.

Caía la tarde del viernes 6 de diciembre de 1996 y en el despacho del juez Emilio Villamayor, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, flotaba un clima tenso. El magistrado tenía los ojos clavados en una orden de allanamiento que pocos segundos antes había terminado de escribir. La leyó una y otra vez, tratando de detectar algún error. Por un momento dudó en firmarla.

—Sabemos que el tipo está en su casa, doctor— dijo, con voz impersonal, un hombre que permanecía de pie junto a él.

Vestía un impecable blazer azul y usaba gafas de lectura; tenía aspecto de contador, aunque se trataba de un subcomisario de la Policía Bonaerense.

Era la época del secretario de Seguridad, Eduardo De Lazzari.

La historia que los ocupaba había comenzado a fines de noviembre de ese año, cuando la Fiscalía de Cámara de La Plata giró hacia el juzgado de Villamayor una denuncia efectuada por una persona que exigió mantener su identidad en reserva. El denunciante sostuvo que "había tomado conocimiento de que en una dependencia policial se había cometido un importante robo de documentación referida a sistemas de seguridad bancaria, presumiblemente para su venta o entrega a bandas delictivas dedicadas al tema". También aportó el nombre del supuesto autor de la maniobra.

Este no era otro que el oficial inspector Orlando María Camaño, que se desempeñaba como segundo jefe de la División de Seguridad Bancaria de La Bonaerense. Se trataba de alguien que, para su edad —tenía 32 años—, había protagonizado una meteórica carrera. Luego de cursar estudios en un colegio técnico de La Plata ingresó a la Escuela Juan Vucetich, de donde salió como oficial ayudante en 1985. Sus primeros años dentro de la fuerza transcurrieron en la órbita de la policía montada. Quienes lo conocieron en aquel tiempo aseguran que ese ámbito moldeó sus hábitos: años después se presentó en Seguridad Bancaria, su siguiente destino, luciendo uniforme con botas de caña alta y breeches de montar.

Cultivó una feja sin tachas, sin desatender su formación profesional: en 1993 se recibió de perito en Seguridad Bancaria y, en julio de 1996, obtuvo un título de licenciado en Seguridad, expedido por el Instituto Universitario de la Policía Federal. En esa época, con su diploma a cuestas, se convirtió en la mano derecha del jefe de la división, comisario Carlos Tulesco. Camaño también se volcó a la actividad privada: el comisario retirado Ednir Lorenz, jefe de seguridad del Banco Municipal de La Plata, lo convocó para encabezar su gabinete de asesores.

En ese momento, Camaño fue puesto bajo la lupa judicial.

El juez Villamayor seguía frente a su escritorio, cavilando. Sin apartar la vista de la hoja, se alisaba cada tanto su canoso flequillo con la mano. Luego, con esa misma mano, estampó su apellido al pie del documento. Ese acto disipó la expresión desganada de su rostro; era consciente de que acababa de efectuar el primer movimiento de una investigación judicial que podría tener derivaciones imprevisibles.

Poco después de las 20 de ese mismo viernes, tres automóviles atravesaron sigilosamente las calles del barrio platense de Los Hornos, hasta llegar al 2700 de la calle 67. Allí frenaron y de ellos descendieron diez hombres vestidos de civil, la mayoría empuñando armas cortas. La vez cantante la tenía el subcomisario que había estado en el despacho de Villamayor. Lo acompañaba una mujer; era una funcionaria del juzgado.

Ambos contemplaron la casa que debían allanar. Se trataba de una construcción de dos plantas, típica de la clase media

suburbana. Las luces del comedor estaban encendidas y también se oía la voz monótona de un relator televisivo de fútbol. Los otros policías tomaron posiciones alrededor del inmueble, mientras uno de ellos cargaba una pesada máquina de escribir. En la calle reinaba un silencio sobrecogedor, que se rompió cuando los nudillos del subcomisario golpearon la puerta.

La voz del relator televisivo bajó su volumen y se escucharon unos pasos, de zapatos de tacón, avanzando hacia la puerta. Quien los daba retardó su llegada todo lo que pudo y simuló tener dificultad para girar la cerradura. Finalmente abrió. Para entonces ya habían pasado más de dos minutos.

En ese mismo lapso, algunos vecinos vieron al dueño de casa trepar la medianera del fondo, vestido únicamente con calzoncillos y ojotas. Lo hacía dificultosamente, ya que llevaba un portafolio en cada mano. Ambos parecían estar cargados de papeles. Los vecinos también vieron cómo, tras arrojarse esos objetos al baldío, el hombre volvía a su casa.

Tamaño recibió a la comisión policial con aspecto sudoroso y embarrado. Jadeaba; la celeridad con la que se deshizo de los portafolios le demandó un gran esfuerzo físico. Los visitantes no pudieron recuperar esas pruebas, ya que la orden de allanamiento sólo se refería a esa casa y no al baldío contiguo. Sin embargo, no se fueron con las manos vacías.

El procedimiento en el domicilio de Tamaño se prolongó durante casi cuatro horas. Fueron secuestradas varias carpetas y cajas atiborradas de documentación. Ésta iba desde partes policiales reservadas, hasta expedientes no menos reservados del Banco Central, pasando por planos de tesorería de sucursales bancarias, detalles de construcción de sus bóvedas, croquis de instalación de alarmas, sensores, circuitos cerrados de televisión y garitas de seguridad, con sus respectivas comprobaciones de resistencia frente a armas de grueso calibre. En total, Tamaño atesoraba en el attico de su casa información secreta de por lo menos 50 sucursales bancarias. Gran parte de ella era documentación original. Pero el hombre no fue detenido. Su abogado, que llegó en pleno allanamiento, ni siquiera tuvo que interceder para lograrlo: no había orden de captura.

Ya corrían los primeros minutos del sábado cuando los policías terminaron de cargar en sus autos las cajas y carpetas secuestradas. Tamaño, quien se había negado a relevar la clave de tres CPU que también habían sido secuestradas, sólo mantuvo diálogos triviales con los efectivos que intervenían en el allanamiento. Luego, recostado junto a su esposa sobre el marco de la puerta, los vio partir con un brillo ambiguo en la mirada. Seguía en calzoncillos y ojotas.

En los días siguientes, el juez Emilio Villamayor se hizo un espacio en su agenda para planificar las futuras actuaciones de la causa. Decidió impulsarla con los botines de punta, luego de comprender que habría sido más difícil declarar su incompetencia que darle curso al expediente. En realidad no tenía demasiadas presiones encima; el asunto no se había filtrado públicamente y, en consecuencia, los medios desconocían el proceso judicial que tenía como protagonista al segundo jefe de Seguridad Bancaria.

Sin embargo, el juez sabía que el procedimiento efectuado en Los Hornos y el tenor de los elementos allí secuestrados habían causado cierto ruido, tanto en círculos policiales como en el ámbito político.

Quien se mostró particularmente interesado en la causa fue el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri. Fuentes vinculadas a él y también otras relacionadas al Juzgado N° 8 de Lomas de Zamora coinciden en afirmar que, en los últimos días de 1996, Pierri y Villamayor se encontraron, por iniciativa del primero. Nadie pudo echar luz sobre la naturaleza de esos cónclaves ni tampoco imaginar los temas que ambos abordaron. Pero no deja de resultar curioso que a partir de entonces el juez decidiese, intempestivamente, cajonear el expediente. No se efectuaron nuevas diligencias, la citación de testigos fue cancelada y, por último, la investigación sobre Tamaño quedó prácticamente sepultada en la misma habitación donde la humedad y los ratones corren la pila de papeles secuestrada en su hogar.

La afinidad entre el juez Villamayor y Pierri es pública y notoria en los pasillos del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Precisamente fue el hombre fuerte de La Matanza quien, en 1992, impulsó en la esfera legislativa los pliegos para convertir a Villamayor en magistrado. Quedaba por desentrañar el motivo por el cual Pierri se habría aventurado a interceder por el oficial Orlando Tamaño, a quien no conocía.

La respuesta a este interrogante posiblemente se halle en la figura de Eduino José Lorenz. Se trata de un comisario general retirado, que hizo gran parte de su carrera durante la dictadura y que, ya en la transición hacia la democracia, ocupó

la jefatura de la Dirección de Inteligencia de la policía provincial. Dicen que algunos integrantes de la dirigencia política bonaerense se deben favores, ya que Lorenz habría quemado sus prontuarios ideológicos y penales. También aseguran que entre sus agradecidos figura el ex intendente de La Plata, Julio Alak, quien durante su gestión aceptó a regañadientes nombrar a Lorenz como jefe de seguridad del Banco Municipal.

Al parecer, en el otoño de su vida, el comisario había conseguido el nombramiento que deseaba. Pero como no sabía nada sobre seguridad bancaria, contactó a Camaño, que sí era un experto en el tema, para que efectuara el trabajo real de su gestión. Su ingreso a la nómina del Banco Municipal ocurrió a mediados de 1996; el allanamiento a su casa, seis meses después.

Es posible que, para no verse sospechado por el escándalo, el alto jefe retirado haya intercedido ante "las más altas esferas", para diluir la situación de su mano derecha. Lorenz no sólo habría recurrido a Pierri, sino también al entonces subjefe de La Bonaerense, Domingo Lugos, para que a Camaño no le abrieran un sumario administrativo. Algunos efectivos de la hoy disuelta Dirección de Asuntos Judiciales afirman que el entonces jefe de esa dependencia, comisario Enrique Bretznaider, recibió instrucciones en tal sentido.

Lo cierto es que, desde entonces, el policía Camaño no fue molestado por ninguna otra urgencia judicial. Tampoco sufrió sanciones disciplinarias dentro de la fuerza, aunque fue apartado de Seguridad Bancaria. Durante los dos años siguientes prestó servicios en la comisaría 1° de La Plata —un típico "traslado de protección", como se dice en la jerga policial—, hasta que, el 3 de febrero de 1999, en plena reforma de León Arslanián, fue ascendido a oficial principal. En ese momento obtuvo un premioso destino: la subjefatura de la Dirección de Planeamiento. Allí dependía directamente del ministro León Arslanián y, paradójicamente, una de sus funciones era la de diseñar proyectos de seguridad bancaria.

Como una suerte de Ave Fénix, la investigación por la documentación bancaria que estaba en poder del oficial Orlando Camaño fue exhumada de las catacumbas judiciales, como efecto colateral de otra pesquisa: la que realiza actualmente la División de Asuntos Internos de la Policía Federal sobre dos funcionarios de Seguridad Bancaria, a raíz de tres importantes robos en los bancos Supervielle, Ciudad y BNL.

Paralelamente, en esos días se conocieron los pormenores de otros dos asaltos a sucursales bancarias, perpetrados en el conurbano bonaerense. Se trata de las sucursales de la BNL de Pilar y el Credicop de Arrecifes. En ambos casos los ladrones parecían conocer las instalaciones bancarias como la palma de sus manos. Pocos días después fue detenido el presunto entregador del primer hecho: un suboficial del Comando de Patrullas. En cuanto a lo de Arrecifes, el Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense abrió un sumario interno, ya que se sospecha que los asaltantes contaban con el beneficio de una "zona liberada": sin motivo aparente, el móvil y la custodia policial no estaban en el momento del robo. En ese contexto, los hallazgos efectuados en el ya remoto allanamiento de la casa ubicada en el barrio de Los Hornos saltaron a la luz de manera profusa, pero contundente, junto a los interrogantes sobre la paralización de esa causa.

Un dato interesante es que algunos de los planos e informes bancarios decomisados por Villamayor correspondían a sucursales que sufrieron asaltos en la época que Camaño las tenía en su poder.

Ese es el caso de la sucursal General Villegas del Banco Provincia.

Camaño guardaba en una carpeta un juego de fotocopias de planos de bóveda, ubicación de garitas y sistemas de alarmas de esa sucursal, con fecha del 12 de diciembre de 1995. Además atesoraba el original del expediente 0046, con características y fotos del tesoro, fechadas un mes después. La sucursal del Banco Provincia de General Villegas fue asaltada el 7 de julio de ese mismo año por un grupo comando que parecía conocer al dedillo las instalaciones del lugar.

El archivo privado del oficial inspector también contenía copias de notas fechadas en julio de 1996, con datos referentes a la estructura de seguridad de la sucursal José Ingenieros de esa misma entidad bancaria. El asalto a esta sucursal se produjo el 29 de octubre de ese año, y en su transcurso cayó gravemente herido un policía.

A Camaño también le fue secuestrado el original del Acta de Constatación de las características de seguridad de las sucursales Hurlingham y Castelar Norte, del Banco del Buen Ayre. La primera sufrió un asalto el 9 de octubre de 1996, en tanto que el local de Castelar Norte fue robado el 25 de noviembre.

En ese tren de coincidencias figura una extensa nota —N° 539/96— de la División de Seguridad Bancaria y dirigida al Banco Central, que contiene una descripción minuciosa de las características de seguridad general imperantes en todas las sucursales del Banco de Crédito Provincial, Río y Quilmes. Por lo menos seis entidades mencionadas en ese documento fueron asaltadas entre el 3 de enero de 1996 y el 16 de junio del año siguiente.

Estas son sólo algunas de las similitudes trazadas entre el banco de datos que coleccionaba Tamaño y la fría agenda de los hechos policiales. La cantidad real de tales coincidencias descansa bajo el manto polvoriento de un archivo que fue olvidado antes de clasificarse y que, ahora, tal vez ya haya sido devorado por las ratas.

Mucho tiempo después de tales peripecias, el 23 de agosto de 2002, con la firma del ministro Juan Pablo Cafiero, se aprobó "la realización de Mapeo y Análisis delictivo en el ámbito de la Dirección General de Evaluación para la Prevención del delito". Como responsable de la base de datos y apoyo del software fue designado nada menos que el oficial principal Orlando Mario Tamaño.

Legajo por legajo.

Para garantizar la seguridad y servir a la patria. Legajo por legajo de una historia con irremediable final abierto.

Buenos Aires, 9 de octubre de 2002.

AGRADECIMIENTOS:

Debido a alguna extraña maniobra del azar, este libro se terminó de escribir al cumplirse exactamente un lustro del fallecimiento de mi amigo Carlos Dutil, con quien en junio de 1997 publicamos La Bonaerense. Historia Criminal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Desde entonces esa institución no ha cesado ni un solo día en desparramar sorpresas, consumando así otra historia que merecía ser contada.

Por eso, mi agradecimiento está dado a todas las personas que en esta travesía estuvieron cerca de mí.

A Patitas, un sobreviviente.

A Renin, jefe de Inteligencia de este libro, por su amistad y disposición.

A Leo Álvarez y Antonio Lizzano, compañeros de viaje en algunos tramos de esta aventura.

A Pablo Chacón, con quien en una mesa del Británico, se diseñó el puntapié inicial.

A Pablo Trapero, que algo sabe de este libro.

A Nacho y al Negro Alejandro, verdaderos relojes biológicos de su escritura.

A mi vecino Cristián Marcón y Andrea Sajnevsky. Al Petiso Osvaldo y Cyntia.

A Rodolfo Yanzón y Fea Treus.

A Cacho Nevea.

A Matías Campaya, por alguna tarde con chaleco antibala en la Triple Frontera.

A los archiveros de Atlántida Carlos Jiménez, Marcos Berghetti, José Marchese y Gabriel Mucio.

A Duhalde, no el Presidente, sino el otro.

A Mario Meldeván y Rubén Furman

A Gabriel González y a todos mis compañeros de Gente.

A Javier Calvo y Jorge Sigal, Hernán Brienza y Gonzalo Álvarez Guerrero, Adrán Murano, Abel Balbo, Marcelo Dimango y Facundo Pastor Andrés Kipham, Javier Avena y Roberto Caballero.

A Miguel Benasso, Eduardo Aliverti, Jorge Beinstein, Fabián Amice, Herman Schiller, Gabriel Levinas y Horacio Verbitsky.

A María del Carmen Verdú y Daniel Stragá.

Al Negro Abel, por el abastecimiento.

Al misterioso señor Relando Mota.

A todos los que se animaron a hablar y cuyos nombres no pueden figurar en este libro.

ÍNDICE

<i>Introducción</i>	4
1. BRANCALEONE EN LAS CRUZADAS	5
<i>I. El desembarco</i>	6
<i>II. La debacle</i>	10
<i>III. El delator</i>	12
<i>IV. Lluvia de grada</i>	13
<i>V. El restaurador</i>	15
<i>VI. Las escuchas</i>	17
2. RAPSODIA EN AZUL	19
<i>I. Bautismo de fuego</i>	20
<i>II. La intromisión</i>	21
<i>III. Los humanos</i>	22
<i>IV. Perfil de mercado</i>	23
<i>V. La empresa</i>	26
<i>VI. Magia cotidiana</i>	28
3. LEY DE JUEGO	30
<i>I. La venganza</i>	31
<i>II. Efecto dominó</i>	33
<i>III. Retrato de familia</i>	34
<i>IV. El asunto</i>	36
<i>V. El tesoro de París</i>	39
<i>VI. El amante de la gabardina</i>	40
<i>VII. Sinfonía macabra</i>	42
4. LA GUERRA	44
<i>I. La última estación</i>	45
<i>II. Primera plana</i>	48
<i>III. La celada</i>	50
<i>IV. Blues del terror azul</i>	52
<i>V. Terminator</i>	54
5. CANTOS DE SIRENA	57
<i>I. Los hombres del Presidente</i>	58
<i>II. Magia china</i>	61
<i>III. El Gordo y el Flaco</i>	64
6. VIÑAS DE IRA	68
<i>I. Día de furia</i>	69
<i>II. La noche del cazador</i>	71
<i>III. La danza de los suicidas</i>	73
<i>IV. Club de Amigos</i>	75
<i>V. El León en invierno</i>	78
<i>VI. Hombres de recambio</i>	81
7. SEPTIEMBRE NEGRO	82

<i>I. Decisión patriótica</i>	83
<i>II. Piedra libre</i>	86
<i>III. A quemarrepa</i>	88
<i>IV. La conversación</i>	91
<i>V. Backstage</i>	93
8. NOCHE Y NIEBLA	96
<i>I. El hombre que ríe</i>	97
<i>II. Marea azul</i>	102
9. LEGAJO POR LEGAJO	107
<i>I. Recuerdos del presente</i>	108
<i>II. Secuestros S. A.</i>	112
<i>III. El vuelo del Fénix</i>	115